



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010

Yopo Herrera, M.D.

Citation

Yopo Herrera, M. D. (2013, October 2). *Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/21849>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/21849>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/21849> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Yopo Herrera, Mladen Daslav

Title: Concertación de partidos por la democracia : coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010

Issue Date: 2013-10-02

Capítulo 4

Normalidad institucional y profundización democrática

En este capítulo analizo la normalización institucional y el ascenso al poder del presidente Ricardo Lagos, el primer socialista que asume la presidencia desde el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973. Constató cómo este hecho pone a prueba varios de los clivajes, así como una nueva debilitación del partido de centro (la DC) que testea la solidez de la coalición. En este período (2000-2006), se planteó un giro en la narrativa política (y por lo mismo en la cultura estratégica) que combina, en una conjunción difícil y no siempre lograda, de igualdad con modernidad con efectos en la cohesión de las coaliciones y en las imágenes partidarias. La normalización democrática y la consecuente pérdida de los miedos, junto a una positiva performance económica, produjo una cierta interpelación a la gradualidad y reformismo de la coalición (se afianza la discusión entre *autofragelantes* y *autocomplaciente*) y que se representó con un cierto castigo electoral que obliga a una segunda vuelta presidencial.

Para estas alturas y como un signo de normalidad, se interpeaban los ritmos y profundidades de la misma democratización a partir de las dificultades y complejidades que planteó la propia transición. Tal como lo señala Hunneus [2009:250] se estaba frente a un adversario que no colapsó por el fracaso en su gestión económica o por la derrota en una guerra, sino por la regulación sucesoria consagrada en la Constitución de 1980. Esto, junto a las limitaciones y efectos que imponía la Carta Magna, generó un escenario de avances regulados muy difícil para la gobernabilidad de la democracia.

En este mismo capítulo, reflexiono sobre el gobierno de la primera mujer que llegaba a la presidencia de la República en Chile, Michelle Bachelet Jeria, y el cambio de paradigma que reflejó su elección en la tradicional sociedad chilena. Veremos cómo el cambio producido hacia un modelo más democrático y progresista en un amplio sentido, si bien instala en el imaginario público y sus sentidos la idea de un “path único” representado en “el gobierno ciudadano” propuesto por la Presidente Bachelet (la gente se siente empoderada y con más derechos), no necesariamente se logra sobrepasar los condicionamientos que impone la fractura originaria con las políticas de igualdad y libertad impulsadas. Esto, al final, termina interpeando fuertemente al sistema de partidos sin afectar la institucionalidad democrática (pero sí la legitimidad de sus

instituciones) y explicaría, entre otros, la irrupción del presidente Piñera con un discurso desnaturalizado de su anclaje político y empresarial (más progresistas y populista), la baja y/o declinación de la Concertación como alternativa política y una rearticulación inicial de la ciudadanía y movimientos gremiales.

4.1 Lagos y los límites del primer presidente socialista

En 1999 fue bastante más fácil descartar los acuerdos guiados por el principio de la alternancia, por los derechos adquiridos o por la primacía de alguna forma de medición (encuestas y primarias). En mayo de 1998 ya había un acuerdo para impulsar un proyecto de primarias y en noviembre del mismo año ya los partidos de la Concertación habían concordado abrirlas a toda la ciudadanía para elegir al candidato presidencial. A pesar de no existir la presión que implica una elección parlamentaria al mismo tiempo, era un gesto democrático que respondía a la demanda unitaria de quienes se identificaban con la Concertación en un contexto desafiado por la crisis económica (asiática) y el crecimiento de la derecha.

Se trataba ahora de una elección en la que podían participar todos los ciudadanos inscritos en los registros electorales (lo que incentivaba también a inscribirse), con la sola excepción de los afiliados legales a partidos que no pertenecían a la coalición de gobierno. Sin ningún procedimiento de inscripción previa y sin mecanismos posteriores, el resultado de la elección determinaría al candidato presidencial de la Concertación.

Concurrieron a votar la suma de 1.403.070 personas a lo largo del país, convirtiéndose en la movilización ciudadana más grande convocada por una fuerza política en la historia de Chile. En ella, Ricardo Lagos PS-PPD obtuvo 71.4 por ciento y Zaldívar DC el 28.6 por ciento de los votos, reafirmando las adhesiones que mostraban ambos candidatos en las encuestas. Tal como en 1993, esa misma tarde Ricardo Lagos fue proclamado por Andrés Zaldívar como candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia y futuro Presidente de Chile en segunda vuelta en una elección considerada crítica.

Los molestos y frustrados con la continuidad del modelo, una cierta dispersión del voto con seis candidatos que hablaban del cambio y la recesión económica de 1999 (–1,0 por ciento de caída del PIB), más, como dice Tironi (1997: 144), el “intento de un voto personalizado (...) donde los electores eligen en función de aquellos rasgos de los candidatos que les resultan atractivas en la coyuntura de la elección, sin mayor

referencia a lealtades históricas, ni a disciplinas políticas de partidos y coaliciones...”, no parece mala explicación de las dificultades que padeció Ricardo Lagos, primer presidente socialista de la Concertación y primero también que no fue electo en primera vuelta a diferencia de su antecesor Eduardo Frei (ver Cuadro 14).

Cuadro 14		
Elección presidencial de 1999, primera vuelta		
Candidatos	Votos	Porcentaje
Arturo Frei Bolívar	26,812	0.38%
Sara María Larraín Ruiz-Tagle	31,319	0.38%
Gladys Marín Millie	225,224	3.19%
Tomas Hirsch Goldschmidt	36,235	0.5%
Ricardo Lagos Escobar	3,383,339	47.96%
Joaquín Lavín Infante	3,352,199	47.51%
Validamente Emitidos	7,055,128	100%

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University-OAS.

Sin embargo, como se vería más adelante, la participación fue lo suficientemente alta como para pensar que el viejo electorado del No seguiría fiel y oponiéndose al regreso de la derecha al gobierno en Chile por vía electoral (los casi 4.5 puntos de los otros candidatos pertenecen al mundo centro-izquierda). Otro factor que pudo incidir en no haber alcanzado una mayoría absoluta (50 por ciento más 1) en la primera vuelta, fue la instalación del balotaje, lo que permite el voto de protesta como representación de un sentido más originario y purista de la representación sin por ello favorecer al candidato considerado “adversario principal” y usar el balotaje para resolver el dilema estratégico: precisamente allí se impuso Lagos sobre Lavín con una superioridad suficiente (ver Cuadro 15).

Lo que sí constituyó un factor nuevo fue la crisis electoral de la DC.¹ Este partido registró una caída de su votación al 20 por ciento en las elecciones legislativas de diciembre de 2001 y perdió el título de partido mayoritario ante el ascenso de la derechista UDI.² Este resultado llevó a pensar que se podrían generar importantes

¹ Desde que Eduardo Frei Montalva fue electo Presidente en 1964 con un 56,09 por ciento de los votos, la Democracia Cristiana había sustentado el rol de partido mayoritario en Chile. En las elecciones parlamentarias del 2001 pierde esta condición al obtener la UDI un 25,18 por ciento de los votos frente al 18,92 de la DC. Esta situación se repite en las elecciones parlamentarias del 2005: UDI 22,36 por ciento y DC 20,76 por ciento.

² Interesante al respecto es el trabajo de Carlos Hunneus (2001) “La derecha en Chile después de Pinochet. El caso de la Unión Demócrata Independiente”, *Working Paper* N° 285, Kellogg Institute.

tensiones al interior de la Concertación, sin embargo, la coalición estaba suficientemente afiatada (existía una cultura concertacionista fuerte) y se presupuestaban las retribuciones (prebendas) que ofrece el estar en el gobierno para sortear esta baja electoral (Luebbert, 1983: 244; 1986: 46). El propio presidente Lagos recibió estas retribuciones cuando se bajo en la primera disputa presidencial en la transición y luego cuando pierde la circunscripción senatorial con Andrés Zaldívar (DC): en ambos casos fue nominado ministro.

Cuadro 15		
Elección presidencial de 1999, segunda vuelta		
Candidato	Total	Porcentaje
Ricardo Lagos (Concertación)	3,683,158	51,31
Joaquín Lavín (Alianza por Chile)	3,495,569	48.69

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University – OAS.

Carey y Siavelis (2003: 12-15) proporcionan un interesante modelo de categorías para recompensar a los “second best” de la Concertación con cargos en el Ejecutivo. Entre estas, en primer lugar está el tipo de cargo con que se premia a los subcampeones. Es claro que hay cargos más valiosos que otros y que hay subcampeones que merecerán unos y hay subcampeones que merecerán otros o solo un reconocimiento verbal.

En segundo lugar, está el hecho de si el segundo de la lista fue candidato a diputado o a senador. Hay que considerar que en la política chilena las candidaturas senatoriales son muchas más importantes que las postulan a la Cámara baja, en parte porque el Senado es percibido en general como parte de un proceso ya recorrido y como plataforma de lanzamiento de las candidaturas presidenciales. A su vez, los candidatos reclutados para competir por los asientos del Senado son individuos más prominentes en términos políticos y, generalmente, también monetarios, lo cual tiene dos implicancias. Por una parte, su experiencia y preparación indican que tienen “calibre ministerial” y, por la otra, los candidatos al Senado que poseen altas credenciales cuentan con atractivas opciones en el ámbito privado y/o no político, de modo que para inducirlos a emprender una campaña riesgosa el “seguro” para los subcampeones tiene que ser más generoso que el ofrecido a los candidatos a diputados.

En tercer lugar, nos muestra el desempeño de las listas de la Concertación con respecto a las de la derecha. En este sentido, es de esperar que un candidato que

pertenezca a una lista que estuvo a punto de doblar a su rival pero no lo consiguió tenga más probabilidades de ser bien recompensado con un cargo importante que un candidato cuya lista apenas consiguió un escaño.

Por último, está el desempeño de los dos candidatos dentro de una misma lista. Cuanto más cerca haya estado el subcampeón de conseguir la cantidad de votos que consiguió su compañero de lista, más posibilidades tendrá de ser bien recompensado. Contrariamente, si su contribución a los votos totales de la lista ha sido muy pobre, será difícil obtener un buen seguro. Sin embargo, esta hipótesis inspira menos confianza debido al hecho de que fomentar la competencia entre miembros de una lista puede ser pernicioso para la propia lista y de la coalición. Por lo mismo, la coalición tal vez prefiera hacer hincapié en el desempeño colectivo de la lista ofreciendo un buen “seguro” para los que salgan subcampeones.

Según estos mismos autores, la política de “seguros” mediante cargos asignados por el Ejecutivo se aplicó sistemáticamente como una manera de atraer a candidatos poderosos para que participaran en campañas reñidas, y de recompensar a quienes actuaron con coraje defendiendo una causa perdida. La DC fue bien recompensada en la amplia oferta de los cargos del Estado, por cierto manteniendo el equilibrio con el mundo laico-socialdemócrata de la Concertación.

En un contexto de cambio cultural profundo en el país, al menos cinco factores explicarían esta baja porcentual de la Democracia Cristiana, a pesar de que fue la izquierda concertacionista la que hipotecó más amplia y profundamente sus propuestas originarias. Primero, que el candidato presidencial no haya sido de sus filas. Segundo, que tras el gobierno del presidente Frei, la DC haya sido estigmatizada como retardataria de cambios valóricos y sociales. Tercero, negociaciones distritales no óptimas. Cuarto, que haya llevado algunos candidatos no atractivos para los tiempos. Por último, la existencia de una derecha populista que se empalmaba bien con el discurso menos ideologizado para el mundo periférico (no militante) de la DC (principalmente RN le competía por los electores de centro menos ideologizados).

Al hablar del legado del modelo de la dictadura transcurridos 10 años desde el retorno a la democracia, los rasgos que más resaltaron durante el gobierno de presidente Lagos se ligaron, en primer lugar, a una gran concentración económica con efecto en la distribución de ingresos y en la imposibilidad de forjar una sociedad de garantías de bienes públicos universales como lo mencionaría el propio presidente Lagos como una de sus aspiraciones. Esta realidad, por cierto, trasciende en los tiempos a este gobierno

como lo consagra Juan Pablo Orrego al tratar de explicar del porqué surge y se expresa la indignación de la sociedad en el 2011. Dice que:³

“(…) si observamos el comportamiento de los tres clanes familiares –Angelini, Luksic, Matte- que dominan los pilares estratégicos de la economía (…) descubrimos con asombro que al medio de todas las crisis éstos no paran de crecer. El clan Luksic ha llegado a controlar un número impresionante de empresas líderes en áreas tan variadas como minería, industria, construcción, finanzas, transporte, alimentos y comunicaciones (…) Recientemente, el clan compra, con total soltura de cuerpo, el 18 por ciento de la Cía. Sudamericana de Vapores, el 67 por ciento del Canal 13 TV, todas las estaciones Shell de Chile y luego todas las de Argentina (…) El grupo Angelini muestra un (patrimonio despliegue similar) en el sector forestal, en combustibles, en el sector pesquero, en el eléctrico, participa en puertos, en minería y en tecnología (…) El clan Matte sigue con una participación similar en áreas y número de empresas (…) El lucro excesivo permite el crecimiento sostenido y desmedido de estos grupos familiares/económicos (…)”.

También resalta un fuerte conservadurismo moral, en buena parte por el intocado ascendente de la Iglesia Católica chilena en la política, la que si bien renueva su rol al abrigar la defensa de los derechos humanos (particularmente la vida) durante la dictadura, mantuvo las tradicionales posturas restrictivas en el ámbito valórico (clivaje Iglesia-Estado). Esto tuvo el efecto de generar una situación disonante entre el desarrollo y la realidad social y la legislación vigente en los llamados temas valóricos, donde seguían excluidos el divorcio, la educación sexual en los colegios, la píldora anticonceptiva del día después, el derecho de las minorías sexuales, el uso del condón en las campañas anti Sida, el aborto terapéutico y en general una serie de expresiones liberales y/o reales del mundo moderno (separaciones, familias monoparentales hasta los derechos de la mujer o fertilización in vitro, etc.).

En el caso de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), por ejemplo, el intento del gobierno de Ricardo Lagos y la Concertación por generar un espacio en los colegios para hablar de sexualidad a partir de realidades como el crecimiento del embarazo adolescente o el SIDA, generaron declaraciones de la

³ Juan Pablo Orrego, ¿Y qué hacemos con el lucro fuera de la educación?, blogs.cooperativa.cl, de 18 de septiembre de 2011.

Iglesia Católica del tenor de las realizadas por el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Cristián Caro:⁴

“Detrás de todo esto (las JOCAS) hay poderosos intereses económicos que quieren promover la venta de anticonceptivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos, que manda los desechos de preservativos. Hay una campaña económica poderosa y también política para disminuir las familias en el Tercer Mundo y para que los países del Primer Mundo, que ya no tienen hijos, mantengan la supremacía. Porque ven que si nuestros países, que tienen más hijos, siguen creciendo, van a perder ellos el control político”.

En estas situaciones si no intervenía la Iglesia Católica directamente, lo hacían en su nombre grupos conservadores como “*El Porvenir de Chile*” que impugnó antes los Tribunales de Justicia (con falló favorable a ellos) la película “*La Última Tentación de Cristo*” de Martin Scorsese, debido a que era una “afrenta al honor de la Iglesia Católica”. Este film solo fue exhibido legalmente el 2003, pero incluso en ese momento, parlamentarios de derecha como el diputado UDI, Marcelo Forni, afirmaron, sin haber visto la película, que “difama la imagen de Jesús y en definitiva ofende a la gran mayoría de los chilenos que son cristianos. No veo que haya necesidad de exhibirla (...)”. Luego de exhibida esta película en Televisión Nacional de Chile, Forni junto sus pares de la UDI Felipe Ward y Gonzalo Uriarte, presentaron una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, la que fue rechazada por este (julio de 2006).⁵

Otro factor muy visible de este legado fue la continuidad de un sistema electoral excluyente, el que no solo dejó afuera las propuestas de sectores ajenos a las grandes alianzas (regiones, partidos menores, independientes, etnias, etc.), sino también a toda la comunidad de chilenos que reside en el exterior (alrededor de un millón).

Por último, también se reflejaba en una fuerte demanda social de mayor gasto público y responsabilidad del Estado en el suministro de bienes públicos universales⁶ (nuevo equilibrio Estado-mercado) a partir de las deudas de arrastre en la satisfacción de demandas y la expectativas crecientes que generaba el desarrollo económico y la

⁴ *La Tercera*, 26 de septiembre de 1996, p. 4.

⁵ Acta del Consejo Nacional de Televisión del lunes 10 de julio de 2006, en www.cntv.cl

⁶ Este debate que ya había empezado en 1997 entre los llamados “*autoflagelantes*” y los “*autocomplacientes*”, hoy se representa entre los llamados liberales y los llamados progresistas.

propia democracia pero que se había topado con los ejes de la política macroeconómica, en particular el estricto control de gasto público.

Esto último se reflejó con claridad en la encuesta del CERC del 14 diciembre de 2001, al constatar que más de un 90 por ciento de los encuestados creían que el Estado tenía que asumir un mayor rol en la reducción de las diferencias en los ingresos, defender a los consumidores, ofrecer empleos, mejorar la situación de los jubilados o mejorar la calidad de la salud. Existía, y ahora se manifiesta con mayor fuerza en la sociedad chilena, una clara disonancia entre algunos de los rasgos que definen la visión ideológica neoliberal heredada del modelo pinochetista (ratificada en el fracasado llamado Consenso de Washington) y las expectativas y demandas de una sociedad que ha pasado por 20 años de un desarrollo económico continuado y crecimiento democrático con reparticiones de sus beneficios muy desiguales a pesar del mejoramiento de la calidad de vida para todos.

La superación de estos problemas no solo significaba enfrentarse a la institucionalidad vigente, a los tabúes ideológicos-morales de un conservadurismo que había permeado a una parte importante del país y a los veto players dentro y fuera de la Concertación (particularmente la DC en temas valóricos y los tecnopolíticos progresistas del PS y PPD en temas económicos), sino también a los límites que imponían las reglas de juego de la economía mundial prevalecientes. En todo caso, la demanda de una mayor responsabilidad del Estado en la resolución de los problemas sociales era un tema ascendente en la época y hoy es un fenómeno casi universal y no necesariamente una respuesta a la historia chilena bajo el pinochetismo.

Tal como lo expresó Ernesto Ottone, sin duda el principal asesor del presidente Lagos, desde un inicio el entorno duro del gobernante veía un horizonte con serias limitaciones para el nuevo gobierno. Expresó al respecto:⁷

“En una conversación entre quienes conformamos posteriormente la Unidad de Análisis Estratégica de la Presidencia, nos preguntamos antes que Lagos asumiera ¿cuál es el objetivo mínimo del Gobierno de Lagos? La respuesta fue brutalmente minimalista: ‘Que salga después de seis años y por sus propios medios’. Sin duda exagerábamos, es lo que los franceses llaman una ‘boutade’ pero contiene algo de verdad”.

⁷ Ernesto Ottone, “La Dimensión estratégica del gobierno de Ricardo Lagos”, *op. cit.*

El tercer gobierno de la Concertación, el de Ricardo Lagos Escobar, en todo caso, fue de orientación de centroizquierda⁸ y él mismo se definió (Garretón, 2006: 89) como el presidente de las reformas, las mismas que tenían como eje el tema que Norberto Bobbio (1995) llamara alguna vez “la estrella en el firmamento de la izquierda”: la igualdad.⁹ Pero eran reformas detrás de una meta estratégica, la de dar “igualdad de oportunidades a todos y todas de cara al Bicentenario” (Garretón, 2012: 130).

No hay que olvidar que, a pesar de las políticas sociales y redistributivas emprendidas con el retorno de la democracia, los temas de igualdad y de oportunidades tenían un pesado lastre que se arrastraba desde la irrupción del nuevo profesionalismo promovido por la dictadura y que, entre otros, suprimió el diálogo capital-mano de obra y el modelo de “sustitución de importaciones”, abrió el país al exterior y realizó un importante recorte del generoso espectro de beneficios sociales que había prevalecido gran parte del siglo XX garantizados por el Estado con la subsidiaridad. Esta política competitiva arrastró a un gran número de población por debajo de la línea de la pobreza (en el período posterior a la crisis financiera de 1982 estos bordeaban el 50 por ciento y bajaron a cerca del 40 por ciento al retornar la democracia).

Comparto plenamente, en este sentido, la hipótesis de Moreno (2006: 140) cuando dice que la democratización chilena no responde a un diseño perfectamente racional. Es más bien el resultado, con las interrogantes pertinentes, de una democracia en la que coexisten las aspiraciones de orden como sinónimo de estabilidad y el cambio como sinónimo de aspiración social, apostando por los consensos como factor de certidumbre y posibilidad de transformación en esta difícil ecuación. Esto fue posible a partir de un modelo de gobernabilidad que ha enfatizado particularmente en las dimensiones de la capacidad del sector público para gestionar en forma eficiente, transparente, responsable y equitativa los recursos de todos.

Ernesto Ottone señalaba certeramente los objetivos y procedimientos que se proponía el gobierno de Ricardo Lagos, al decir que:¹⁰

“La meta de la construcción democrática y progresista se orientaba a hacer avanzar el país tras objetivos que trascendieran los seis años de Gobierno, que instalaran una mirada larga. Se requería transitar de la ansiedad táctica a la templanza estratégica. En

⁸ Ver a Robert Funk, Patricio Navia, Felipe Agüero, Rossana Castiglioni, Patricio Meller, Claudio Fuentes, Andrés Billar y Alan Angell (2006), “*El gobierno de Ricardo Lagos: La nueva vía chilena al socialismo*”. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.

⁹ Ver, entre otros, el libro de Norberto Bobbio (1993), “*Igualdad y libertad*”. Barcelona: Editorial Paidós.

¹⁰ Ernesto Ottone, “La Dimensión estratégica del Gobierno de Ricardo Lagos”, *op. cit.*

este sentido, el gobierno de Lagos, al igual que los gobiernos anteriores de la Concertación rompe con los típicos ‘fundacionalismos’ latinoamericanos, donde quien es elegido se siente obligado a proceder como primer acto de Gobierno a negar la obra de quien lo precedió, asumiendo que la historia, la verdadera, la redentora, comienza con él...La visión de la Concertación en el Gobierno se ha parecido mucho más a la construcción de un edificio, donde el nuevo piso que se construye conlleva modificaciones, novedades y ampliaciones que se construyen en base a la solidez del piso anterior. Lagos participó plenamente de esta concepción”.

El presidente Lagos, sin embargo, partía su gestión con cuatro factores condicionantes negativos (hándicaps) que le pesarían para avanzar con audacia hacia su meta primordial: la igualdad. El primero de ellos se relacionaba a su condición del primer presidente socialista que asumía pos dictadura, lo que psicológicamente le ponía sobre sus hombros la necesidad de demostrar capacidad de gobernabilidad tras la experiencia de extrema inestabilidad vivida durante el gobierno del presidente Allende y lo haría evitar una confrontación frontal con la derecha, el empresariado u otros veto players.

En segundo lugar, estaba el temor a caer en una aguda crisis económica, realidad presente en ese entonces en varios países de América Latina, y que se representaba pavorosamente y con cercanía en el final que tuvo el gobierno radical de Raúl Alfonsín en Argentina¹¹ (situación que se pensaba entonces que afectaría también a su continuador y correligionario Fernando de la Rúa).¹²

Tercero, estaba la continuidad de los efectos de la crisis asiática, donde la lucha en contra del desempleo a través del fomento del crecimiento era una cuestión prioritaria (se tenía como meta evitar a toda costa llegar a un desempleo de dos dígitos). El propio presidente Lagos reconocería en octubre del 2000 que el 10,7 por ciento de desempleo alcanzado, “no nos satisface, no es una cifra para alegrarnos”.¹³

Por último, la adscripción-simpatía por la “*Tercera Vía*” de Anthony Giddens¹⁴ y Tony Blair dio sustento ideológico y técnico a las reformas del neoliberalismo que los

¹¹ Ver, entre otros, “Raúl Alfonsín” del Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona, en www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/argentina/raul_alfonsin

¹² Un interesante estudio comparado es el de Daniela Mozetic, “Unión Cívica Radical: Sus problemas de liderazgo y gobernabilidad. De Alfonsín a De la Rúa en perspectiva comparada”, en *Revista de Ciencia Política* Nº 11 (com.ar), diciembre de 2010.

¹³ *El Mercurio*, 27 de octubre de 2000, p. A-16.

¹⁴ Giddens propuso la renovación de la socialdemocracia en aras de renovarla en el marco de la globalización y para responder a la ola neoconservadora. La tercera vía, “es un intento por trascender tanto la socialdemocracia a la antigua como el neoliberalismo”. Anthony Giddens (1998), *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*, p. 38. Madrid: Taurus/Santillana.

socialdemócratas europeos venían practicando hacía bastante tiempo y que limitaron virajes más profundos que se le exigía al neoliberalismo chileno por parte del nuevo gobierno.

Profundizando en el nuevo paradigma que estaba en boga y sus efectos hoy, el politólogo Daniel Grimaldi expresa¹⁵ que “esta doctrina política emanada del laborismo británico se impuso como la modernización más importante de las ideas socialdemócratas, logrando la adhesión directa e indirecta de influyentes líderes mundiales (...)”. Agrega que en pleno apogeo de estas ideas a fines de los noventa, particularmente al interior de la Internacional Socialista, once de los quince países que conformaban la Unión Europea tenían gobiernos socialdemócratas y que estos no fueron capaces de “humanizar” el neoliberalismo (superarlo) y que, por el contrario, tendieron a profundizar esta orientación y hoy vemos las consecuencias. Dice:

“(...) La otra cara de la crisis de la deuda (...) que afecta (...) a Europa puede entenderse, no por un aumento excesivo en los gastos del Estado en prestaciones sociales como argumentan los conservadores, sino por una disminución de los ingresos de éste...gracias a las exenciones tributarias al gran capital, nuevas funciones del Estado frente a nuevas demandas sociales y por el encarecimiento del crédito en la banca privada (...)”.

Las interpelaciones y la crisis del Estado que empezaba a manifestarse en Chile (y ya presente en Europa) no eran solo del tipo financiero, sino fuertemente de orden cultural y sociológico (paradigmáticas en el fondo) afectando su legitimidad y la de los partidos que lo sostienen. Así y transcurrido más de la mitad de su mandato del tercer gobierno de la Concertación, el propio presidente Lagos consciente de las limitaciones institucionales que había heredado del régimen anterior, dejaba sentir su gran frustración de no poder avanzar más al destacar algunas de las limitaciones-desafíos que estaban pendientes. Sentenciaba:¹⁶

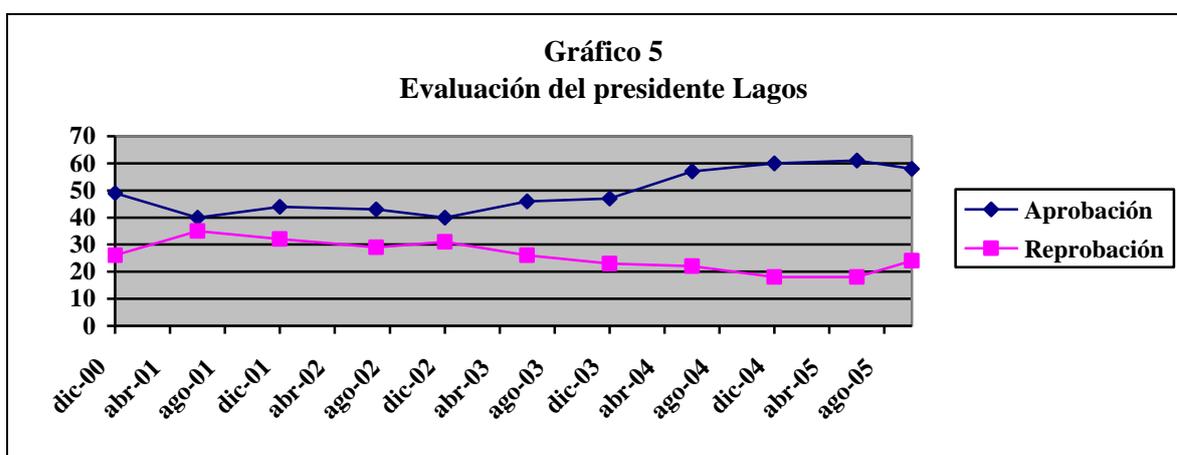
“En lo político, seguimos sin tener un sistema electoral equitativo. Creo que aprobaremos reformas constitucionales importantes, buena parte de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura desaparecerán; pero el desacuerdo con la derecha impide acabar con el sistema electoral vigente, donde el 66 por ciento es igual al 34 por

¹⁵ Diario electrónico *El Mostrador*, 9 de marzo de 2012

¹⁶ Entrevista de Francesc Relea a Ricardo Lagos, “Nos hemos atrevido a mirar la verdad sin esconderla debajo de la alfombra”, Suplemento Domingo, *El País*, 5 de diciembre de 2004.

ciento, en el sistema binominal. No cambiará porque a la derecha no le conviene. En segundo lugar, tenemos que plantear con toda crudeza la distribución de ingresos. Si bien hemos disminuido la pobreza, la distribución del ingreso monetario no ha cambiado en 15 años. En América Latina empeoró y en Chile se mantiene, lo cual ya es un gran logro. Pero sigue siendo muy inequitativo. En tercer lugar, tenemos pendiente el tema de la seguridad social y la jubilación. Cuarto, no tenemos un sistema de medios de comunicación acorde con el Primer Mundo. Porque es muy sesgado, y le hace mal a Chile. Aquí no existe un diario como El País o Le Monde, o The New York Times, que hacen algo tan elemental como distinguir los hechos del análisis”.

A pesar de las aprehensiones declaradas por el presidente Lagos y de datos concretos como que el país creció solo a un promedio de 4.4 por ciento en el período 2000-2005 (bastante inferior que el de los gobiernos anteriores) y la tasa de desempleo alcanzó una media superior al 8 por ciento y solo programas especiales impidieron que llegara por sobre el 10 por ciento (Garretón, 2012: 131), este terminó su mandato con una aprobación ciudadana de más del 70 por ciento¹⁷ (ver Grafico 5).



Fuente: Elaborado por Paulo Hidalgo en base a Datos de Centro de Estudios Públicos.

Algunos atribuyen el ascenso de la popularidad del presidente Lagos a la mejora de la situación económica del país tras sortear la “Crisis Asiática”. Sin embargo, el crecimiento económico no era la única variable que explica esta tendencia, ya que si consideramos el sexenio del presidente Frei, se puede apreciar que el nivel de popularidad de dicho mandatario descendía progresivamente del 58 por ciento cuando

¹⁷ De acuerdo a la encuesta ICSO-UDP (4 de septiembre de 2005) el presidente Lagos tenía una aprobación del 71,2 por ciento, hecho que era confirmado en la encuesta del CERC (8 de diciembre de 2005) la que le daba un 71 por ciento de valoración ciudadana.

fue electo hasta alrededor del 30 por ciento al finalizar su mandato, mientras la economía en la mayor parte de su mandato creció a tasas casi del 7 por ciento hasta la erupción de esta crisis.

Se dijo también que su popularidad era por su carácter fuerte y dotes de líder (propios del estadista que “exige” un régimen presidencialista), con la capacidad de defender los intereses de Chile, por ejemplo, cuando Estados Unidos buscó el apoyo chileno en el Consejo de Seguridad de la ONU para iniciar una guerra contra Irak en el 2003, y que Chile negó a partir de la defensa de la legalidad internacional, la solución pacífica de las controversias y el multilateralismo (principios básicos de la política exterior de Chile). Esta acción podría haber tenido importantes costos políticos para el país, pues cabe recordar que justamente en esa época se negociaba el Tratado de Libre Comercio con dicho país, el cual fue ratificado a pesar de este “impasse” por el Congreso de Estados Unidos. Se consideró que esta acción de Lagos fue asertiva frente a la opinión pública nacional e internacional (además de que Estados Unidos siente mayor respeto por los líderes prudentes y autónomos como norma).

Otro de los hechos que premió la opinión pública doméstica y colaboró en la apreciación por el presidente Lagos, se suscitó en enero del 2004 durante la Cumbre de Líderes de las Américas en Monterrey, México. Aquí el Presidente Lagos fue enérgico al responder a las fuertes interpelaciones y demandas bolivianas expresadas por el Presidente Carlos Mesa, con la aun recordada frase de “(...) Discutamos la agenda de futuro, discutamos los temas que nos convocan y usted tendrá toda la colaboración y toda la simetría que ha planteado como lo hemos venido haciendo. Y si de diálogo se trata, ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora”.¹⁸

Se dijo también que los niveles de aprobación aumentaron porque el presidente Lagos supo satisfacer a los poderosos grupos económicos. Paradójicamente el gobernante socialista/PPD, el cual antes de iniciarse el gobierno era temido por el empresariado nacional, se ganó el aprecio de estos por sus dotes de estadista. Hernán Somerville, importante líder empresarial, dijo “mis empresarios aman a Lagos”. Posteriormente aclaró que:¹⁹

¹⁸ Texto de la intervención del presidente Ricardo Lagos en la Cumbre de Monterrey, en *La Nación*, 13 de enero de 2004.

¹⁹Entrevista del periodista Ignacio Ossa a Hernán Somerville: “Los negocios están muy bien en el Chile de hoy”, *Revista Cosas* N° 190, septiembre de 2007.

“Yo hice alusión a un grupo, del cual formaba parte y que estábamos reunidos en Salamanca en la Cumbre Iberoamericana. ¡Esos empresarios! (apunta con el dedo en referencia a los que estaban), donde había bolivianos, nicaragüenses, ecuatorianos, venezolanos, argentinos...me expresaron todo el tiempo la admiración que tenían por Lagos; por la forma en que un gobierno que ellos consideraban socialista mantenía una economía de mercado, con un corte social, en muy buenas condiciones macro, con buenas condiciones de negocios”.

Un hecho relevante que resaltó en este período y que ayudó objetivamente a fortalecer la popularidad del presidente Lagos, fue la creación del grupo de asesores del segundo piso de La Moneda. Sin precedentes en la historia republicana, este grupo de asesores tenía la responsabilidad de cuidar la imagen del Presidente en los medios de comunicación en un contexto de clara “massmediatización” de la política.²⁰ A mí entender, sin embargo, este segundo piso era mucho más que un grupo de imagen, era un gabinete privado del presidente Lagos con un poder en un régimen presidencialista muchas veces por encima de los propios ministros formales y que lo abastecía con consejos, ideas, propuestas, políticas públicas y estrategias políticas.

Sean estos u otros factores, lo claro es que la administración del presidente Lagos tuvo enormes logros (eficacia y eficiencia) en una multiplicidad de campos, los que al final le otorgaron una gran legitimidad y que la derecha partidaria ha tratado de derrumbar a toda costa.

Ahí están, por ejemplo, la lucha contra la pobreza y la indigencia a través de un plan de atención y promoción de las familias en estas condiciones; de una reforma de la salud orientada a una política basada en los derechos (Plan Auge);²¹ la educación obligatoria de 12 años y mayor equidad en el acceso de la educación superior; en la promoción de la cultura y los derechos ciudadanos; en numerosas obras de infraestructura para la calidad de vida de las personas y el desarrollo estratégico del país; en la promoción de una política anticíclica mediante el fondo constituido con los ingresos del cobre en años de precios altos (1 por ciento del superávit estructural); en la promoción de leyes de modernización, transparencias y probidad²² del ejercicio público

²⁰ Ver a Pablo Ruiz-Tagle, “El segundo piso de La Moneda, el pato volador, el pato cojo y los desafíos de la Constitución catopardo”, en <http://www.pabloruiz-tagle.cl/docs/constitucioncatopardo-chilexxi.pdf>

²¹ Este es un ejemplo paradigmático de las transacciones que hubo que hacer de los proyectos originarios para que salieran adelante producto de los “veto players”, por ejemplo derrota del Fondo Solidario u otras medidas redistributivas. Garretón (2012: 132-140).

²² Ver, entre otros, los artículos de Gustavo Toro Quintana (2008), la “Modernización del Estado: Más que Luchar contra la Corrupción”, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; y “La modernización del

(ej. Chilecompra²³); en el proceso de globalización del país a través de acuerdos comerciales con casi todos los bloques del mundo y participando activamente en organismos internacionales multilaterales y regionales o traer el mundo a Chile con la APEC 2004; en la desaparición de la mayoría de los enclaves autoritarios a través de reformas institucionales; en el reconocimiento de las FF.AA. sobre la violación de los derechos humanos a través de la Comisión Nacional Sobre Presión Política y Tortura (Comisión Valech), la que determinó que 27.255 personas habían sufrido torturas y prisión y que su versión II ha entregado un nuevo informe al presidente Piñera con 32 mil nuevos casos;²⁴ etc.

No menor frente a esto último fue la recordación masiva de los 30 años del Golpe Militar de 1973, donde a través de múltiples vías (seminarios, programas en todos los medios de comunicación, romerías, marchas, etc.) se establece y ancla una verdad histórica prácticamente indiscutida en el país, hecho al que se le suma el descubrimiento e impacto de la apropiación indebida de fondos públicos por parte del general Pinochet y descubierta en Estados Unidos, más comúnmente llamado caso Riggs.²⁵ Esto favorece la mantención de la disyuntiva plebiscitaria de dictadura-democracia a favor de la unidad de la Concertación.

Nadie habría pensado que el horror de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, se transformaría en la mano que alzó el velo sobre la fortuna de varios millones de dólares que el general Pinochet había mantenido en secreto por 28 años en bancos extranjeros. El golpe al corazón de Estados Unidos provocó una serie de modificaciones legales que, como la Ley Patriótica, permitió a los investigadores del Senado indagar en el sistema financiero cualquier indicio de dineros guardados en entidades bancarias sospechosas de financiar el terrorismo. Pero la manga fue mucho más ancha y los legisladores, constituidos en una comisión especial, descubrieron que el ex dictador chileno mantenía hace varios años cuentas millonarias en el Riggs National Bank de Washington. Más aún, descubrieron que Pinochet utilizó una veintena de alias para abrir

Estado”, en *Teoría política y gestión pública*, pp. 15-34, Konrad Adenauer Stiftung/Chile, febrero de 2010.

²³ ChileCompra es un sistema que busca transparentar y hacer más eficiente la adquisición de bienes y servicios que deben realizar las Instituciones Públicas. Su utilidad práctica consiste en que cuando un organismo requiere contratar o adquirir un producto, debe convocar a una licitación pública para que personas naturales o jurídicas, puedan ofrecer y venderle ese bien.

²⁴ Diario electrónico *El Mostrador*, 12 de agosto de 2011.

²⁵ *La Nación*, 17 de diciembre de 2006, p. 3.

dichas cuentas, ocultando su verdadera identidad: Daniel López, John Long, José P. Ugarte, etc.

Se puede discutir hoy si los gobiernos de la Concertación deberían haber mostrado una mayor audacia en los temas valórico, de igualdad socio-económica (limitar el lucro y la usura del sistema educativo por ejemplo) y de cambio del sistema electoral y la participación. Pero, a pesar de ello y del claro condicionamiento del propio momento histórico que se vivía, al finalizar el gobierno del presidente Lagos el país había dado un salto cualitativo y cuantitativo hacia el desarrollo, hechos que muy pocos desconocen.

A este respecto, por ejemplo, el desarrollo económico y social de Chile 1987–2006 se expresaba en que la economía de Chile se caracterizó por estar orientada a la exportación. La estructura exportadora estuvo conformada por un 45 por ciento de productos industriales, 45 por ciento de producción minera y un 10 por ciento de productos agrícolas. Dentro de los productos industriales, destaca la exportación de celulosa, metanol, productos químicos y agroalimentarios. La industria forestal, del salmón y el vino (de reconocido prestigio internacional) adquirieron importancia en la última década. Los productos mineros más importantes son las semi manufacturas de cobre, mineral del cual Chile depende en gran medida. En el apartado agrícola destaca la exportación de frutas y hortalizas.

En el ámbito de la producción industrial ésta abarcó todos los rubros productivos (alimentaria, siderúrgica, maquinaria, etc.). Aunque si bien Chile ha reducido su dependencia de las exportaciones del cobre (60 por ciento durante la década del 60 al 35 por ciento el 2004), este producto todavía representa un porcentaje muy alto de las exportaciones y gran parte del crecimiento está relacionado con los altos precios de este y otros minerales han logrado con la emergencia de China y otros polos de desarrollo.

Si bien Chile fue el primer país de América Latina (junto con la Argentina) donde se inició la industrialización (mediados del siglo XIX con la creación de la CORFO durante los gobiernos radicales) y este sector recibió un gran impulso durante el período de entreguerras por las políticas de fomento industrial (industrialización por sustitución de importaciones), aún no alcanza una producción industrial de alto valor agregado. La economía de Chile ha pasado en los últimos decenios de ser una economía monoexportadora de productos primarios, a un país que dio valor agregado a los productos primarios, fruto de un crecimiento económico continuado a un ritmo entre el 6 y 7 por ciento en los años 90, con una sólida base institucional y una fuerte cohesión política en torno a la dirección de la política económica. Esto le permitió, entre otros,

por ejemplo, ingresar a la OCDE el año 2007, siendo el segundo país latinoamericano en hacerlo después de México.

Chile, por otro lado, es un país impulsor de la liberalización económica y del libre comercio, y mantiene un comercio diversificado y equilibrado con todas las áreas del mundo con propósitos de oportunidad y de seguridad. Es una de las economías más globalizadas y competitivas del planeta. Ha firmado múltiples tratados comerciales con países y asociaciones que representaban en ese entonces a más del 86 por ciento de la población mundial (hoy es mayor) como el NAFTA, UE, EFTA, Corea del Sur, China, Japón. Esto unido a políticas fiscales férreas y una fuerte inversión social le permitieron cumplir el 2003 con las Metas del Milenio de la ONU de rebaja de la pobreza a más de la mitad.

En el año 2006, el mismo país que mostraba la solidez y profundidad democrática alcanzada con la entrega de la banda presidencial entre dos socialistas (siendo una mujer, la presidenta Bachelet), el Banco Central de Chile informaba que las exportaciones habían totalizado los US\$ 58.116 millones y las importaciones US\$ 35.903 millones, lo que implicaban una balanza comercial favorable de US\$ 22.213 millones. El PIB en su valor nominal llegaba a los US\$145.845 millones y el PIB per cápita a los 8.875 dólares.²⁶ A su vez, según datos del FMI, el PIB per cápita chileno en valores nominales fue el más alto de América Latina.²⁷

En el 2006, el PIB creció un 4 por ciento, la inflación fue de 2,6 por ciento y el desempleo promedio fue de 7,8 por ciento. La esperanza de vida de 77,74 años (74,8 años para los hombres y 80,8 para las mujeres), el alfabetismo alcanzó el 95,8 por ciento (2002) y una tasa de mortalidad infantil de (7,8/1000) a nivel de los países más desarrollados.

En términos del acceso a la tecnología (a diciembre del 2006) el 22 por ciento de la población tenía teléfonos fijos; un 83 por ciento celulares; un 21,5 por ciento computadores personales; había un 42 por ciento de usuarios de internet (aquí destaca el programa Enlace de la educación pública); 53,8 por ciento poseía televisores; un 38,7

²⁶ En un informe del Banco Mundial se destaca que el PIB por habitante (medido por paridad de poder de compra- PPC) ascenderá en Chile en el 2010 a cerca de US\$ 15.000. Chile en 1980 tenía un PIB de US\$ 2.824 y era superado por siete países en la región (Brasil, Argentina, México, Venezuela, etc.). Desde esa fecha el PIB por persona de los chilenos ha crecido en un 560 por ciento, superando el crecimiento de Estados Unidos y Brasil (340 por ciento y 248 por ciento respectivamente en el mismo período). En "Chile liderará el PIB per cápita en la región en el 2010 por segundo año consecutivo", *La Tercera* del 2 de octubre del 2009, p. 26.

²⁷ Medidos en paridad de poder adquisitivo el PIB totalizó los US\$ 212.671 millones y el PIB per cápita a los 12.983 dólares (segundo tras Argentina).

por ciento poseía televisión pagada (sobre el total de hogares con televisor); 75,9 por ciento tenía radio; el 19,6 por ciento eran dueño de automóviles.²⁸

Chile con un poco más de 16 millones de habitantes en 2006 (según el FMI) fue la quinta economía más grande de América Latina, superando en la medición del PIB Nominal a países como Perú y Colombia, y en el PIB Real por Paridad de Poder Adquisitivo a Venezuela y Perú, todos países con poblaciones que doblan o triplican a la del país.

Con la llegada de la democracia en 1990, los gobiernos de la Concertación pusieron énfasis en desarrollar políticas y programas sociales para erradicar la pobreza y disminuir los niveles de vulnerabilidad. En general, los resultados fueron buenos en esta materia aunque todavía queden interrogantes como, por ejemplo, la precariedad en que quedan quienes han salido de la condición de pobreza, situación que los hace muy vulnerables frente a los vaivenes económicos y con la posibilidad real de caer nuevamente en ella. De todas formas y asumiendo proactivamente estos desafíos con la formulación nuevos programas de intervención, como se expresó Chile superó adelantadamente la Meta del Milenio de Naciones Unidas.

Los resultados en el tema de la igualdad eran más contradictorios para esta fecha, porque si bien se logró disminuir la brecha entre los ingresos del quintil más rico respecto del más pobre y si se le suman las ayudas gubernamentales el índice mejoraba sustancialmente de 14 a 7, en lo real, además de concentrarse la riqueza ni siquiera en el decil más rico sino en unas décimas del primer centil, esta repartición desigual ha tenido resultados concretos negativos en distintas áreas y que terminarían a la postre erosionando la legitimidad del sistema de partidos y de la democracia.

Según el informe de desarrollo humano del PNUD del 2005, Chile se encontraba en ese entonces en el puesto 113 de la lista de países por igualdad de ingresos, ubicándose entre los 15 últimos Estados a nivel mundial, lo que revelaba una importante carencia de la economía y de la política de igualdad que no pudo (y aun no puede) ser subsanada a pesar de la mejoras de las pensiones y salarios, de la gran cantidad de políticas sociales (Ej. la Ley de Subvención Preferencial del 2005 para los alumnos más pobres de kinder a cuarto básico) o de leyes redistributivas como la Ley de Rentas II que favoreció a los municipios de menores recursos.

²⁸ Este es un proceso que ha seguido desarrollándose como se ve, por ejemplo, en el caso de celulares. De acuerdo al Ministro de Telecomunicaciones y Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, la telefonía móvil alcanzó a 24.130.754 equipos activos en 2012, lo que representan una penetración de 138 por ciento por cada 100 habitantes. www.biobiochile.cl del 19 de marzo de 2013.

Esta desigualdad es atribuida a muchos factores ligados a la política económica implementada durante el período autoritario e imposible de cambiar por los vetos de la derecha y de los empresarios particularmente. No olvidemos que durante la dictadura se desarrolló un determinado tipo de economía que favorece a instituciones que propician el lucro (usura), la desigualdad y/o la concentración,²⁹ e impone limitaciones al Estado para redistribuir (por ejemplo a través de su condición de subsidiariedad que lo limita en la intervención social) hasta factores valórico-culturales como la desigualdad de género, etaria o étnica; es decir, se impuso una tendencia (revolución neoliberal) contraria a la más igualitaria establecida en la segunda mitad del siglo XX hasta el golpe de Estado de 1973.³⁰

El ex rector de la Universidad de Chile, Luis Rivero, por ejemplo, contextualizó bien este fenómeno al referirse a la desigualdad en el campo educacional. Recalcó que en la prueba de selección universitaria los alumnos que provenían de hogares con ingresos hasta los 278 mil pesos (US\$ 550 del momento) no sobrepasaban los 475 puntos, mientras que los venían de hogares de 2,5 millones de pesos (US\$ 4.630) para arriba pasaban los 610 puntos y, por lo tanto, ingresaban a mejores universidades y carreras reproduciendo el círculo vicioso de las redes y ventajas que ostentan los sectores pudientes.³¹

Otro ejemplo de esta falta de igualdad y que ha sido tema recurrente, es el tributario. Un paradigma de esto, es el impuesto específico a los combustibles y que la gente pide su eliminación. Ese impuesto fue creado bajo un estado de excepción constitucional (1986) decretado por Pinochet después del terremoto de 1985, para reconstruir la Panamericana y reparar otras carreteras. El asunto es que el objetivo de esa ley ya no

²⁹ Ejemplo de esto es la banca chilena, la que está compuesta por 26 bancos (21 establecidos en el país y 5 sucursales de bancos extranjeros). Las cuatro principales entidades financieras mantienen el 66 por ciento del mercado en términos de colocaciones netas de préstamos bancarios y las nueve mayores concentran más del 90 por ciento. Estos bancos son: Santander (22,2 por ciento), Chile (18,1 por), Banco Estado (13,4 por ciento), BCI (12 por ciento), BBVA (8,2 por ciento), CorpBanca (6,3 por ciento), Desarrollo (3,9 por ciento), Security (3 por ciento) y Bice (2,6 por ciento).

³⁰ La desigualdad está medida por el Índice de Gini. La desigualdad en Chile tiene larga data pues se remonta a la época de la Colonia cuando surgieron un tipo de instituciones amparadas bajo una economía de carácter "extractivo", por ejemplo la minería, y la actividad agrícola se desarrollaba en haciendas con unas relaciones marcadas por la servidumbre del inquilinaje. Éste desigual acceso a la tierra (y por lo tanto al crédito bancario), junto con un limitado acceso al sufragio (exclusivamente privilegio de la élite con formación) durante el siglo XIX, propició unas relaciones sociales marcadas por la desigualdad. Con la llegada del siglo XX y la toma de conciencia en torno a la universalización de la educación, además de una fuerte intervención del Estado en la economía de carácter redistributivo, hizo que los indicadores de desigualdad en Chile descendieran abruptamente durante las décadas centrales del siglo XX, llegando a estar entre las naciones más igualitarias del continente junto con la Argentina y Uruguay.

³¹ En Arturo Fontaine Talavera (2002), "Equidad y calidad en la educación: Cinco proposiciones interrelacionadas", *Estudios Públicos* 87: 6.

existe desde principio de los años 90 cuando se concesionaron las carreteras y los usuarios pagan peaje, además de la patente para circular. Más aún y tal como lo expresó el 2012 el diputado Hasbún de la UDI, el costo del impuesto “es discriminatorio”, porque el 80 por ciento del consumo de combustible lo hacen las empresas mineras, forestales y líneas aéreas, quienes no pagan este tributo (y evaden varios otros), mientras que el 20 por ciento restante es ciudadano y sí lo cancela.³² El corolario es que el impuesto específico al ser creado durante un estado de excepción contradice la propia Constitución Política en su artículo 44, en el último inciso, al expresar que: "Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos".

Claramente, con este y otros cientos de ejemplo, se demuestra que la democracia no funciona igual para todos incluso en países paradigmáticos como Chile y donde los ciudadanos claramente esperan un cambio en el ámbito político (contrapeso) que ayude a resolver estas profundas desigualdades.³³ La encuesta International Social Project de la Universidad de Humbolt realizada en el país entre noviembre y diciembre del 2006,³⁴ por ejemplo, ya destacaba que un 94 por ciento de los chilenos creía que las diferencias en los ingresos eran grandes o muy grandes en el país; un 83 por ciento pensaba que las empresas debían ser controladas para proteger las necesidades de todos; un 89 por ciento consideraba que el gobierno es el que debe garantizar un nivel mínimo de vida; y un 64 por ciento le asignaba la responsabilidad en la distribución de ingresos.

El ex presidente del Senado de Chile, el socialista Camilo Escalona, vuelve a hacer patente esta realidad en el 2012, al comentar un trabajo de investigación sobre la desigualdad en el país. Dice:³⁵

“En este trabajo de investigación se confirman verdades dolorosas; la más angustiante, al menos para mí, es la comprobación empírica que la segregación social se ha configurado en una lacra que se eterniza sobre el porvenir de las familias y las personas (...) Salvo excepciones, el que nació pobre no dejará de serlo en sus 70 a 80 años de vida que hoy la ciencia médica puede ofrecerle. Pero lo hará en una escuela para pobres, vivirá en una vivienda para pobres, tendrá una manera de hablar y de comportarse, e

³² En “Diputado Hasbún encabeza campaña para eliminar impuesto de los combustibles”, en *El Mercurio*, 15 de octubre de 2011.

³³ Ver, por ejemplo, Carta Pastoral de la Iglesia Católica, “Humanizar y compartir el desarrollo de Chile” del 27 de septiembre de 2012, en <http://www.iglesia.cl/cartapastoral2012/texto.php>

³⁴ *La Nación*, 18 de enero de 2007, p. 16.

³⁵ En “*Retrato de la desigualdad en Chile*” (2012), investigación de varios autores sobre el tema encargado por el Presidente del Senado. Disponible en la página de la Biblioteca del Congreso de Chile.

incluso de tomar vacaciones como pobre, así como una salud de pobres. Finalmente, su jubilación será propia de la gente pobre (...) Por el contrario, ganancias sin precedentes, rentabilidades difíciles de imaginar hasta hace poco, y concentración de una extrema riqueza en una elite muy reducida, forman un cuadro que acentúa el desencanto y el malestar de la ciudadanía”.

Este tema, y como ya se expresó, sin embargo, tenía y tiene una raigambre bastante más global. Así, por ejemplo, el informe de Oxfam 2013, “*The Cost of Inequality: How Wealth and Income Extremes Hurt Us All*,”³⁶ relata con detalle este problema. Entre otros, expresa que:

“La proporción del ingreso nacional que concentra el 1 por ciento del nivel socio-económico superior en los EEUU se ha duplicado desde 1980 (cuando se inició la apertura neoliberal), pasando en estas tres décadas del 10 por ciento al 20. El 0,01 por ciento superior ha ido más allá, cuadruplicando sus ingresos. A nivel mundial la concentración ha sido igualmente frenética; los ingresos del 1 por ciento superior han aumentado en un 60 por ciento en 20 años y el crecimiento de los ingresos ha sido aún mayor para el 0,01 por ciento superior. La actual crisis económica no ha sido una traba para la concentración de la riqueza sino más bien la ha estimulado: los 100 mayores billonarios del mundo incrementaron sus ingresos en 240 mil millones de dólares en el 2012. La cuarta parte de esa fortuna bastaría para acabar con la pobreza extrema en el mundo”.³⁷

No es casualidad, entonces, que mucho antes del levantamiento más global de los indignados del mundo (Europa, Estados Unidos y América Latina) el semanario *The Economist*³⁸ advertía que la desigualdad y los bajos salarios son una “combinación tóxica” que “amenazan la globalización” y agregaba que la contribución de los salarios al PIB en el mundo rico había caído a niveles inéditos al tiempo que los beneficios del capital llegaba a cotas nunca antes alcanzada.

Una constatación similar hacía Vicenc Navarro al señalar³⁹ que el rechazo creciente hacia las instituciones de la Unión Europea (voto negativo hacia la Constitución Europea) y las prescripciones neoliberales que salían del “Consenso de Bruselas” y de la Comisión Europea (reducción del gasto público, de la protección social y de los

³⁶ “The cost of inequality: How wealth and income extremes hurt us all”, 18 de enero de 2013, Oxfam Media Briefing.

³⁷ Síntesis extraída del diario *La República* (Perú), 22 de enero de 2013, p. 5.

³⁸ En “Globalisation and the rise of inequality. Rich man, poor man”, *The Economist*, 18 de enero de 2007.

³⁹ *La crisis de la Europa social*, en *El País*, 24 de enero de 2007.

impuestos, desregulación de los mercados laborales y mantenimiento de alta tasas de interés para controlar la inflación), y cuyos efectos (alto desempleo, una redistribución basada en un crecimiento de las rentas de capital y estancamiento de las rentas del trabajo, disminución del ritmo de crecimiento del gasto público por habitantes y disminución de los beneficios sociales) estaban afectando el bienestar y la calidad de vida de amplios sectores de las clases trabajadoras con el peligro de ser caldo de cultivo para movimientos antisistema con contenidos racistas antimigrantes (por suerte fue una propuesta más elevada).

Patricio Navia caracterizaba y anclaba este momento político de Chile en las continuidades de los pilares del modelo, al señalar que:⁴⁰

“Los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos nos dieron los mejores 16 años de nuestra historia nacional. Nunca crecimos tanto. Nunca hubo tantas oportunidades. Nunca se avanzó tanto en la lucha contra la pobreza. Chile es infinitamente mejor hoy que en 1990. Los aciertos de la Concertación han superado con creces sus errores y falencias. No por nada el electorado parece decidido a darle un nuevo mandato...Pero la coalición de gobierno no construyó un nuevo modelo. La economía social de mercado que promovió el gobierno de Aylwin consistió en priorizar la reducción de la pobreza -que alcanzaba al 40 por ciento en 1990- y en eliminar los enclaves autoritarios, no en cambiar las bases de la institucionalidad ni el modelo económico...La coalición de centroizquierda se ha dedicado a administrar -y mejorar- el modelo forzosamente impuesto por la dictadura. Aunque quiso dar la idea de que Chile tenía una nueva Constitución, Lagos refrendó con su firma la percepción de que su coalición construyó un Chile sobre los cimientos institucionales heredados del régimen militar”.

Incluso más, y complementando esta crítica, Garretón (2012: 141) expresa que economistas de izquierda no concertacionista como Hugo Fazio, llegaron a decir que “Lagos significó la profundización del modelo económico neoliberal, dados el fuerte impulso a la apertura económica y comercial, la renuncia a un proyecto nacional y el incremento de los niveles de desregulación y concentración”.

Más allá de concordar con algunos aspectos de este diagnóstico (por cierto no con la acusación que se le hace al presidente Lagos), en especial lo referido a la Constitución (esta no fue legitimada por la voluntad popular ni emanada de un proceso democrático

⁴⁰ Patricio Navia, “Tapar el sol con un dedo”, *La Tercera*, 24 de septiembre de 2005, p. 10.

de discusión y participación, fue rectificada con la firma de senadores designados y no incluyó temas vitales como el sistema binominal, etc.),⁴¹ en este análisis faltan los resultados (efectos) de estas modificaciones y el resultado final de la ecuación que, desde mi punto de vista, fue muy positivo.

Estos procesos, por una parte y como lo expresó asertivamente el ex ministro de Justicia del presidente Aylwin, Francisco Cumplido,⁴² introducían el cumplimiento casi en plenitud con la meta supuesta en la estrategia de la Concertación de introducir el mayor número de reformas que debilitaran (y posiblemente terminaran acabando) el objetivo tenido en cuenta por los autores de la Constitución de 1980. Así las reformas de la Constitución que se inicia con las reformas pos plebiscito de 1988 y continúan en los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei, y tienen este reimpulso durante el gobierno del presidente Lagos, tuvieron la virtud de acabar con un número importante de los llamados enclaves autoritarios y subordinar definitivamente a las Fuerzas Armadas al poder civil al quitarle la capacidad de “resguardo moral” y “tutela”. Y, hoy hasta el propio presidente Piñera ha declarado estar predispuesto a discutir el cambio de otros legados como el sistema electoral binominal aunque en la práctica sigue encontrando fuerte resistencia en sus partidos.

Por otra parte, había casos en que se tenía poca capacidad y había mucho que hacer. Un ejemplo de ello es la Ley de Concesiones de 1996 (Hidalgo, 2011: 106) que permitió hacer partícipe al sector privado en los procesos de inversión, explotación y mantención de grandes obras públicas por medio de procedimientos que permitirían financiar obras económicamente rentables y recuperar la inversión a través del cobro directo de tarifas a los usuarios. Aunque no nos guste la intervención de capital privado en obras públicas de alto uso social por la desnaturalización del sentido público final que tienen, el problema era sencillo: había que crear infraestructura para la productividad en un contexto donde el 45 por ciento de las carreteras estaban en “regular” o “mala” condición y el Ministerio de Obras Públicas para enfrentar estos desafíos debería haber invertido US\$ 11 mil millones, es decir, triplicar su presupuesto en el sexenio 1995–2000 (Engel, Fischer y Galetovic, 2001: 203 y ss). El corolario de esto lo expresó el propio presidente Lagos en su última cuenta pública al país,⁴³ al decir

⁴¹ Claudia Rivas A., “Los Puntos Claves que Cuestionan la Constitución de 1980”, diario electrónico *El Mostrador*, 3 de octubre de 2012.

⁴² Francisco Cumplido Cereceda (2000), “Reforma Constitucional en Chile”, *op. cit.*

⁴³ *El Mercurio*, 21 de mayo de 2005, p. C-3.

que esta inversión se expresa “en una modernización sin precedentes de su infraestructura y su conectividad”. Mencionó, entre otros,

“(…) las ampliaciones del Metro; la red de autopistas urbanas; el tren Santiago-Temuco y el regional a Puerto Montt (que estará listo a fines de año); el Metro Regional en Valparaíso; el nuevo aeropuerto de Copiapó; la remodelación y modernización del aeropuerto de Arica; las ampliaciones de los aeropuertos de Antofagasta, Concepción y Punta Arenas; la construcción de la segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez; la modernización de la Ruta 5; el acceso sur al puerto de Valparaíso; el nuevo acceso al puerto de San Antonio; los avances en la construcción de la Ruta Costera e Interlagos; la red interportuaria Talcahuano-Penco y el proyecto BioVías en Concepción, etc.”.

Y, por último, se afianzaban nuevas discusiones en el escenario nacional producto del afianzamiento democrático (institucionalización, políticas y escenarios) y sus retornos. Así, por ejemplo, el acceso a la información, cultura y, particularmente, la educación superior de un número importantes de estudiantes de enseñanza media y universitaria durante los gobiernos de la Concertación, promovió la discusión de parte importante de los clivajes posmodernos como el sentido de lo público. Kriesi (1999: 401) expresa al respecto:

“La expansión de la educación superior tiene un efecto liberalizador. Induce una transformación general de las orientaciones de los valores políticos hacia reivindicaciones antiautoritarias y emancipatorias (...) Esto introduce un antagonismo fundamental dentro de la nueva clase media entre los que controlan los activos organizacionales y aquellos cuyos recursos se limitan a la cualificación y capacidad experta individuales no vinculadas a la organización”.

Al finalizar el gobierno del presidente Lagos lo que se apreciaba, entonces, era que la democracia chilena, con una mayoría de edad (18 años), ya desprovista de la carga de Pinochet y de los miedos del desempleo, y con fuertes interpelaciones a las políticas que rigieron su devenir económico desde 1990 (el “Consenso de Washington” entre otras), iniciaba una nueva discusión (al igual que el resto de la región) en vistas a forjar un rol más preponderante del Estado que permitiese reunir la libertad que se ganó durante los ochenta con una igualdad que todavía no aparecía para importantes mayorías a pesar de la solidez alcanzada por la democracia, del crecimiento económico y de las oportunidades que han entregado las políticas sociales implementadas.

Reafirmado la idea de falta de una distribución más igualitaria, el propio presidente Lagos expresaba⁴⁴ al inaugurar el 102 encuentro anual de la Asociación Sociológica Americana (ASA), que:

"Las economías de mercado están muy bien, pero las sociedades de mercado no pueden existir porque se necesita de la política para restablecer el equilibrio indispensable para que exista una verdadera igualdad de oportunidades", calificando de "tremendo error creer que la economía de mercado lo soluciona todo".

Claramente la sociedad había cambiado, se había hecho más compleja y dinámica a partir del desarrollo y diversificación de los intereses (demandas) sociales y la obsolescencia de las normas y procedimientos que limitaban los cambios. Esto implicó que la buena gestión del Ejecutivo en este período (y en cierta medida también del legislativo), se enfrentó muchas veces a reformas del tipo reactivo (al igual que su antecesor) por ejemplo en el área de la transparencia y corrupción.

Frente a esto último, por ejemplo, Alfredo Rehren expresaba que:⁴⁵

“La agenda de transparencia que se desarrolla durante los gobiernos de la Concertación en los noventa intenta responder a los desafíos planteados para la democracia chilena por la aparición de un nuevo fenómeno: la corrupción. Ante los escándalos de corrupción cada administración reacciona, como en una crisis de contingencia, con la creación de una comisión ad hoc cuyo objetivo principal es recomendar a nivel presidencial distintas medidas a implementarse; o negociar con la oposición política, como es en el caso de Lagos, un amplio acuerdo concordando una política de transparencia (acuerdos Lagos-Longueira). En ambos casos se generan iniciativas legislativas que se traducen en proyectos de ley del Ejecutivo y algunas mociones, que incluyen distintos componentes destinados a controlar la corrupción”.

Sin embargo, lo importante de estas actitudes reactivas frente a temas nuevos como la corrupción, es que proponen profundizaciones democráticas estratégica, por ejemplo en este caso leyes de transparencia y probidad.

A pesar de las limitaciones y problemas que se presentaban frente al nuevo umbral que había alcanzado el país, el presidente Lagos terminaba su mandato con una muy alta popularidad producto de la legitimidad que le otorgaba su propio liderazgo republicano, la eficacia de su gestión y la estabilidad (governabilidad) alcanzada a pesar de los

⁴⁴ *La Nación*, 10 de agosto de 2007, p. 3.

⁴⁵ Alfredo Rehren (2008), “*La evolución de la agenda de transparencia en los gobiernos de la Concertación*”, Dirección de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 3(18): 4.

mediáticos conflictos de corrupción.⁴⁶ Reafirmando esto en su último discurso del 21 de mayo de 2005, el presidente Lagos dijo:⁴⁷

"Chile es hoy la economía más competitiva de América Latina, el país que tiene menos corrupción, el país que tiene el servicio público más eficiente, el país que lidera los indicadores de desarrollo humano en América Latina".

Hay un dicho en comunicaciones para graficar la dinámica de los cambios que estaban aconteciendo en todas las esferas en el Chile de entonces y también en el de hoy; este dice que: "cuando nos aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas". Claramente las respuestas aprendidas no eran suficientes para explicar los enormes cambios tanto en el pensamiento como en los objetos pensados y los requerimientos del nuevo Chile de combinar la democracia formal con la democracia social en medio de una nueva elección presidencial el 2005.

4. 2 Michelle Bachelet y la semilla del cambio de paradigma

Las primarias, como mecanismo de definición de candidaturas presidenciales de la Concertación, habían adquirido tanta legitimidad en la ciudadanía y la base partidaria, que resultaba muy difícil para los liderazgos de los partidos y los propios candidatos proponer y/o impulsar procedimientos que representasen un retroceso en el nivel de participación de la gente (de democratización de la decisión).

Ayudaba a este proceso democratizador, la existencia mayoritaria de un electorado concertacionista que no obedecía a ningún partido de la coalición en particular y que empezaba a castigar toda actitud de conflicto y de división y, por lo mismo, desalentaba a los candidatos a ocupar el mecanismo constitucional de la primera vuelta para dirimir las disputas.

⁴⁶ Los casos MOP (Ministerio de Obras Públicas)-Gate, MOP-Ciade, CORFO-Inverlink, EFE, fueron casos de corrupción y malas prácticas que se expandieron en altos niveles de la administración pública y en ellos participaron colaboradores muy cercanos al ex mandatario. En enero de 2003 se ordena la detención del Ministro de Obras Pública, Transporte y Telecomunicaciones, Carlos Cruz. La investigación llevada adelante por la jueza Ana Gloria Chevesich registró varias aristas como MOP-Prograf, MOP-Idecon, MOP-Cycsa, MOP-Délan y MOP-Gesys, entre otras, las cuales hablaban desde irregularidades como la falsificación de instrumentos públicos y licitaciones preacordadas hasta el fraude al fisco, pasando por el pago de sobresueldos y el desvío de fondos públicos. En todo caso, el presidente Lagos que carecía de cualquier involucramiento, logra un acuerdo prospectivo con el entonces líder de la UDI, Pablo Longueira, sobre leyes de probidad y transparencia. *El Mercurio*, 16 de enero de 2003.

⁴⁷ *El Mercurio*, 21 de mayo de 2005.

Constituía también un desincentivo para los partidos políticos el arriesgarse a una segunda vuelta el hecho de que el Presidente y los escaños parlamentarios se eligieran simultáneamente, ya que se podía traspasar el fracaso presidencial a los candidatos al Parlamento, fracasando en toda la línea electoral (ya se había vivido la alerta que generó la segunda vuelta que tuvo que enfrentar el presidente Lagos).

Finalmente, toda coalición (y la Concertación chilena no es una excepción) que desee de verdad incrementar su posibilidad de triunfo presidencial elegirá siempre a su candidato de entre los liderazgos que tengan mayor apoyo ciudadano. Incluso esto es válido también para aquellas agrupaciones de carácter más doctrinario.

A estas alturas del desarrollo del procesos político chileno era cada vez más difícil elegir a sus representantes sin consideración a la adhesión ciudadana, e incluso al interior de los propios partidos. Si el PS y el PPD hubieran elegido de acuerdo a la valoración y juicio de sus elites políticas estables (liderazgos tradicionales), los probables candidatos habrían sido dirigentes masculinos del tipo José Miguel Insulza y/o Sergio Bitar.⁴⁸ Sin embargo, Michelle Bachelet, una pseudo afuerina de las oligarquías partidarias, se impuso a las direcciones del PS y PPD desde la opinión pública a través de las encuestas (su jefa de prensa, María Angélica Álvarez la había incluido en la encuesta CEP cuando era ministra de Salud del presidente Lagos - 11 de marzo del 2000) y de ahí empezó a elevarse enormemente.

En este sentido, adhiero plenamente al análisis de Dockendorff, Salinas y Figueroa (2009:95), cuando expresan que:

“En las democracias contemporáneas, el liderazgo y la representación política están sustentados en el apoyo que obtienen los candidatos de parte de electorados cada vez más volátiles y menos dependientes de los tradicionales clivajes de clase o de lealtades partidarias e ideológicas (...) En ese contexto, los partidos...han perdido parte de su centralidad en el proceso político, en general, y en la articulación de las preferencias del electorado, en particular al estar hoy los liderazgos políticos cada vez más sostenidos en una relación virtual con la opinión pública, la que a su vez es mediatizada e institucionalizada por medio de las encuestas de opinión (...) Lo anterior nos lleva a constatar la importancia y centralidad de las encuestas electorales...En términos generales, la opinión pública cumpliría la función social y política de integración y fijación de prioridades a través de la conformación de la agenda...y en escenarios competitivos las encuestas pre-electorales servirían para reducir los niveles de incertidumbre de los actores (partidos, dirigentes, candidatos) e incluso también, eventualmente, ajustar las preferencias de los electores”.

⁴⁸ Ver Santiago Delgado Fernández (2004), “Sobre el Concepto y el Estudio del Liderazgo Político. Una propuesta de Síntesis”, *Psicología Política* 29: 7-29.

El ascenso de Michelle Bachelet a la primera magistratura del país no puede desligarse, en lo esencial, de su propia biografía y de la historia de Chile de los últimos 30 años.⁴⁹ Según la mayoría de los estudios de opinión, ella representa (para una buena parte del electorado) la imagen de una mujer de clase media con la que se identifica, que sufrió en carne propia los dolores del exilio y las violaciones a los derechos humanos, pero que, por sobre todo, comparte un conjunto de experiencias cotidianas que la alejan de la tradicional elite chilena. Es hija de un militar, divorciada, profesional independiente y jefa de hogar. Estudió en un liceo público y posteriormente en la Universidad de Chile (estatal). No tenía un perfil partidario o público alto hasta antes de que asumiera en las carteras de Salud y luego Defensa durante la administración del presidente Lagos, entre otros atributos.

Algo distinto a lo sucedido con Michelle Bachelet fue la erupción de la demócratacristiana Soledad Alvear en las encuestas públicas. Su condición de mujer preparada y eficiente (profesional de clase media y ex ministra destacada), unido a su matrimonio con el dirigente DC Gutenberg Martínez, le permitieron que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana la nominara como su precandidata presidencial por estrecho margen y fuerte resistencia de un número importante de dirigentes. Adolfo Zaldívar, ex presidente del partido y quien posteriormente emigró de la Concertación y se alió con la derecha, estuvo a punto de ganar la nominación interna a pesar de ostentar menos de la décima parte del apoyo que tenía Soledad Alvear en los sondeos públicos, situación que se convertiría en uno de los factores de su retiro.

Pese a las dudas de la elite concertacionista al haber gobernado con una lógica de “todo por el pueblo pero sin el pueblo”, por cierto en el difícil contexto de la transición, la ministra de Defensa de entonces, Michelle Bachelet comenzó a subir en las encuestas.⁵⁰ Si bien la dirigencia concertacionista parecía preferir a la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear o al titular de Interior, el socialista José Miguel Insulza, ambos del establishment dirigencial, las encuestas de ese momento daban una clara ventaja a Michelle Bachelet sobre Alvear.

Interesante en este punto del proceso, en todo caso, resultaba constatar la primacía de dos liderazgos femeninos como muestra de maduración y cambio de la cultura

⁴⁹ Ver María de los Ángeles Fernández-Ramil, “Análisis exploratorio de la presidencia de Michelle Bachelet (caso de Chile)”, Observatorio de Género y Equidad”, en www.observatoriongeneroyliderazgo.cl de abril de 2009.

⁵⁰ Ver Ernesto Moreno Beauchemin (2011), *El gobierno de Michelle Bachelet. Un liderazgo forjado en la adversidad*. Santiago: Konrad Adenauer Stiftung.

estratégica del país, en especial del patrón machista-patriarcal que ha dominado la política chilena⁵¹ desde el inicio independiente del país. Ambas candidatas de la Concertación y sus partidos asumieron, a nivel discursivo y en la práctica de campaña, que la base de sustentación de ellas iba mucho más allá de los partidos que las apoyaban. Ambas apuntaron a lograr la identificación del amplio pueblo concertacionista y, desde allí, el de toda la ciudadanía en una relación menos asimétrica entre la subjetividad y la institucionalidad. Por eso se continuó en el camino de la participación ciudadana (primarias abiertas) para elegir al abanderado presidencial de la Concertación.

Michelle Bachelet sabía que su nombre despertaba recelo en las élites, lo que la llevó a iniciar una campaña basada en la gente, jerarquizando conceptos-promesas como la participación ciudadana, las caras nuevas (“nadie se repite el plato”) y la paridad de género. Durante la campaña, Bachelet cometió “errores” para algunos y “virtudes” para otros. Su experiencia política, su estilo más franco y su desconfianza en las elites partidistas la llevaron a proponer una visión de una democracia desde abajo hacia arriba. Si la Concertación privilegió los acuerdos de elite (que facilitaron el éxito de una transición muy compleja), Bachelet estaba determinada a que el suyo sería un gobierno más ciudadano. Al final, el liderazgo de la Concertación entendió que para mantener la unidad de la coalición (y también el poder) debía aceptar la voluntad del pueblo y proclamar a Bachelet como su candidata.

Algunos analistas como Patricio Navia vieron la bajada de Soledad Alvear como un acuerdo entre barones para blindar a Michelle Bachelet.⁵² Si bien es cierto que finalmente la Concertación no hizo elecciones primarias para elegir a su candidata presidencial al retirar Soledad Alvear su postulación dos meses antes de la elección, esto no invalida el acuerdo previo de los partidos de realizar primarias abiertas para resolver la competencia de liderazgos presidenciales y la configuración de un escenario político electoral, principalmente como mecanismo de legitimación y como concordancia con las campañas que desarrollaron debates públicos y promesas de las candidatas.

Si las primarias no se realizaron fue, esencialmente, además del “boicot” que le hicieron algunos dirigentes de la propia DC a Soledad Alvear, porque tanto el partido

⁵¹ En 1935 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952. En www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=eleccionesvotofemenino

⁵² Patricio Navia, “Blindaje y democracia”, Weblog *La Tercera*, 21 de noviembre de 2011.

como la candidata concluyeron que la irrupción del candidato de la derecha más liberal, Sebastián Piñera, en el escenario presidencia cancelaba todas las expectativas de conquistar un porcentaje del voto de centro derecha y acortar la considerable distancia con Michelle Bachelet. Esta percepción se unió al supuesto de que la división en la derecha debía ser enfrentado con una pronta decisión unitaria de la Concertación que detuviera la eventual hemorragia de votos que podía producirse, si se prolongaba en el tiempo la diferenciación entre las candidatas y/o el debilitamiento de una de ellas (votos blandos de la DC podrían haberse tentado con Piñera). Esto último y en un gesto de plena adhesión coalicional, lo reconoció la propia Soledad Alvear en una entrevista en CNN-Chile en enero del 2013.

El sistema político chileno, aunque multipartidista, está fuertemente organizado, como ya se ha expresado, en torno a dos grandes fuerzas políticas que tienen un correlato electoral, social y cultural, que perdura muchos años después de su impulso originario proveniente de la disyuntiva democracia/dictadura (en particular el plebiscito del Sí y el No) a través en la disputa Concertación/derecha. Por lo mismo, la continuidad de la disputa al interior de la Concertación por la nominación unido a un segundo candidato de la derecha, podría hacer difusa la contradicción que determinaba la adhesión básica, interrogante que se podría haber trasladado al campo electoral más global.

La simultaneidad electoral presidencial-parlamentaria era uno de los alicientes mayores para tener candidatura presidencial única y para que esta sea siempre la de mayor adhesión popular. El binominalismo también castiga a aquellos que se van a la periferia o francamente emigran de las grandes coaliciones (ahí están el caso de los “ominamis” entre otros). Pero la razón principal para tener candidato único es que en el sistema político chileno usar la primera vuelta como mecanismo para elegir al candidato de la coalición, reduce indudable y objetivamente las posibilidades de triunfo presidencial (y en parte parlamentario al realizarse los dos comicios juntos) en parte por la cultura estratégica nacional, además de incentivarse los conflictos de los competidores del mismo pacto.

Esto último inhibió la continuidad de la “insurrección” de Adolfo Zaldívar y Jaime Mulet, presidente y dirigente de un sector de la DC (los colorines), los que a través del manifiesto “Una Mirada al Presente para Pensar el Futuro” del 2005 y con un sentido meramente electoralista, intentaron dar un sustento doctrinario más radical (de “corregir y cambiar el modelo”) a los candidatos parlamentarios deces y revertir su baja electoral.

Lo irrisorio es que Adolfo Zaldívar terminó como embajador del presidente Piñera en Argentina (Garretón, 2012: 92).

Con la sólida posición de Michelle Bachelet, la derecha, con dos candidatos a presidente entonces, abandonó el objetivo de materializar (disputar) la alternancia en el gobierno para concentrarse en la disputa de la hegemonía en su campo político, la definición de los futuros liderazgos y la fuerza parlamentaria al interior de su propia coalición, la Alianza por Chile (hoy por el Cambio).

En este contexto, se produce la elección presidencial del 2005 con 4 candidatos: Michelle Bachelet como candidata de La Concertación, Tomás Hirsch por el pacto de izquierda extraparlamentaria Junto Podemos, Joaquín Lavín por la derechista UDI y el empresario Sebastián Piñera por la también derechista Renovación Nacional. Si bien no fue una sorpresa que ningunos de los candidatos lograra sobrepasar el 50 por ciento más un voto en la elección para ganar en la primera vuelta de diciembre del 2005, dado los resultados experimentados en la elección del 2000 y por la misma dispersión del voto, entre otros, lo que sí constituyó una cierta sorpresa fue la llegada de Sebastián Piñera en el segundo lugar por encima del candidato de la UDI, Joaquín Lavín. Todos suponían que el alejamiento de Lavín de Pinochet, su estilo más coloquial y teniendo detrás al partido más grande de Chile y con fuerte trabajo popular, pelearía el primer lugar (ver Cuadro 16).

Cuadro 16			
Elección presidencial de 2005, primera vuelta			
Candidatos	Coalición	Votos	Porcentaje
Michelle Bachelet Jeria	Concertación	3.190.691	45,96%
Sebastian Piñera Echenique*	Renovación Nacional	1.763.694	25,41%
Joaquin Lavín Infante	Unión Demócrata Independiente	1.612.608	23,23%
Tomas Hirsch Goldschmidt	Juntos Podemos	375.048	5,40%

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University-OAS

El segundo lugar de Piñera se explicó, entre otros, a partir del desgaste natural de Joaquín Lavín a partir de su reincidencia como candidato presidencial y su anclaje en un partido autoritario. Otro factor relevante fue el posicionamiento de Piñera como un candidato más moderno y más liberal, es decir, de la derecha democrática y no autoritaria, más sintonizado con los cambios ocurridos en el país y en el mundo.

También destacaba la usurpación del discurso progresista de la Concertación por parte de los dos candidatos de derecha (igualdad, inclusión, libertad, transparencia), pero donde Piñera lo anclaba con más credibilidad (el único candidato considerado rupturista era Hirsch del Junto Podemos - PC). Por último, el uso del voto de sanción a la Concertación en la convicción de que en una segunda vuelta sectores disconformes y/o más periféricos volverían al conglomerado de gobierno, etc., y que favorecían más a la imagen de centro de Piñera (incluso cercano a la DC por su padre).

Se constataba nuevamente, en todo caso, que había pasado el tiempo en que la Concertación ganaba sin problemas en primera vuelta con más del 50 por ciento de los votos. Ahora había un voto más libre y, por lo mismo, menos predecible. El desgaste natural de más de 15 años de gobierno y la imagen del fin del clivaje dictadura-democracia (transicional), entre otros, daban forma a un nuevo escenario político de competencia reñida entre ambas coaliciones, tal como ya se había visto en las elecciones de 1999. Hablo de imagen, ya que concuerdo con Gamboa y Segovia (2006: 85) cuando dicen que “la alineación política surgida en el plebiscito de 1988, denominada eje autoritarismo-democracia, es el factor principal para entender el resultado electoral”.

En la segunda vuelta, los realineamientos en torno a los ejes derecha-progresismo en enero del 2006, terminaron dándole el triunfo a Michelle Bachelet sobre Piñera (ver Cuadro 17), pero dejarían posicionado a este último como figura indiscutida de su sector para una futura contienda y, en menor medida, como líder del sector. Esto, unido a su gran fortuna personal y al control de los medios que tenía su sector, lo hacían un potencial futuro presidente.

Cuadro 17			
Elección presidencial de 2005, segunda vuelta			
Candidatos	Coalición	Votos	Porcentajes
Michelet Bachelet Jeria	Concertación	3.723.019	53,50
Sebastian Piñera Echenique	Alianza	3.236.394	46,50

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University – OAS.

Sin embargo, y más allá de este realineamiento, hay varias lecturas del triunfo de Michelle Bachelet. Entre ellas, destacan el voto femenino (Gamboa y Segovia, 2006: 86) que apoyó a una mujer a la Presidencia de la República en una sociedad conservadora y tradicionalmente dominada por hombres (pater familia) y que refleja un

cambio valórico-cultural de envergadura de la sociedad chilena. La propia Presidenta graficó bien esto en su discurso de celebración de triunfo al decir que “Quién lo hubiera pensado, amigas y amigos (...) Quién lo hubiera pensado. ¿Quién hubiera pensado, hace veinte, diez o cinco años, que Chile elegiría como Presidente a una mujer? Parecía difícil. Pero fue posible. Es posible. Porque los ciudadanos lo quisieron. Porque la democracia lo permitió”.⁵³

También era parte de la innovación como concepto valorado por los chilenos que quería ser transmitido al mundo y de la creencia de que vivíamos un país fuerte y sólido que no necesitaba un “pater familia” y, por lo mismo, era posible ser vanguardistas.⁵⁴

Igualmente expresaba la lealtad a una exitosa proyección de la Concertación como fuerza gobernante desde el fin siglo XX al XXI, mostrando una singular capacidad de renovación y adaptación a nuevas y cambiantes circunstancias en un marco progresista-inclusivo, además de haber demostrado una gestión prudente y eficaz para el crecimiento económico como se aprecia del crecimiento constante del PIB (ver Cuadro 18).

El propio presidente Lagos graficó bien este positivo desarrollo económicos al señalar que, entre 1990 y el 2006, hubo años en que el aumento del ingreso per cápita cuadruplicó el de América Latina.⁵⁵

Con razón, entonces, la presidenta Bachelet decía:⁵⁶

“Los chilenos estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Y vamos a seguir en ese camino. Vamos a asombrar al mundo una vez más. Demostraremos que una nación puede volverse más próspera sin perder su alma. Que se puede crear riqueza sin contaminar el aire que respiramos o el agua que bebemos. Que se puede estimular a los que emprenden y avanzan, pero al mismo tiempo auxiliar a los que se quedan atrás. Que se puede construir un país donde cabemos todos, mujeres y hombres, de la capital y regiones. Gente de todos los colores, credos y convicciones”.

Implicaba también una ratificación del respaldo con que concluyó el gobierno del presidente Lagos, cuya gestión culminaba (igual que la de sus antecesores) con un legado de continuidad y cambio que Michelle Bachelet encarnó bien en su campaña, en

⁵³ <http://www.tvn.cl/noticias/especiales/discursobachelet150106.htm>

⁵⁴ De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Imagen de Chile realizado junto con el Nation Brand Index, los chilenos tenemos una mejor imagen de “nosotros mismos” en relación a cómo nos ve el resto del mundo, y esta aumenta cuando nos comparamos con otros países. *La Tercera*, 18 de abril de 2013.

⁵⁵ Ricardo Lagos (2008), “Concertación de Partidos por la Democracia”, *Quórum. Revista de Pensamiento Iberoamericano* 20: 33.

⁵⁶ *Ibid.*

particular en las nuevas demandas que surgían de las transformaciones experimentadas y que se sintetizaban en mayores oportunidades, protección y pluralismo (más igualdad). En su saludos a las mujeres chilenas por el Día Internacional de Mujer, la ex presidenta Bachelet graficó bien este cambio desde la perspectiva de género al decir que: “Hoy tenemos leyes que castigan la violencia de género, que promueven la igualdad de las mujeres en el mundo del trabajo, que permiten conciliar de mejor manera la vida familiar y laboral, como la nueva ley de ampliación del derecho a postnatal”.⁵⁷

Cuadro 18							
Datos económicos 1990-2011							
Año	PIB total	PIB per cápita	PIB per cápita.	Export. Miles	Import. Miles	Deuda Pub. %	Superávit o Déficit
	mm US\$	US\$	US\$ PPA	US\$ FOB	CIF	del PIB	Fiscal
							% del PIB
2011	236.321	13.596	15.989				
2010	203.925	11.929	15.025	69.621,90	54.499,30		-1,6
2009	161.781	9.525	14.461	54.943,90	50.990,80		7,7
2008	169.573	10.147	14.510	67.788,90	52.565,80		8,7
2007	163.880	9.872	13.890	67.643,90	43.990,80	4	8,7
2006	146.437	8.911	13.156	58.485,50	35.898,60	5	7,7
2005	118.250	7.269	12.296	41.226,90	30.492,30	7	4,5
2004	95.653	5.944	11.342	32.520,40	22.935,10	11	2,1
2003	73.990	4.648	10.509	21.664,20	17.941,30	13	-0,5
2002	67.473	4.285	10.038	18.179,80	15.794,20	16	-0,7
2001	68.820	4.416	9.760	18.271,80	16.428,30	15	-2,1
2000	75.404	4.897	9.322	19.210,20	17.091,40	14	0,4
1999	73.171	4.815	8.845	17.162,30	14.735,10	14	2
1998	79.499	5.301	8.896	16.322,80	18.363,10	13	2,2
1997	82.887	5.601	8.632	17.870,20	19.297,80	13	3,1
1996	75.797	5.193	8.070	16.626,80	17.698,70	15	1,5
1995	71.468	4.966	7.489	16.039,00	15.914,10	18	3
1994	55.461	3.919	6.772	11.604,00	11.824,60	23	2
1993	48.048	3.455	6.394	9.199,00	11.125,40	29	1
1992	44.880	3.284	5.956	10.008,00	10.128,60	31	2
1991	36.823	2.744	5.288	8.941,00	8.093,00	38	1,6
1990	32.982	2.427	4.831	8.373,00	7.677,00	44,80	2,40

Fuente: Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Fondo Monetario Internacional 2011.

Reflejaba también un nuevo fracaso relativo de la oposición luego del revés sufrido en la elección parlamentaria de diciembre. A pesar de contar con condiciones aparentemente más favorables, el candidato de la derecha no alcanzó ni siquiera la

⁵⁷ Michelle Bachelet: “Chile necesita más mujeres en política”, en noticias.terra.cl, 8 de marzo de 2012.

votación de su antecesor en la contienda presidencial del año 2000. Sin embargo, no menor resultó como “alerta temprana” que la suma de los dos candidatos de la derecha (Piñera 25,41 por ciento y Lavín 23,23 por ciento) fue superior a la candidata de la Concertación (Bachelet 45,96 por ciento).

Por último, también ponía de manifiesto las limitaciones de la estrategia de campaña de Piñera, la que, por una parte, se focalizó en torno a la supuesta superioridad de un liderazgo masculino donde se pretendió disminuir a la candidata triunfante por su condición de género, de dueña de casa, de mujer jefa de hogar, de víctima de la violencia dictatorial. Para desmerecerla (desde una visión machista-analítica) se habló durante la campaña de su inteligencia emocional, sensibilidad y empatía, como si se tratase de rasgos menores o subalternos a los atributos que debiera tener un presidente-estadista. Pero en realidad, se trató siempre de la capacidad político-cultural de la presidenta Bachelet de hacer un “*tunning*” con el progreso de la sociedad (cosa que a la propia Concertación no siempre le resulta fácil), de hacerse cargo de sus consecuencias amenazante en el plano intersubjetivo y, en general, de situarse en el lenguaje sensitivo que prevalece en el mundo en la aldea global de MacLuhan.⁵⁸

Y, por el otro, de revestir la campaña opositora con un manto doctrinario pedido en préstamo, llámese progresismo y su discurso sobre el “escándalo de las desigualdades”, conceptos que contrastaba aún con la naturaleza, identidad e imagen misma del conglomerado UDI+RN y propia de empresario. La oposición equivocó sistemáticamente su diagnóstico de estos asuntos al confundir protección social con represión de las conductas desviadas, al punto de tornar invisible la famosa mano acogedora para dejar presente únicamente la mano dura y crispada.

Al conocerse el triunfo, la presidenta Bachelet delineó en un discurso lo que serían las ideas-fuerza que guiarían su gobierno:⁵⁹

“A partir del 11 de marzo, Chile no sólo tendrá una Presidenta mujer. Será el comienzo de una nueva etapa. Una nueva etapa donde haremos que los logros de este país maravilloso entren al hogar de todos los chilenos. Porque quiero que mi gobierno sea recordado como el gobierno de todos y para todos. El nuestro es un país dinámico, con ganas de surgir. Cada vez más integrado al mundo. Un país de emprendedores que con su ingenio y creatividad crean prosperidad. Pero para atreverse a emprender e innovar, las chilenas y chilenos también deben saber que la sociedad en que viven los protege (...) Mi compromiso es que el año 2010 habremos consolidado un gran sistema de

⁵⁸ Ver el libro clásico de Marshall McLuhan y Quentin Fiore (1997), *El medio es el mensaje*. Barcelona: Editorial Paidós.

⁵⁹ Op. cit., www.tvn.cl/noticias/especiales/discursobachelet150106.htm

protección social. Un sistema que dé tranquilidad a los chilenos y sus familias. La tranquilidad de saber que tendrán un trabajo decente. La tranquilidad de saber que sus hijos podrán estudiar y desarrollarse. La tranquilidad de saber que una enfermedad no tirará por la borda años de esfuerzo. La tranquilidad de saber que tendrán una vejez digna. Eso aspiramos todos. Eso garantizará mi gobierno”.

Con las promesas de la presidenta Bachelet de mayores oportunidades para que todos pudiesen surgir y progresar, no solo se vinculó los temas del crecimiento y desarrollo experimentado con los de equidad, sino que representó (y reafirmó) el eje solidario y de justicia en torno al cual se constituye la identidad de la Concertación. En este sentido, se puede considerar la respuesta temprana a la demanda por mayor protección producto de la acelerada modernización de la sociedad y de los impactos insegurizantes del actual modelo hegemónico de la globalización, como el mayor acierto del liderazgo y discurso de Michelle Bachelet.

Claramente la desigualdad y las vulnerabilidades que traía consigo el actual paradigma mundial, se habían convertido en esa época en el principal tema de discusión de las esferas académica y político-social. Así, por ejemplo, la CEPAL expresaba al respecto:⁶⁰

“El escándalo de las desigualdades, que se exacerbaban como nunca antes en el modelo financierista que se impuso en el mundo en las últimas décadas, suscita la indignación compartida a la luz del desfondamiento de ese modelo tras la crisis. Podrán paliarse sus consecuencias financieras, pero no podrá borrarse la conciencia planetaria adquirida en este último año respecto de la arbitrariedad del modelo, ni podrá evanescerse la indignación que causan sus inequidades...Esta es y no otra, la hora de la igualdad”.

Durante su campaña, Michelle Bachelet había insistido fuertemente en una nueva forma de hacer política, con un estilo directo y apelando a la participación de las personas en las decisiones políticas a nivel local y nacional. Claramente había un intento por deselitizar la política con una democracia más participativa, es decir pasar a los soberanos de súbditos y consumidores a ciudadanos en un país ya normalizado. La reivindicación de mayor pluralismo por parte de la nueva Presidenta tenía que ver con las transformaciones más íntimas de la sociedad en el plano de las opciones valóricas, la autonomía moral de las personas y la diversidad de las formas de vida

⁶⁰ Ver CEPAL (2010) “La hora de la igualdad. Brechas por cerrar”, p. 13.

(individualización) que a una propuesta conservadora le era difícil satisfacer o sea al modelo político elitista y limitado de la transición.⁶¹

A esto se sumaba la promesa de una paridad de género en la administración pública, la que al principio se aplicaría a su propio gabinete ministerial (democracia inclusiva). Sin embargo, las expectativas políticas mayores estaban en dos cuestiones que habían sido punta de lanza durante la campaña: la reforma del sistema electoral binominal para la elección de senadores y diputados, y la reforma del sistema de pensiones (AFP), dos caras de la moneda de la desigualdad y del legado del régimen autoritario que quedarían sin transformarse en su período presidencial.

Producido el triunfo de Michelle Bachelet, quedaban las tareas de conformar un gobierno que reflejara en profundidad los sentidos de cambio y continuidad que acababan de recibir amplio respaldo popular. Esto se logró parcialmente, manteniendo los equilibrios de representación de los partidos de la Concertación en el gabinete, a partir de la combinación de viejas y nuevas caras, y de un equilibrio paritario en términos de género en los puestos de primera jerarquía pública pero no en los ministerios políticos.

En segundo lugar, se planteaba el desafío de conducir eficazmente dicho gobierno para responder a las demandas de mayores oportunidades, protección y pluralismo. Quizás una de las principales hipotecas que pesa hoy sobre la democracia chilena sean los problemas derivados del carácter pseudo excluyente del modelo económico. Este desafío lo reconoció más tarde la propia Presidenta, al decir:⁶²

“Creo que para mí sería muy importante que al final de mi gobierno pudiera decir mejoré la calidad de vida de mis compatriotas...Quiero que en el 2007 sigamos avanzando hacia un acceso más igualitario al desarrollo, una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, una mayor armonía y sustentabilidad ambiental, que la gente se sienta más segura y esperanzada. Por esto considero esencial este año seguir avanzando con decisión en la reforma previsional, la reforma de la educación, las medidas contra la corrupción, construir viviendas dignas, mejorar la calidad de la atención de salud, entre otras. Por eso enviamos el año pasado (y fue aprobado por el Parlamento) el presupuesto nacional más expansivo en la historia nacional para el 2007 (US\$29.362.000.000), lo que nos permitirá, entre otros, aumentar los montos de la salud en un 13 por ciento, de educación en un 10 por ciento, de pensiones de vejez en un 12.7 por ciento, etc.”.

⁶¹ Un interesante trabajo sobre el contexto participativo, es el de Claudio Fuentes (2006), “Democracia en Chile: Instituciones, Representación, y Exclusión”, presentando en el XXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Latin American Studies Association (LASA), San Juan-Puerto Rico.

⁶² *La Nación*, 24 de noviembre del 2006, pp. 2-3.

Michelle Bachelet antes de asumir como la primera Presidenta en la historia de Chile, declaraba que “el leitmotiv de toda mi vida ha sido cómo poder aliviar el dolor del otro, no sólo como médico, también apoyando a la gente para darle más oportunidades, que puedan surgir, pasarlo mejor, ser feliz, desarrollar su talento” [Guzmán y Rojas 2005: 79]. Y, por lo mismo, tras de asumir fijó cinco ejes para su programa de gobierno: más y mejor educación, más protección social, mejor calidad de vida, más emprendimiento y mejor democracia.

Una vez instalada, la nueva Presidenta inició rápidamente el trabajo para el desarrollo de su programa de 36 medidas, el que habían sido ampliamente divulgado durante la campaña presidencial. Entre estas se incluían las reformas legislativas necesarias para su implementación.

Bachelet, a diferencia de los anteriores presidentes concertacionistas (Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos), decidió convocar comisiones “ciudadanas” especiales, integradas por expertos, figuras públicas de diversos sectores políticos y ONG, tanto para el tema de la reforma provisional como para la nueva legislación sobre la infancia. En ambos casos se trataba de una forma inédita, más amplia pero aún no del todo representativa, de gestación de proyectos de ley, los cuales debían ser posteriormente sometidos al arbitrio de las dos cámaras del Congreso Nacional como lugar privilegiado de la democracia representativa para la negociación.

Estos espacios de diálogo político-técnico y de propuestas de política pública manifestaban un cambio en el estilo de hacer política, aunque no necesariamente llevó a modificar los actores que participaron del proceso y, en definitiva, vencer las lógicas tradicionales de toma de decisiones políticas y de representación de intereses elitistas a la hora de elaborar proyectos de ley (Aguilera, 2009: 43).

Esta ampliación relativa del espacio para la toma de decisiones fue interpretada desde un inicio como una interpelación directa al poder, lo que le implicó a la Presidenta recibir críticas desde la derecha y sus medios académicos y fundaciones respecto a su capacidad para dictar políticas o líneas de acción, resaltándose que tuvo que recurrir a comisiones de expertos para compensar la falta de conducción política y de un programa de gobierno claro.

Junto a la nominación de un gabinete paritario, era la instalación del deseo de generar una nueva forma de gobernar que, con una proposición de democracia más participativa en contraposición a la tradicional representativa, reforzaba el acercamiento

a la gente en desmedro de los intermediarios (en particular los partidos y sus operadores). Esta nueva propuesta también generó que a la Presidenta se le acusará desde el propio liderazgo de la Concertación, por una parte, de un cierto “voluntarismo” (deseo sin fundamento) al ignorar la gobernabilidad que da una coalición de partidos fuertes y organizados y, por la otra, de acercarse al populismo de otros líderes de izquierda latinoamericanos al tratar de ampliar una práctica que era igualitaria solo al momento de votar y que su invitación a participar inevitablemente otorgaban más poder a los grupos organizados. A pesar de ello, la Presidenta mantuvo cierto grado de independencia, por ejemplo, al nombrar a su gabinete: preguntó a los partidos pero ella decidió al final (Siavelis y Sehnbruch, 2009: 11).

A estas críticas de la oposición y desde su propia coalición, se unieron otras provenientes de ciertos medios de comunicación controlados por la derecha que amplificaba problemas nuevos y los heredados de la administración del Presidente Lagos. El principal de ellos era la puesta en marcha del plan de transporte urbano para la capital, denominado Transantiago, y cuya fecha de partida se había pospuesto para febrero de 2007 por las deficiencias que mostraba. A estos se sumaron escándalos de corrupción (ej. Ministerio de Obras Públicas, Chiledeportes, INDAP, etc.), conflictos medioambientales, denuncias impactantes relacionadas a la seguridad ciudadana y, en general, una oposición decidida a minimizar los espacios de diálogo y consenso, apostando por una estrategia confrontacional y de desgaste para alcanzar la presidencia el 2010.

Desde el punto de vista estructural, la presidenta Bachelet recibió el país con una tasa de crecimiento económico razonable (alrededor del 4,7 por ciento) y con la popularidad del presidente Lagos en su punto más alto (cerca del 70 por ciento), la que incluso se reflejó en una alta adhesión de un mundo empresarial siempre ligado a la derecha política. El precio de la principal exportación chilena, el cobre, alcanzó precios históricos principalmente por la demanda que generaba el proceso de desarrollo de la República Popular China, generando con ello un enorme superávit fiscal que permitía invertir parte de él en el exterior y aumentar el gasto social de manera considerable.

Sin embargo, esta bonanza económica del Estado, no vista desde el siglo XIX con la riqueza del salitre, se convirtió en un arma de doble filo al ampliar las expectativas y, por ende, las demandas sociales más allá de las estimaciones iniciales del entorno de Bachelet. Los distintos gremios y sindicatos del país comenzaron, desde principios del 2006, a presionar por mejoras económicas, muchas de ellas postergadas durante años.

Las mismas razones que llenaban de optimismo al ministro de Hacienda (finanzas) de entonces, Andrés Velasco, preocupaban a los ministros del área política. Existía en ese entonces la percepción de una posibilidad real de una ola de movilizaciones sociales si las expectativas creadas por el gobierno de Bachelet no se cumplían en un plazo relativamente breve.

4.3 Reencausar el proyecto originario

Hay académicos que rechazan que la elección de la presidenta Bachelet haya sido “un fenómeno ciudadano ajeno a los partidos” o “un cambio cultural”, y más bien lo situán en el ámbito del pragmatismo de los partidos de contar con un candidato con alta estimación y competitividad pública. Garretón (2011: 294), por ejemplo, afirma que:

“Lo cierto es que la candidatura de Bachelet surge de la Concertación y no es explicable sino por el cálculo interno de los partidos, no exento por supuesto de debate. En efecto, en ausencia de la renovación o reformulación de proyecto político en la Concertación o sus rasgos necesarios de continuidad con los gobiernos anteriores obligaba a buscar una diferencia en el tipo de candidato que diera la imagen de cambio o renovación, lo que no existiendo en los ámbitos de la diversidad regional o generacional, se encontraba en la diversidad de género...aunque se basara en encuestas de opinión pública”. Recalca que “el estilo más acogedor y sensible y la atractiva presencia mediática que caracterizaron la acción de la Presidenta, así como la creación de consejos consultivos para determinadas políticas públicas (esto último ya hecho por los anteriores gobiernos de la Concertación) no fueron acompañados de ningún mecanismo o reforma institucional que consagrara establemente la participación ciudadana”.

Si bien concuerdo que hay un cálculo de los partidos de la Concertación, sin embargo, tiendo a pensar más en la línea del sociólogo Francisco Coloane, quien expresa que “en retrospectiva, el gobierno de Michelle Bachelet, aún con el conflicto de prioridades que se presentaban por múltiples demandas, se observa como una administración maciza con objetivos orientados a reencausar el proyecto original de la Concertación de construir un país más solidario y de un desarrollo con perspectiva humana más inclusiva”.⁶³ Sus ejes programáticos apuntaban a un paradigma democrático profundizado.

⁶³ Juan Francisco Coloane, “Michelle Bachelet: El gran escollo que enfrenta la derecha en Chile”, en diario electrónico *The Paskin*, 18 de septiembre de 2010.

Este alineamiento y/o empatía con los intereses y expectativas de la opinión pública,⁶⁴ en todo caso, limitaba cualquier otra alternativa que no fuera similar a la sustentada por la Presidenta Bachelet.

Más allá de la multiplicidad de los anclajes positivos o negativos que podían despertar el estilo y las propuestas de la Presidenta Bachelet, su apuesta de fondo, aunque no del todo digerida incluso por ella misma, apuntaba a sentar la semilla de lo que Ramón Máiz (2006: 36-37) desarrolla como democracia inclusiva o mirado desde otro lenguaje como una deselitización de la política a través de una revitalización de un republicanismo cívico complejizado (hablamos de gobernanza)⁶⁵ para responder a la crisis política que se vislumbraba como creciente en las sociedades modernas.

Para algunos cultores de la democracia inclusiva, por ejemplo Takis Fotopoulos,⁶⁶ la causa fundamental de la presente crisis multidimensional (política, económica, social, ecológica y cultural que padecen las sociedades modernas) es la concentración del poder en manos de varias elites, las cuales se mantienen y se reproducen gracias a la dinámica del sistema económico de mercado (en su forma actual internacionalizada) y su complemento político, la democracia representativa, es decir, el sistema político y económico que emergió en Occidente justo dos centurias atrás.

Conuerdo con Garretón (2011: 303-304), en todo caso, cuando expresa que el gobierno de la Presidenta Bachelet debió mediar con tres importantes tensiones (contradicciones) en el plano político coalicional durante todo su período. La primera fue un estilo de gran sensibilidad pero sin el acompañamiento de un proyecto conductor que lo empalmara con los partidos y la coalición, lo que termina erosionando a estos últimos. Segundo, una orientación discursiva de corte socialdemócrata y que empalmaba bien con el alma concertacionista, pero que iba en conjunto con una dirección económica de corte más liberal y cuyo resultado final eran correcciones y no cambios. Por último, su gran popularidad y liderazgo eran prescindentes de la

⁶⁴ Moisés Naím lo trabaja en la “revolución del más” en cuanto hay más de todo, la “revolución de la movilidad” en términos que las personas se mueven más que nunca en todos los planos y la “revolución de la mentalidad” en término de transformación cognitiva y emocional, operacionalizada en más empoderamiento, libertad e insatisfacción con los sistemas políticos e instituciones. “La revolución más importante”, *El País*, 17 de marzo de 2013.

⁶⁵ Naciones Unidas nos dice que la “gobernanza democrática fomenta el desarrollo, dedicando su energía a influir en tareas como la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente, garantizar la igualdad entre los géneros y proporcionar los medios de subsistencia sostenibles. Garantiza que la sociedad civil desempeñe un papel activo al establecer prioridades y dar a conocer las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. En <http://www.un.org/es/globalissues/governance/>

⁶⁶ Takis Fotopoulos (2005), “Crisis multidimensional y democracia inclusiva”, revista *Theomai* N° 009, primer semestre, Universidad de Quilmes.

conducción política de la coalición y de los partidos, relegando a estos últimos al apoyo pero aislándolos de las decisiones y logros del gobierno.

La presidente Bachelet, entonces, asumió la democracia inclusiva-participativa de Máiz (2007: 36-37) con distintas intensidades y a veces contradictoriamente al enfrentarse con posiciones de poder pragmáticas, neoliberales y/o tecnocrática al interior y exterior de la coalición en un escenario complejo y dinámico, a partir de la irrupción de demandas y conflictos sociales crecientes en un período político más corto (la presidencia esta vez sólo duraría 4 años a diferencia de los 6 años de los presidentes Frei y Lagos).

Este tipo de democracia se expresa en la elaboración simultánea y equilibrada de incorporación al proceso democrático (agenda, políticas públicas e instituciones) de los ciudadanos y colectivos más vulnerables y sus demandas, como valor constitutivo, portadores de capacidades y preferencias y no meramente expresivo. Asume también una perspectiva que trasciende los consensos (agonística frente a excesivas pretensiones consensualistas), esto es, asume la inevitabilidad de las dimensiones de conflicto y contestabilidad, de poder y desigualdad en los procesos de representación, participación y la deliberación. Por último, pone una atención especial a la centralidad del pluralismo y su acomodación democrática, en cuanto pluralismo de formas de vida y culturas.

La democracia participativa-inclusiva (ver Cuadro 19) se concreta, entre otros, en torno a cuatro ejes de reflexión normativa y experimentación democrática empírica. Primero, la atención a los problemas de la desigualdad material y el antagonismo en torno al poder político en los contextos de decisión democrática. Segundo, la necesidad de articular los niveles local y estatal a efectos de participación, control y cooperación. Tercero, la gestión del pluralismo cultural y la representación de los grupos minoritarios. Por último, la recuperación del poder que nace de la acción colectiva.

La democracia participativa-inclusiva, entonces, puede ser caracterizada como una propuesta para construir una nueva forma de organización social basada en los principios de autonomía, comunidad y reintegración con la naturaleza,⁶⁷ es decir una suerte de gobernanza multinivel.

Quizás el signo más palpable de esta aspiración de democracia inclusiva y también de sus limitaciones, además del nombramiento de un gabinete paritario de género o de nuevas caras, fue la organización de los sectores subalternos interpeladores del

⁶⁷ www.democraciainclusiva.org

escenario dominados por las élites y sus políticas de consensos a partir de la invitación de la Presidenta. Es decir, su decisión de superar la democracia delegativa y de baja calidad sustentada en la relación entre el neoliberalismo y aspectos formales (y de fondo) del régimen democrático ([Garretón, 2012: 37-38).

Cuadro 19			
Comparación de tipos de democracias			
Representativa		Participativa	
Representación		Identidad	
Agregación		Participación	
Libertad Negativa		Libertad Positiva	
Privado		Público (colectivo)	
Votantes		Ciudadanos	
Mandato Representativo		Mandato Imperativo	
Mayorías		Bien Común	
Política Instrumental		Política Autotélica	
Neutralidad Estatal		Estado Intervencionista	
Liberalismo		Democracia	

Fuente: Máiz (2006: 25).

La masiva movilización de estudiantes secundarios (abril-mayo del 2006) en contra del sistema educacional, la más grande de todas las movilizaciones desde el retorno a la democracia (al menos hasta su nueva versión 2.0 en el 2011 y 2012) y que contó con la adhesión y/o simpatía mayoritaria de la ciudadanía,⁶⁸ fue un signo palpable de ello. De esencia eminentemente gremial (transcendió cualquier anclaje con los partidos políticos) y usando métodos tradicionales con las nuevas tecnologías de la comunicación de la información en su operacionalización, lograron la renuncia del ministro de Educación, Martín Zilic (DC) pero como cara visible y no la del poder real de la tecnocracia de Hacienda, y el cambio en las prioridades del gobierno al relevar el tema de la educación pública y crear una comisión en vista a proponer una reforma profunda a un sistema educacional en crisis

Era de verdad una ironía que unos muchachos que no tenían edad para votar (y que en su mayoría habían nacido después de finalizada la dictadura de Pinochet) pusieran en jaque al “gobierno ciudadano”. Pero lo cierto es que era una movilización en contra de la tecnodemocracia, de los vetos impuestos por los sectores detrás de los consensos y

⁶⁸ En la última encuesta de la empresa de centro-derecha Adimark de septiembre de 2012, se expresaba que un 70 por ciento aprobaba las demandas del movimiento estudiantil. En <http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=163>

por una ampliación de los espacios democráticos más allá de las formalidades que resguardaba la democracia “representativa” y no contra la propuesta de la presidenta Bachelet. Es decir, era el intento de expandir la ciudadanía más allá de los corsés del paradigma actual de gobernabilidad hacia una democracia más inclusiva, la gobernanza (Moreno, 2006: 239).

Sin embargo, posteriormente al votar la mayoría de los estudiantes la desmovilización tras algunas promesas del gobierno (el sector más intransigente exigía cambios de fondo al sistema educacional y al modelo económico del país), descomprimieron la situación y le dieron una salida momentánea a la crisis. Fue justamente en ese momento cuando la clase política en general reaccionó con temor frente a un movimiento estudiantil (ciudadano) que no entendían y que además los culpaba del estado actual del sistema educacional público chileno. Así de un tímido apoyo inicial para no ir contra del consenso que reflejaba la causa estudiantil en las encuestas, los diversos partidos políticos optaron por el sentido de orden que argumentaba la gobernabilidad por encima de otros derechos básicos⁶⁹ y condenaron la toma de los colegios y la suspensión de las clases, olvidando que una de las características principales de la tradición republicana histórica es su predisposición a poner en primer plano la dimensión organizativa de la movilización política.

En definitiva, la mayoría de los partidos exigían el retorno a la “normalidad” y la instalación de una mesa de negociaciones en base a las demandas iniciales del movimiento. Esto, unido a la caída en el apoyo ciudadano a las demandas y a las divisiones al interior del movimiento estudiantil, pospusieron el problema de la educación pública e impusieron límites al activismo movilizador e interpelador propio de una democracia inclusiva. A pesar de ello, la frágil cohesión social alcanzada con la política de “consensos” estaba siendo claramente interpelada con una nueva dimensión participativa que traía consigo la normalidad democrática (retornos).

Sergio Grez ratifica esto al hacer un análisis global del movimiento estudiantil hasta hoy. Enfatiza que:⁷⁰

“(…) su aporte no se limitó al plano de la educación, también significó una crítica implacable -a veces demoledora- de la institucionalidad y de las prácticas políticas

⁶⁹ Quien hace un análisis interesante frente a los derechos a protesta es Mirta Mántaras, “La otra mirada del Derecho”, en <http://www.cordobanexo.com.ar>

⁷⁰ Sergio Grez Toso, “Chile 2012: El movimiento estudiantil en la encrucijada”, *Le Monde Diplomatique* (Chile) N° 126, enero-febrero 2012.

imperantes en el Chile post dictatorial. El carácter tutelado, protegido y de baja intensidad de la democracia neoliberal chilena quedó al desnudo en muchas oportunidades. La ‘clase política’ sin distinciones de partidos ni bloques fue sometida a la crítica más incisiva de las últimas décadas y su nivel de desaprobación ciudadana alcanzó porcentajes records”.

Ya a fines de junio del 2006 nuevas encuestas reflejaron una brusca caída en la popularidad del gobierno, alcanzando sólo el 44,2 por ciento de aprobación, la cifra más baja en el mismo período con respecto a los tres gobiernos anteriores de la Concertación.⁷¹ Este signo de descontento conduciría, entre el 2006 y 2007, a la Presidenta a impulsar diversos cambios en el gabinete que traerían a parte de la “vieja guardia partidaria” de la Concertación a “repetirse el plato”, denotando con ello, además de signos de “debilidad” gubernamental en términos de presencia y control, que se volvería a gobernar con los partidos a la vez de congelar ciertas simbologías de la participación.

La segunda movilización de relevancia que enfrentó la presidenta Bachelet correspondió al conflicto de los trabajadores subcontratistas de Codelco, cuarto clivaje de Lipset y Rokkan (1967), sector laboral de enorme importancia dado el carácter que está tomando el trabajo así como por la gran incidencia del cobre en la economía nacional (en especial para financiar las políticas sociales).⁷²

La actuación del gobierno, sin embargo, esta vez no solo debió aceptar las demandas concretas como no ocurrió con los estudiantes, sino que también, e influenciado por la Iglesia Católica en particular, tuvo que abordar los temas de fondo de la igualdad y equidad. Para ello se constituyó nuevamente un Consejo Asesor con representación de diversos sectores (empresariales, técnicos, sindicales, intelectuales, etc.) con el que se buscó generar políticas orientadas a fortalecer el capital humano de modo de incrementar la productividad, mejorar la distribución del ingreso y desarrollar relaciones

⁷¹ Sin lugar a dudas, la movilización estudiantil que se desató en mayo de 2006 fue el factor más relevante; le costó más de 40 puntos porcentuales al gobierno de la presidenta Bachelet. El Transantiago y las protestas de la CUT en agosto de 2007 también dañaron la popularidad de la entonces mandataria, pero en una magnitud menor. Y si bien el optimismo de los chilenos por la llegada del verano y las fiestas de fin de año le aumentó la popularidad de noviembre a diciembre en casi 8 puntos porcentuales promedio entre 2006 y 2010, ello fue insuficiente para contrarrestar los negativos efectos de las movilizaciones sociales. Sebastián Valenzuela, “Conflictos sociales, economía y aprobación del gobierno: Las lecciones del caso Bachelet para el caso Piñera”, en <http://uc-cl.academia.edu/Valenzuela/Papers/399060>

⁷² Para esta fecha, el cobre representa la fuente de divisas más importante del país y, según datos del Banco Central de Chile, generó ingresos por su venta por US\$ 18,305 millones en 2005, un 26,4 por ciento más que en 2004 y un salto de 134,2 por ciento respecto a 2003. En BBC Mundo.com, 7 de agosto de 2006.

laborales equilibradas, todo lo cual apuntaba a disminuir la desigualdad sobre todo en el mundo laboral. Pese a ello, no enfrentó el principal instrumento de la equidad que son los impuestos a través de una reforma fiscal, como tampoco logró un cambio sustantivo en la legislación laboral reconocida internacionalmente como injusta, especialmente en lo que a salarios dignos, seguridad laboral y negociación se refiere.

Una tercera gran movilización correspondió a las masivas y espontáneas protestas ciudadanas en contra los problemas generados por el plan de transporte público de Santiago, Plan Transantiago.⁷³ Este era un proyecto de transformación radical del sistema de transportes en la capital diseñado bajo el gobierno del presidente Lagos e implementado bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y que imitaba proyectos similares implementados con éxito en Brasil y Colombia.

Más allá de las responsabilidades compartidas de ambos gobiernos en los graves problemas que acompañaron la implementación del Transantiago, además de los que les corresponden al sector privado involucrado, se asistía a una verdadera revuelta de la ciudadanía, quienes no habían sido consultados cuando se les invocaba como principales beneficiarios y tampoco se les ofrecían todas las providencias para ofrecer un servicio mejor al existente (falta de paraderos adecuados, buses de acercamiento, información expedita, etc.). La reacción del gobierno aquí no fue la de crear un Consejo sino cambiar las autoridades políticas del transporte e iniciar el lento camino de las “correcciones” a las importantes falencias que presenta hasta hoy.

Un cuarto problema de envergadura que debió enfrentar la presidente Bachelet, fueron los impactos negativos globales de la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers en Estados Unidos en septiembre del 2008. Si bien Chile estaba mejor preparado que el resto de la región para hacer frente a esta nueva crisis económica internacional (reservas monetarias, ordenamiento fiscal, diversificación de sus mercados e importancia de la demanda de China, entre otros), para atenuar su impacto económico-social se tomaron una serie de medidas contra-cíclicas como incrementar el gasto público del 2009 en cerca de 1 por ciento del PIB (US\$ 1.485 millones), con lo que el crecimiento real de este en 2009 llegaría a 10,7 por ciento, reducción transitoria de los ingresos fiscales en US\$ 1.455 millones y los desembolsos que no constituyeron gasto

⁷³ Un trabajo interesante al respecto es el de Felipe Morandé y Juan Esteban Doña, “Transantiago: el remedio que están matando al paciente”, en Trabajos de Investigación en Políticas Públicas (TIPS), N° 5, 7 de agosto de 2007, Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

sino adquisición de activos financieros, como los aportes de capital a Codelco y CORFO.⁷⁴

En el ámbito más político, desde el segundo año de gobierno de la presidenta Bachelet, en los medios de comunicación se había empezado a instalar la idea de que la Concertación, la coalición más estable de la historia de Chile así como también de la historia democrática de América Latina, habría llegado a una suerte de “fin de ciclo”. Otras formulaciones que circulaban procedentes de los ámbitos académicos como políticos, aludían a los males que produce una suerte de “*ideología del gobiernismo*”,⁷⁵ que reproduciría las características de sistemas de partidos como coaliciones de intereses o partidos “holding” más que programáticos como fue en el inicio y de forma explícita la Concertación.

Otros afirmaban que la hoja de ruta de la coalición se habría agotado o bien que se hacía necesaria una reingeniería profunda. Desde la oposición de derecha principalmente (léase RN y la UDI), como nunca en el pasado, se adoptó frente al gobierno de la presidenta Bachelet una actitud fuertemente obstruccionista simbolizada en la lógica del “desalojo de Allamand”⁷⁶ al señalarse que la coalición de gobierno adolecía de una cierta “fatiga de material”.

A estas alturas la Concertación claramente enfrentaba nuevos dilemas de gobernabilidad,⁷⁷ atrapada entre su imagen de éxito y un gradualismo marcado por la prudencia (y la política de consensos) que resultó funcional y productiva para las primeras etapas, pero que devino en inmovilismo producto del virtual empate político existente y en un secuestro relativo de la propia democracia.

⁷⁴ Las medidas fueron: a) estímulos a la inversión y al consumo con US\$ 700 millones para un masivo plan de inversión pública; eliminación del impuesto de timbres y estampillas para todas las operaciones de crédito en 2009 y reducción de la tasa a la mitad en el primer semestre de 2010; incremento transitorio de los beneficios del decreto ley 701 de incentivo a la forestación; capitalización a Codelco por US\$ 1.000 millones; b) financiamiento de empresas a través de la reducción transitoria de los pagos provisionales mensuales (PPM); ampliación de la línea de financiamiento CORFO para el factoring bancario y no bancario; implementación de una nueva línea CORFO para brindar garantía en la reprogramación de créditos; c) apoyo a las personas con el pago de un bono especial de \$ 40 mil por carga familiar para beneficiarios de varios programas sociales; devolución anticipada del impuesto a la renta para personas naturales correspondiente al año tributario 2010; etc.; d) empleo y capacitación a través de la creación de un subsidio al empleo formal para trabajadores de sueldos bajos entre 18 y 24 años; dos iniciativas para hacer más atractiva la capacitación.

⁷⁵ Ver, Antonio Cortés Terzi, “Concertación: ¿Ideología del gobiernismo” vs. cultura de centro-izquierda?”, Informe N° 600, *Asuntos Públicos* – CED, abril de 2007.

⁷⁶ Ver Andrés Allamand (2007), *El desalojo. Por qué la Concertación debe irse el 2010*. Santiago: Editorial Aguilar.

⁷⁷ María de los Ángeles Fernández (2009), “El futuro de la Concertación: ¿Un giro impostergable?”, 26 de enero, en www.chile21.cl

La paridad de fuerzas políticas en el Congreso y la exigencia de altos quórum para algunas reformas como las de tipo político y que obligaron en un principio a buscar consensos en vista a avanzar sin generar conflictos, en el cuarto gobierno de la Concertación fueron visto por la ciudadanía y una gran mayoría de los propios militantes del conglomerado como la negociación acomodaticia de costumbre (en particular de los liderazgos concertacionistas que se identificaron rápidamente con el modelo y su poder) más que de voluntad de avanzar y que terminaba por trastocar la esencia de muchas iniciativas (las deslavaba), es decir producía una especie de “gatopardismo” sin denuncia. Incluso más, ya a partir del año 2006 los parlamentarios de la UDI y de RN estaban actuando disciplinada y coherentemente en función de los intereses más estratégicos de su coalición. Así y aprovechando las tensiones y diferencias que se notaban entre los partidos de la Concertación a partir del año 2007, a la derecha le fue posible hacer efectiva la acusación constitucional en contra la ministra de la Educación DC, Yasna Provoste, el año 2008 (Avendaño, 2012: 21).

Siavelis, apuntando al meollo del dilema político que afectaba a la coalición gobernante, expresó que la Concertación tiene la responsabilidad de fundar un nuevo modelo político-transicional a partir del reconocimiento que enfrentaba un conjunto de “enclaves de la transición “que estarían complotando contra una democracia representativa de calidad (2009: 3-21).

Entre los factores perturbadores, Siavelis empezaba por citar el cuoteo. Recalcaba que si bien sirvió como una de las claves del éxito de la transición al operacionalizar la distribución del poder y la entrada de los partidos al gobierno (y evitar los “*walk away*” coalicionales), hoy se le percibe como politiquería al nombrarse funcionarios carentes de talentos y experiencias, una suerte de premio de consuelo que traspasaba un sentido de incompetencia al propio gobierno. También señalaba como corrosivo el monopolio de la elite en la selección de candidatos y de la política electoral. Analizaba que si bien la democratización de los procesos de selección de candidatos tiene la posibilidad de reducir el control de la elite, la dinámica del sistema electoral (binominal) también ha impedido la democratización de cualquier proceso de selección de candidatos, dado que es un proceso fundamental para la mantención de la coalición al asegurar la representación partidaria.

Otro factor disonante con una democracia de calidad en esta época era la dominación absoluta de los partidos de la esfera política. Este autor señalaba que partidos fuertes y bien institucionalizados son actores a menudo centrales en

democracias de alta calidad. Sin embargo, expresaba que el dominio cada vez mayor del sistema político chileno por partidos con bajos niveles de adherencia popular contribuye en el desarrollo de una “partidocracia”.

La falta de organizaciones sociales fuertes como las vividas en parte importante del siglo XX y de una institucionalización de las propias coaliciones (asambleas con capacidad de decisión, comisiones programáticas permanentes, etc., que interlocutaran con el Ejecutivo), condujeron a la formulación de políticas elitistas y extrainstitucionales. Las élites, dice Siavelis, han dominado el proceso de formulación de políticas en el período pos autoritario, y dada la debilidad del Congreso, las negociaciones, en su mayoría, se realizan entre las élites del Ejecutivo, la oposición y actores extraparlamentarios. El modelo también incluye un acuerdo informal conocido como “partido transversal” (Siavelis y Sehnbruch, 2009b: 7), que se refiere al grupo informal integrado por políticos claves que definen la política.⁷⁸ Además del Congreso, por cierto, queda también afuera la ciudadanía.

La intocabilidad del modelo económico, en particular del Estado subsidiario y del mercado como asignadores de recursos, como ya se mencionó es otro de los elementos que impedía (e impide) la consagración de una democracia más plena y, por lo mismo, más legítima como aspiraron los presidentes pos plebiscito. Claramente, el sistema político muestra signos de insatisfacción con la falta de voluntad para hacer cambios económicos ante las graves desigualdades que padece el país y la demanda por generar pautas más inclusivas como lo proponía la propia presidenta Bachelet. Condicionado por el pacto del silencio Alianza-Concertación y el marco institucional que lo sustenta, y la posibilidad de fractura ideológica al interior de la propia coalición, la realidad política demostraba que el modelo podía ser suavizado pero que la apuesta por la domesticación tenía límites claros y precisos.

Producto de esto, se empezaba a dar un sexto factor ligado a la cultura estratégica y que se anclan a una cierta erosión en la credibilidad en las instituciones (Estado y partidos) y cuyo efecto principal es el “abandono” del servicio público en la percepción de que el gobierno no es el único lugar para resolver problemas y que el sector privado o la simple privatización del individuo ofrecía mejores oportunidades.

⁷⁸ Un punto de encuentro clave en este sentido fue el Centro de Estudios Públicos, presidido por Eliodoro Matte, testera de uno de los grupos económicos más influyentes del país. Otro caso es el de Paz Ciudadana, cuyo presidente es Agustín E. Edwards, propietario del diario de derecha *El Mercurio* y donde participan dirigentes empresariales y de los principales partidos.

Para esta época y coincidiendo plenamente con lo expresado por Paulo Hidalgo (2011: 195), en el ámbito parlamentario (también el concertacionista) se había instalado un nuevo repertorio conductual con diversas intensidades. Este se reflejaba en la intensión de perfilarse ante la opinión pública y las élites con temas propios de modo de proyectar su carrera particular (más individualista en esencia) más que su representación partidaria. Esto dificultó la posibilidad de buscar acuerdos entorno a una agenda nacional al estar esta disputada por múltiples agendas personales con políticas públicas propias y a lo mucho representativa de su espacio electoral. Este fenómeno, además de dificultar las relaciones Ejecutivo-Legislativo, tensó las relaciones coalicionales y degradó a los partidos políticos con las agendas personales y grados de independencia de los parlamentarios que se sienten dueños de sus escaños.

A fines del 2007 la aprobación del gobierno había llegado al segundo nivel más bajo pos transición y se hablaba del gobierno concertacionista más débil, en medio de un tercer gabinete (Siavelis y Sehnbruch, 2009b: 2). Estos dilemas, en todo caso, no inhibieron a la Presidenta para seguir avanzando con gran contundencia en áreas claves para fortalecer la protección social, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y, en general, un desarrollo más humano y sustentable, a través de leyes que apuntaban a la formulación de políticas públicas de calidad,⁷⁹ eficientes de la cual nos habla Sartori (1992: 46):

"(...) La estabilidad gubernamental indica mera duración; los gobiernos pueden tener larga vida y a la vez ser impotentes: su duración no constituye de manera alguna un indicador de eficiencia o eficacia".

Durante el gobierno de la presidenta Bachelet en la lógica de legitimidad-eficacia-eficiencia (éxito) y de una legitimación a partir de lo institucional, se despacharon 316 leyes al Congreso Nacional destinadas a satisfacer demanda y conflictos inmediatos y objetivos de una democracia más estratégica, algunas de la cuales fueron promulgadas durante el gobierno del presidente Piñera.

⁷⁹ Eugenio Lahera señala que “una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados”. En “Política y política pública”, Serie *Políticas Sociales* N° 95, División de Desarrollo Social, CEPAL, Santiago, agosto de 2004.

Estas, en lo principal, pueden ser desagregadas en diversos y contundentes tópicos e instrumentos jurídicos que reflejan voluntad política y un norte claramente reconocido por la ciudadanía de orientación progresista, de protección y justicia social. Así, por ejemplo, encontramos en el ámbito de la protección social, leyes tan relevantes como la Ley 20.255 que establece la Reforma Provisional; la Ley 20.379 que crea el Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile, Crece Contigo” o la Ley 20.328 que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía.

En la esfera de los derechos laborales tan desmedrados durante la dictadura, se promulgaron instrumentos como la Ley 20.123 que regula régimen de subcontratación y servicios transitorios; la Ley 20.166 de derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aún cuando no exista sala cuna; la Ley 20.281 que prohíbe pagar un salario inferior al ingreso mínimo; la Ley 20.189 de regulación del trabajo de menores de edad; etc. Estos derechos laborales y de protección a la familia, fueron a la par de una serie de iniciativas destinadas a compensar a las familias y/o individuos en situaciones desmedradas a través de bonos y subsidios. Ahí está la Ley 20.102 que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas; la Ley 20.269 de bono para pensionados y otras materias; la Ley 20.366 que adelanta beneficios de las Pensiones Solidarias; la Ley 20.111, 20.262 y 20.360 de bono para familias de menores ingresos; la Ley 20.327 de reajuste remuneraciones personal FF.AA. o la Ley 20.230 de incentivos al desarrollo de las australes Palena, Aysén y Magallanes, entre muchas otras.

Otro eje fundamental de estos instrumentos y políticas fue la protección de la persona y sus derechos. Ahí están la Ley 20.352 que permite la adhesión al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional; la Ley 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra; la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo y el Convenio 169 OIT sobre derechos de los pueblos indígenas, hasta la Ley 20.117 que reconoce la existencia y atributos de la etnia Diaguita y la calidad de indígena Diaguita.

Przeworski (1998: 61-62) destacaba con razón que pese a que la democracia (a través de la universalización del sufragio) ha impulsado la construcción de una ciudadanía matizada por un carácter igualitario de derechos y obligaciones, sin embargo, “la dificultad que enfrentan los regímenes contemporáneos es que si bien la democracia es un sistema de derechos positivos, no genera automáticamente las

condiciones requeridas para el ejercicio efectivo de esos derechos y esas obligaciones”, por lo que terminan constituyéndose de alguna manera en democracias carentes de una ciudadanía efectiva para amplios segmentos de la comunidad política.

Concordando con esta aseveración, la presidenta Bachelet promovió insistentemente la idea-fuerza de una mejor democracia. Y para ello, entre otras, promovió la Ley 20.337 de reforma constitucional que consagra la voluntariedad del sufragio y la inscripción automática en los registros electorales (aprobada durante el presidente Piñera); la Ley 20.390 de reforma constitucional en materia de gobierno y administración regional que permite a la ciudadanía elegir a los consejeros regionales; la Ley 20.299 que establece feriado el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes; la Ley 20.183 donde se reconoce el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad, entre muchas otras iniciativas dedicadas a fortalecer y profundizar el ejercicio ciudadano.

Con los escándalos de corrupción provenientes del régimen militar y revisualizados con el MOP-Gate del presidente Lagos, la probidad y la transparencia pública se convirtieron en un parámetro esencial de la buena democracia y un estándar de legitimidad y buena gestión. Durante el 2006 y el 2010 se mandaron al Parlamento, entre otras, la Ley 20.285 de acceso a la información pública y transparencia de la función pública; la Ley 20.205 de protección a funcionarios públicos que denuncien irregularidades y faltas a la probidad; la Ley 20.238 de nuevas exigencias para postulantes a licitaciones convocadas por organismos del Estado y la Ley 20.341 que sanciona cohecho de funcionarios públicos.

Sin embargo, como la corrupción u otros ilícitos no son solo propios del ámbito público, se mandaron leyes para regularizar-controlar al sector privado como La Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversos delitos o la Ley 20.371 que complementa la ley para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, entre otras.

No es casualidad, entonces, que el informe de Transparencia Internacional 2011 exprese que Chile (7,2) y Uruguay (7,0) son los líderes en transparencia en Latinoamérica y están entre los 25 países menos corruptos a escala mundial.

La presidenta Bachelet al clausurar los 121 años de creación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a mediados del 2010, expresó que “En inglés hay una frase muy buena que dice ‘*Democracy has to deliver*’”. Es decir, “la democracia tiene que

producir los bienes y servicios necesarios que permitan a los ciudadanos sentir que la democracia es el mejor sistema en el que se puede vivir” (...) y si no se resuelven los anhelos, deseos y necesidades de los ciudadanos, la democracia se debilita irremediablemente.⁸⁰

Para superar este problema, además de las propuesta de protección social y laboral, se promovió el desarrollo económico y productivo a través de iniciativas como la Ley 20.124 de bonificación al contrato de aprendizaje, la Ley 20.338 que crea un subsidio al empleo de jóvenes, la Ley 20.289 de incentivo tributario a las PYMES, la Ley 20.318 que aporta capital al Banco del Estado de Chile y amplía el patrimonio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios para facilitar su acceso al crédito, la Ley 20.351 que protege el empleo y fomenta la capacitación laboral permitiendo pactar permisos sin goce de sueldo, etc.

Siendo el Estado el principal promotor de la igualdad a través de la redistribución y las políticas sociales, otros temas muy relevantes fueron su fortalecimiento y modernización. En esta dirección destacan, por ejemplo, Ley 20.370 (Ley General de Educación) nueva normativa de la educación chilena, la Ley 20.129 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial, la Ley 20.267 que crea el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, la Ley 20.173 que crea el cargo de Ministro del Medio Ambiente, y la Ley 20.402 que crea el Ministerio de Energía.

Tal como lo expresó la ex presidenta Bachelet en el Foro BID-Diálogo Interamericano en el 2011, “*Prevención de la Violencia con Cohesión Social, Hacia un Modelo Integral de Seguridad Ciudadana*”, durante su gobierno junto a la protección de las personas y sus derechos, a las políticas de fortalecimiento de la familia, de recobrar espacios públicos para la comunidad, se desarrollaron una serie de medidas destinadas a proteger la integridad física, síquica y patrimonial de las personas: seguridad pública. Graficó esto diciendo que:

“Por ejemplo, durante mi gobierno identificamos que los niños que cometían delitos y tenían 10, 11 o 12 años provenían de 35 barrios muy identificados y con intervenciones integrales se podría obtener una respuesta fundamental para prevenir la violencia que esos niños habían sufrido durante su infancia y que generaba un aprendizaje social que termina finalmente con ellos incluidos en las redes de la delincuencia. Se trata de

⁸⁰ “Bachelet y la utopía de la democracia”, *Cosas* N° 221, pp. 8-10, Guayaquil, julio 2010.

identificar patrones que pueden intervenir y procurar soluciones. Hicimos un programa que a mí me gustaba mucho, las escuelas preventivas de fútbol, cuyo objetivo era generar en niños y familias una actividad interesante, atractiva, donde las energías se consuman pero además donde se generan principios importantes como trabajo de equipo, desarrollo de jerarquías. Tuvimos resultados extraordinarios, abrimos el programa con niños y después tuvimos que integrar a niñas porque nos pidieron ser parte de este proceso”.⁸¹

En este ámbito también se promulgaron una serie instrumentos legales que ponían al día (precisaban y adecuaban), por ejemplo, la responsabilidad penal juvenil (Ley 20.191); suprimía funciones administrativas de Carabineros (Ley 20.227) para contar con más contingente en la calle o ponían nuevos límites a libertad condicional para quienes hayan sido condenados por violación de menores (Ley 20.230), entre otras. Es decir, una batería de leyes más adecuadas para tratar la seguridad ciudadana.

El patrimonio ambiental y cultural ambiental fue otra área de enorme desarrollo donde la promulgación de leyes da, en parte, cuenta de ello. Además de crearse el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, destacan la Ley 20.293 que protege a los cetáceos, la Ley 20.380 de protección a los animales, la Ley 20.096 que establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, la Ley 20.257 que obliga a empresas generadoras eléctricas a invertir en energía renovables no convencionales, etc.

En el ámbito de la cultura, además del aumento de fondos para la creación y exposición, destacan las firmas de la Convención sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y de la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la Ley 20.216 que crea normas que benefician al circo chileno, la Ley 20.243 que reconoce nuevos derechos de propiedad intelectual a artistas e intérpretes de obras audiovisuales, Ley 20.386 que establece el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre otras iniciativas.

En el área internacional, Chile gozó del estatus de una “potencia secundaria” y de los frutos de una inserción compleja. Además de la administración y profundización en algunos casos de los acuerdos generales ya destacados en los acápite anteriores, durante la gestión de la presidenta Bachelet, el Ejecutivo en la figura de la Presidenta jugó un activo liderazgo regional, por ejemplo, como presidenta Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), así como se desplegó un fuerte

⁸¹ Discurso de Michelle Bachelet en Seminario Internacional Prevención de la Violencia con Cohesión Social, Hacia un Modelo Integral de Seguridad Ciudadana. Montevideo, 8 de noviembre de 2011. En www.dialoga.cl

proactivismo hacia los países vecinos como se verifica en el nuevo Tratado de Integración y Cooperación con Argentina y el constructivo diálogo con Bolivia.⁸²

En este período, además, se promulgaron y/o suscribieron diversos convenios de alcance internacional. Entre estos cabe destacar la Ley 20.138 que autoriza la contribución de Chile a la acción contra el hambre y la pobreza mundial, el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe, la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y un sin número más.

Dos importantes hechos más marcan el fin del cuarto gobierno de la Concertación y de la primera Presidenta en Chile. El primero, se refiere al triunfo del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2010 y el otro, como lo veremos más adelante, es el terremoto que azotó a el país.

En la primera vuelta de la elección presidencial del 2009 y al igual que lo sucedido con los presidentes Lagos y Bachelet, Piñera no logró el 50 por ciento más 1 de los votos válidamente emitidos para ser consagrado Presidente el la primera vuelta. Incluso más, la suma de los otros 3 candidatos de naturaleza progresista superaron el 55 por ciento de los votos válidamente emitidos (ver Cuadro 20), aunque como se verá posteriormente la suma en contra del candidato de derecha no fue mecánica entre disyuntivas dicotómicas como había sido en años anteriores.

Cuadro 20			
Elección presidencial de 2009-2010, primera vuelta			
Candidatos	Coalición	Votos	Porcentaje
Sebastian Piñera Echenique*	Coalición por el Cambio	3,074,164	44.06%
Eduardo Frei Ruiz-Tagle*	Concertación	2,065,061	29.60%
Marco Enríquez-Ominami Gumucio	Nueva Mayoría para Chile	1,405,124	20.14%
Jorge Arrate Mac-Niven	Juntos Podemos Más	433,195	6.21%

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University – OAS.

En la segunda vuelta, sin embargo, al no traspasarse la votación necesaria de los otros dos candidatos progresistas a Eduardo Frei a pesar su mayor proximidad ideológica, se erige como vencedor Sebastián Piñera (ver Cuadro 21).

⁸² Alberto van Klaveren, “La política exterior de Chile durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010)”, en *Estudios Internacionales* 169: 55-172, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Cuadro 21			
Elección presidencial de 2009-2010, segunda vuelta			
Candidato	Coalición	Votos	Porcentaje
Sebastian Piñera Echenique	por el Cambio	3.582.800	51,60%
Eduardo Frei-Ruiz Tagle	Concertación	3.359.801	48,39%

Fuente: Political Data Base of Americas, Georgetown University-OAS.

De esta forma llegaba electo democráticamente a la Presidencia de la República un representante de la derecha después de más de 50 años (Jorge Alessandri Rodríguez fue el último Presidente de derecha electo en 1958). A la vez, el 2010 se constituía en el año más difícil para la Concertación con todo tipo de predicciones catastróficas como que se iba a fragmentar, iba a desaparecer, la DC gobernaría con la derecha o se levantaría un fenómeno “sarkociano”, pero nada de eso pasó como se verá más adelante.⁸³

4.4 Los análisis de la derrota y las interrogantes de futuro

La fragmentación de parte de la Concertación tras 20 años en el poder fue un factor esencial en la derrota electoral de este conglomerado. Además de Frei, estaban Jorge Arrate (ex PS, ex ministro de Frei y ex embajador de Lagos) y Marco Enríquez Ominami, ello sin contar los senadores que no se postulaban a la presidencia y que habían dejado el conglomerado como Adolfo Zaldívar DC, Carlos Ominami PS y Fernando Flores PPD además de algunos diputados DC, PS y PPD.

Si bien estos candidatos no lograron constituirse en proyectos centrífugos (en el caso de MEO, fue más un espacio), amplificaron las críticas de la oposición de derecha en contra de la coalición y de sus gobiernos y algunos de ellos llegaron casi al nivel de jugar un papel de “oposición desleal” [Linz, 1987: 62-65]. Sergio Muñoz, columnista del oficialista diario *La Nación*, escribió que Marco Enríquez Ominami, MEO como lo bautizó la prensa, jugó un “tóxico papel” en la primera vuelta y que contribuyó al triunfo de la derecha al “atacar con saña” a Eduardo Frei y prácticamente no apoyarlo en la segunda vuelta,⁸⁴ a diferencia de Jorge Arrate que se alineó con Frei al distinguir al “adversario principal” (Sebastián Piñera y la derecha) de un contrincante con el cual

⁸³ Entrevista a Ernesto Ottone, “He visto demasiados cadáveres políticos enterrar a la Concertación”, revista *Qué Pasa*, 14 de enero de 2011, pp. 32-39.

⁸⁴ Gustavo González, “Piñera lanza la segunda transición”, ipsnoticias.net del 18 de enero del 2010.

tenía discrepancias de distintos grados pero se le reconocía voluntad de lograr mayor justicia y equidad.

En lo concreto, y como lo expresó Marta Lagos, la Concertación pierde 680 mil votos entre la elección en que obtuvo más votos, que fue la de Eduardo Frei en 1993 y la del 17 de enero del 2010. Al mismo tiempo la derecha gana 463 mil votos respecto del Sí en el Plebiscito de 1988. Ese es el cambio electoral que produce la alternancia en el poder después de veinte años.⁸⁵ Visto desde otra perspectiva, la baja entre 1989 y el 2009 es del 55,17 al 29,60 por ciento, factor que causa que desde 1999 la elección de Presidente se resuelve en segunda vuelta (en los “ballotage” la baja del pacto es de tres entre Lagos y Bachelet y de cinco puntos porcentuales entre Bachelet y Frei).

Sin embargo, este conglomerado venía perdiendo votos desde hacía tiempo como lo demuestran diferentes elecciones y que no necesariamente viraron hacia la derecha. Teniendo presente que todas las elecciones son diferentes, a nivel municipal las cifras muestran que entre el 1992 y el 2008, la Concertación bajo del 53,3 al 41,85 por ciento de las preferencias, esto ha implicado que entre 1992 y el 2008 hay una pérdida de 73 municipios (la derecha logró alcaldías en las cuatro principales ciudades como lo son Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción) y, por lo mismo, hay una cantidad bastante importante de habitantes y electores que comienza a ser gobernada por la oposición de entonces pero no por motivos ideológicos sino por nuevas promesas.

En los diputados, la votación entre 1989 y el 2009 la Concertación baja de 51,49 al 44,35 por ciento, es decir, pasa de 69 a 57 diputados. Considerando la elección de Juan Pablo Letelier por el PAIS y de Hosain Sabag como independiente fuera de pacto, la baja es de 71 a 57. En el caso del Senado la baja en este período es del 54,62 al 43,26 por ciento. Para comparar en términos de las circunscripciones en competencia, la última elección hay que compararla con la de 1993. En esa dirección, por tanto, la baja es del 55,47 al 43,26 por ciento.⁸⁶

Si bien concuerdo con Muñoz en el “asesinato de imagen” que impulsó MEO en contra de Eduardo Frei,⁸⁷ también hay que destacar que ya parte de la disciplina electoral se había roto cuando se presentaron dos listas en las elecciones municipales del 26 de octubre de 2008 (una lista llamada Concertación Democrática, que incluía el PDC y el

⁸⁵ Marta Lagos (2010), “Chile: La derrota de la Concertación y el fin de la transición”, en aquevedo.wordpress.com.

⁸⁶ Diario electrónico *El Mostrador*, 15 de marzo de 2012.

⁸⁷ Sergio Muñoz, “En esta hora”, *La Nación*, 17 de enero de 2010, p. 15

PS y, por el otro, la Concertación Progresista, en que participaron el PRSD y el PPD) como apuesta para lograr mayoría.

Sin embargo, y más fatal para la unidad concertacionista y la imagen pública, fue la realización de primarias “no reales” (de alta involución democrática) no obstante que rompía con una constante y aspiración del mundo concertacionista. Incluso más, lo hace a contra sensus de su propio Ejecutivo, quien, haciéndose cargo del estado de madurez del país, había mandado al Congreso un mensaje (Nº 522.357 del 15 de julio de 2009) que promovía el establecimiento de primarias para los candidatos a alcalde, parlamentarios y Presidente de la República (este interés ya había sido expuesto en 1998 cuando el Ejecutivo mandó un proyecto similar para Presidente de la República).

El triunfo de la derecha después de 50 años, entonces, en primer lugar, debe anclarse al desgaste natural que padece una coalición que pasó 20 años en el Ejecutivo en un contexto de superación del clivaje democracia–dictadura y con ello una debilitación de la identificación con el centro político y sus expresiones de consenso, lo que no implica la superación de todos los anclajes que dejó la dictadura.⁸⁸ Esto llevó a algunos a abandonarla a partir de la frustración de verla coligada a la derecha en proyectos desnaturalizados (*second best*) y sin denunciar el poder de veto del conservadurismo frente a propuestas-leyes que apuntaban originalmente a la necesidad de cambios mayores, particularmente del sistema electoral binominal, en el ámbito laborales o reformas tributarias para fomentar alternativas redistributivas que favorecieran la igualdad.

Otro hecho relevante fue la “pérdida” de la virtud de la progresión democrática en el ámbito de elección de candidatos que frustró a los propios y a la ciudadanía, al ver la hegemonía elitista y una partidocracia que hacía caso omiso de las percepciones y tendencias de una sociedad que había cambiado y exigía más en términos de propuestas y procedimientos.

También se dio el “*efecto vagón de cola*” del que nos habla el Instituto de la Propaganda en Estados Unidos en 1938 y que fue causado por el triunfo de Piñera en primera vuelta y que llevó a un porcentaje pequeño pero importante de la ciudadanía a inclinarse por el vencedor no importando su ideología o procedencia, más aún cuando la diferenciación era difusa.

⁸⁸ Ver Patricio Navia (2007), “El Pluralismo y el arco iris de la Concertación”, *Pensamiento y Cultura*, 3(5): 6.

No menor tampoco fue el hecho de que en un contexto de crisis de representación política, Piñera asumiera un lenguaje que privilegiaba el discurso progresista, de la inclusión, alejado de la política en general y por cierto muy ajeno a su sector,⁸⁹ lo que mediatizó las diferencias. Esto se reflejó con claridad en su alocución en la noche del triunfo:

“En esta noche de alegría quiero convocar a la generación del Bicentenario al mayor desafío (...) transformar Chile en el mejor país del mundo" (...) (Prometió también) "una segunda transición, una joven, con oportunidades para todos, ser un país más justo, ser un país más fraterno y ser un país capaz de construir una sociedad de oportunidades, seguridades y valores para todos y cada uno de los chilenos".⁹⁰

El hecho de que a Piñera se le viera más empresario y menos cercano a los políticos tradicionales, además del tinte progresista, sintonizó bien con la desafección de los chilenos con los partidos políticos como lo demuestra la tercera edición del Barómetro de las Américas, donde Chile sale en el último lugar de adhesión a los partidos (11,6 por ciento) de 26 países y Uruguay en el primero con 66,2 por ciento. Parte importante de este fenómeno se ancla al sistema electoral binominal que ha operacionalizado en la práctica “un bipartidismo” excluyente, concentrando en las cúpulas partidarias la selección de candidatos, ha fosilizado las coaliciones políticas, ha alejado enormemente el sistema de partidos de la ciudadanía y, en general, coadyuvado a la creciente pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto.⁹¹

La desafección de los chilenos con la política, en todo caso, no implicaba que los chilenos no apoyaran la democracia como sistema de gobierno (76,1 por ciento la apoya y un 63,3 por ciento decía sentirse satisfecho o muy satisfecho) o la política en general, sino que a la hora de votar “son las cualidades del candidato, no su partido o coalición” las que están influyendo más.⁹² En esta elección Piñera vendió mejor sus cualidades personales (eficiencia, independencia, capacidad gerencial, etc.), mientras que a Frei se

⁸⁹ Jovino Novoa, senador UDI, lanzó a principios del 2013 el libro *Con la Fuerza de la Libertad*, muy crítico al gobierno del Presidente Piñera y su cambio discursivo. Expresa, entre otros, que "En vez de luchar en el campo ideológico...el gobierno de Sebastian Piñera se trazó como objetivo camuflarse con la competencia, absorber su discurso igualitario y estatista. Prueba de ello es el énfasis asistencialista de sus políticas sociales y la argumentación tipo Robin Hood que rodeó la tramitación de la reforma tributaria". *La Segunda*, 15 de enero del 2013.

⁹⁰ *Op. cit.* Gustavo González, “Piñera lanza la segunda Transición”, ipsnoticias.net del 18 de enero de 2010.

⁹¹ Ver Szmulewics Ramírez, Esteban, “El sistema binominal y la crisis de legitimidad de la política”, *Asuntos Públicos*, Informe N° 926, 6 de diciembre de 2011, pp. 1-6.

⁹² *El Mercurio*, 13 de diciembre de 2010, p. C-2.

le vio como parte de la elite partidaria tradicional a pesar de que su programa de gobierno era el más progresista de todos los candidatos.

Frente a esto último y en un contexto de normalidad democrática, podemos afirmar que hubo también una gran similitud en la agenda y discurso de Jorge Arrate (ex socialista), Marco Enríquez-Ominami (MEO - ex socialista), Sebastián Piñera (derecha) y Eduardo Frei (Concertación) situándose la narrativa en el nivel explícito en el ámbito liberal-progresista y marcando matices y diferencias en los niveles implícitos (segundas lecturas) de los temas valóricos-ideológicos, por ejemplo relación Estado-mercado, pero que al final no marcaron las diferencias.

Para analistas norteamericanos la victoria de Piñera confirmó la madurez política de Chile. Riordan Roett de la Johns Hopkins University, por ejemplo, aseguraba que Piñera caracteriza "la llegada al poder de una derecha democrática, finalizando una transición iniciada veinte años atrás". Shannon O'Neill, de la revista Forbes explicaba que la victoria transformó a la derecha de Piñera como "una alternativa electoral viable, capaz de liderar un país abierto y dinámico, sin el miedo de volver al pasado". Roger Noriega, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, apuntó al tema económico al decir que "los chilenos sienten que el país ha empezado a perder el "momentum" económico de la última década, con el crecimiento anual desacelerándose a un 3.7 por ciento", por lo que el voto por Piñera tuvo mucho que ver con la capacidad de gestión⁹³.

Aunque concuerdo con Siavelis y Sehnbruch (2009:36) cuando decían que la reforma del sistema electoral no es la "cura para todo", asumo también la validez de la tesis de A. Valenzuela (2011: 8) referente a los peligros de la persistencia del sistema binominal:

“(…) Lo más peligroso del binominal hacia delante podría ser no tanto la rigidez y la falta de renovación política, sino que la ruptura de la lógica que impera con la presentación de dos listas para maximizar los resultados. La voluntad de construir esa lógica de cooperación política coincide con un proyecto bastante coherente de gobierno por parte de la Concertación y una derecha que tenía muy claro cómo se mantenía el poder desde una posición minoritaria en el electorado. Dentro de esa lógica también impera una voluntad de entregarles a colectividades más pequeñas cierta representación parlamentaria para asegurar la viabilidad del bloque. Pero si efectivamente se empiezan a desarticular los grandes bloques —y muy especialmente la Concertación—, el sistema binominal con tres o cuatro listas representando opciones electorales diferentes puede

⁹³ “La transición chilena en Washington”, *Chile Hoy* blogspot.com, 29 de enero de 2010.

dejar sin representación parlamentaria a importantes sectores políticos del país, agravando aún más la sensación de ilegitimidad del sistema”.

El escenario progresista-liberal de creciente presencia organizada de los sectores subalterno, en todo caso, llegó para quedarse a pesar del triunfo del presidente Piñera y de la Coalición por el Cambio de derecha que lo acompaña. Ahí están las protestas del movimiento estudiantil (“Pinguinos 2011-2012”) acompañadas de los profesores, trabajadores y apoderados; los cuestionamientos a los pilares del modelo económico como lo son las ISAPRES y AFP y en menor medida a los bancos y multitienda por la usura extrema; la relevancia e indignación que tiene la desigualdad de ingresos en los discursos públicos y privados; y las respuestas (aperturas) que ha tenido que tener el Ejecutivo a nivel legislativo (Ley de uniones de hecho entre homosexuales, ley de extensión del pos natal, ley de primarias, ley de reducción del horario de las empleadas domésticas, etc.) o de diálogo sobre temas que incluso van a contra sensus de su propio sector.⁹⁴

El ex ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, grafica bien estos al decir que “Piñera se equivoca si decide gobernar con las banderas de otros”.⁹⁵ Sin embargo, hoy nadie se puede sustraer a plantear conceptos más progresistas si quiere llegar o mantener el poder como, por ejemplo, lo demuestra lo expresado por el ministro del Interior de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, en la cumbre ideológica de la derecha, en cuanto a que la nueva centro derecha como se hacen llamar no defiende a los ricos y por el contrario “promueve políticas libertarias y justas, que son las que inspiran a la actual administración”.⁹⁶

Para autores que miran desde la izquierda, como Hugo Guzmán, el triunfo presidencial de Piñera significa el corolario de un triunfo estratégico, del reforzamiento de su eje de dominación:⁹⁷

“(…) a partir de la defensa y promoción del modelo neoliberal, de libre mercado, de la Constitución autoritaria/militar de 1980, de su ligazón con los altos mandos y la doctrina de las Fuerzas Armadas y Carabineros, del control casi total de los medios de comunicación, del armazón de centros de estudios y universitarios, de la incidencia de

⁹⁴ El artículo del diario electrónico *El Mostrador*, 16 de agosto de 2011, “La derecha cruje con la agenda ‘Concertacionista’ de Piñera”, apunta a esto al decir que “(…) el choque entre quienes están dispuestos a avanzar todo lo necesario en materia social para recuperar el respaldo ciudadano, con quienes presionan, cada vez más fuerte, para recuperar las históricas banderas de la derecha”.

⁹⁵ *Qué Pasa*, 5 de agosto de 2011, pp. 30-37.

⁹⁶ *El Mercurio*, 4 de marzo de 2012, p. D-3.

⁹⁷ Hugo Guzmán, “Un dibujo de la derecha”, www.reporte.cl, 1 de septiembre de 2011.

“poderes fácticos” surgidos por ejemplo de poderosas corrientes de la Iglesia Católica, de la “cultura neoliberal” que se metió en la sociedad chilena y valores autoritarios/conservadores”.

Omar Cid, en la misma línea por otra parte, agregó que la derecha había descubierto nuevas formas de control social y había generado bases suficientes para administrar el poder político, económico y cultural del país. Para lograr dicho objetivo, expresa, tuvieron que renovar sus formas, adecuar sus discursos, instalarse en lugares y temas que en otro momento histórico no tenían la misma importancia.⁹⁸

Sin embargo, lo que ambos autores omiten son los retornos crecientes de la obra gruesa de la Concertación (en lo económico, político, social, cultural, etc.) y sus efectos en la democracia y sus interacciones. María de los Ángeles Fernández, respondiendo a las críticas expresa que “la Concertación llegó al 2010 con la fortaleza de un legado incuestionable, que la mayoría tiende a considerar como positivo, a pesar de la pléyade de analistas que han hecho de su deporte favorito anunciar sus derrumbe (...)”. Agrega que más allá de la lógica (y límites) que le impuso la tecnocratización al poder democrático (por ejemplo las limitaciones que imponían los ministros de Hacienda de mayor gasto social), el resultado de los cuatro gobiernos de la Concertación ha dado un balance sumamente positivo reflejado en un manejo serio y sólido de la política fiscal, un crecimiento económico sostenido, desarrollo democrático, inversión en infraestructura y desarrollo logístico, inversión social (salud, educación, vivienda, cultura) e inserción internacional⁹⁹ a pesar de que se hayan mantenido ciertas bases esenciales del modelo heredado y aún hayan enormes lastres como la desigualdad de ingresos.¹⁰⁰

La clara posibilidad de retorno al poder ejecutivo con la ex presidenta Bachelet como lo reflejó la encuesta del Centro de Estudio Públicos (CEP) de agosto de 2012,¹⁰¹ donde la ex mandataria obtiene 50 por ciento de apoyo, es decir 41 puntos por encima del ex ministro de Obras Públicas del presidente Piñera, Laurence Golborne (9 por ciento),¹⁰² se une a la capacidad (virtud) de renovación y la progresión democrática que tiene la Concertación en su ADN. Y, aunque le es difícil salirse del exitoso esquema de manejo del poder acostumbrado por 20 años, las interpelaciones desde la propia coalición, de sus

⁹⁸ Hugo Guzmán, “Un dibujo de la derecha”, *op. cit.*

⁹⁹ En *La Nación*, “La Concertación: ¿una supernova?”, 18 de enero de 2010, p.16.

¹⁰⁰ *El Mercurio* 13 de abril de 2011, B-12.

¹⁰¹ La de noviembre-diciembre y dada a conocer los primeros días de enero de 2013, ratifica las mismas tendencias. En http://www.cepchile.cl/1_5197/doc/estudio_nacional_de_opinion_publica_noviembre-diciembre_2012.html

¹⁰² *La Tercera*, 22 de agosto de 2012, pp. 2-3.

militantes, así como de las de la sociedad en su conjunto y fragmentadamente, han llevado a la Concertación a iniciar una profunda autocrítica en busca de una nueva propuesta, tal como lo ha expresado el senador y presidente del PRSD, José Antonio Gómez. Este ha dejado ver que ya las élites no son tan poderosas,¹⁰³ monolíticas en relación a la política de consenso, sus prácticas y los fundamentos del modelo. Este expresó:¹⁰⁴

“Hemos planteado que es insuficiente nuestro trabajo, que no hemos escuchado a la opinión pública, que no hemos hecho autocríticas serias de lo que no hicimos (...) hoy día se dio un gran paso que debió haberse dado en enero, cuando nosotros planteamos la idea de que existiera un frente amplio opositor en que pudiéramos converger con todos aquellos ciudadanos que estaban manifestándose con una reticencia muy fuerte al gobierno de Sebastián Piñera (...) Si queremos ser gobierno, tenemos que ser honestos en decir las cosas, y eso es lo que hemos definitivamente abordado. Vamos a trabajar por un planteamiento común para decirle al país que si llegamos a gobernar de nuevo, vamos a hacer las transformaciones de fondo que la sociedad espera”.

En relación a esto último comparto plenamente el juicio de Siavelis y Sehnbruch (2009: 21), cuando expresan que la construcción de consensos es entendida, generalmente, como un proceso positivo que contribuye al éxito de las transiciones democráticas (más aún cuando esta se da por un transplacement y/o una negociación agregaría). Sin embargo, también advierten que esta construcción también puede ser peligrosa si “las élites secuestran el proceso democrático para alcanzar ese consenso sin los suficientes inputs del electorado en general y si esos consensos resultan dilatando decisiones en asuntos considerados importantes por el público” como la igualdad de oportunidades y/o la justicia por ejemplo, y como ha sucedido en Chile.

En este sentido y al final adhiero a la reflexión de Ernesto Ottone, cuando este expresa que “la Concertación perdió las elecciones porque los partidos que la conforman no estuvieron a la altura de sus propios gobiernos, de los cambios sociales (movilizaciones) que esta misma había generado”¹⁰⁵, fenómeno que también tenía una expresión global y que coincidieron con los cuatro gobiernos de la Concertación y aún sigue.¹⁰⁶

¹⁰³ Este es un fenómeno mundial como se percibe del artículo de Moisés Naím. *Op. cit.*, *El País*, 17 de marzo de 2013.

¹⁰⁴ “Concertación acelera tratativas para su reformulación y se da plazo hasta el 5 de octubre”, *La Tercera*, 13 de septiembre de 2011, p. 6.

¹⁰⁵ Ernesto Ottone, *op. cit. Qué Pasa*, 14 de enero de 2011.

¹⁰⁶ Entrevista de Patricia Arancibia a Ernesto Ottone, “La Concertación va a sobrevivir pero modificando muchas costumbres, cambiando ejes”, www.df.cl, 6 de julio de 2012.

Aprendiendo de la derecha, la Concertación se atrincheró en otro poder del Estado, el Parlamento, al tener mayoría en el Senado y disputar el apoyo de ex concertacionistas y/o liberales de derecha para ejercer mayoría las veces que se pueda desde la Cámara de Diputados, situación que les facilita el rol de “veto player” y/o de oposición leal como se ha percibido en la promoción, modificación o retención de varios proyectos de ley, así como más extremadamente en la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.¹⁰⁷

Precisamente respecto a esto último, uno de los principales asesores de la ex presidenta Bachelet, Francisco Javier Díaz, recalca “que el primer año de la Concertación lejos del poder no ha sido la debacle que la derecha pronosticaba. Incluso la estrategia explícita del gobierno (de Piñera) de cooptar parte de sus miembros (DC fundamentalmente) ha fracasado. La coordinación en el Congreso también se ha ido dando...dos pasos para adelante y uno para atrás, pero se ha ido dando (...)”.¹⁰⁸

Esto ha facilitado una política de “mantención con presencia” a la espera del decantamiento de un discurso y prácticas renovadoras, y del desgaste natural del gobierno y su coalición por el Cambio, incentivado por las contradicciones entre el pensamiento, el discurso y el programa de la derecha en el contexto de una ciudadanía más activa, interpeladora y con expectativas crecientes de justicia e igualdad.

El segundo gran hecho que marcó el fin del gobierno de la presidenta Bachelet, fue el terremoto del 27 de febrero del 2010 de grado 8.8 y que fue acompañado de un tsunami y múltiples réplicas por sobre los 6 grados. Además de los 541 muertos, los 2 millones de damnificados y más de medio millones de viviendas seriamente dañadas, el país careció por varios ratos de las variables centrales de la autoridad como la presencia y el control, además de los graves errores de descoordinación (Ej. suspender la alerta de tsunami) y la falta de información pos terremoto. Sin embargo y pasado los momentos iniciales, la Presidenta logró reasumir el control al desplegar junto a las policías y bomberos, a las Fuerzas Armadas y a la institucionalidad nacional en general.

Para estas alturas las relaciones cívico-militares estaban completamente normalizadas con una subordinación a la autoridad civil y una profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas (soldados profesionales, entre otros),¹⁰⁹ preocupación esencial en el cumplimiento de su función natural de disuasión, en ayuda

¹⁰⁷ Diario electrónico *El Dinamo.cl*, 17 de abril de 2013.

¹⁰⁸ Ver Francisco Javier Díaz, “Entre la nostalgia y la revancha”, *Qué Pasa*, 11 de marzo de 2011, p. 32.

¹⁰⁹ Por ejemplo, La Ley 20.424 del Ministerio de Defensa Nacional garantiza la conducción política de la defensa entre otras cosas.

en desastres naturales, labores sociales en zonas aisladas y en cooperación y diplomacia internacional. A pesar de ello, ya sea por razones ideológicas o de cambio de gobierno, para un sector importante de la clase política y de la sociedad civil existen todavía sospechas de una falta de cooperación de las FF.AA. (desidia se dijo) con la presidenta Bachelet y la institucionalidad democrática como se percibió después de la tragedia del 27 de febrero.

En relación a esto último, por ejemplo, el ex diputado PPD Antonio Leal afirmó que “el Ejército debe esclarecer, porque es sospechoso que el general Le Dantec, ex conductor conjunto de las FF.AA. (...) fue una persona que no colaboró con la Presidenta ni respondía a sus preguntas sin embargo se había reunido con el presidente electo para entregarle información”. Patricio Hales, también PPD, dijo que el subsecretario de Defensa Óscar Izurieta, quien el 27-F era jefe del Ejército “ya estaba en la nómina política de Piñera”. El mismo Leal acusa que “me parece que hubo (...) negligencia del SHOA dependiente de la marina (y) del alto mando de la Fuerza Aérea que no fue capaz de disponer de los helicópteros cuando la presidenta Bachelet los pidió (...)”. Por último, organizaciones sociales acusan al Almirante González, Comandante en Jefe de la Armada, que al quedarse en su casa viola el artículo 29 de la Ordenanza de la Armada, el que prescribe la siguiente conducta: “Todo miembro de la Armada que encontrándose por cualquiera circunstancia fuera de su unidad, tenga conocimiento de haberse producido alteración del orden público, catástrofe o siniestro de grandes proporciones, deberá restituirse de inmediato a su unidad”.¹¹⁰

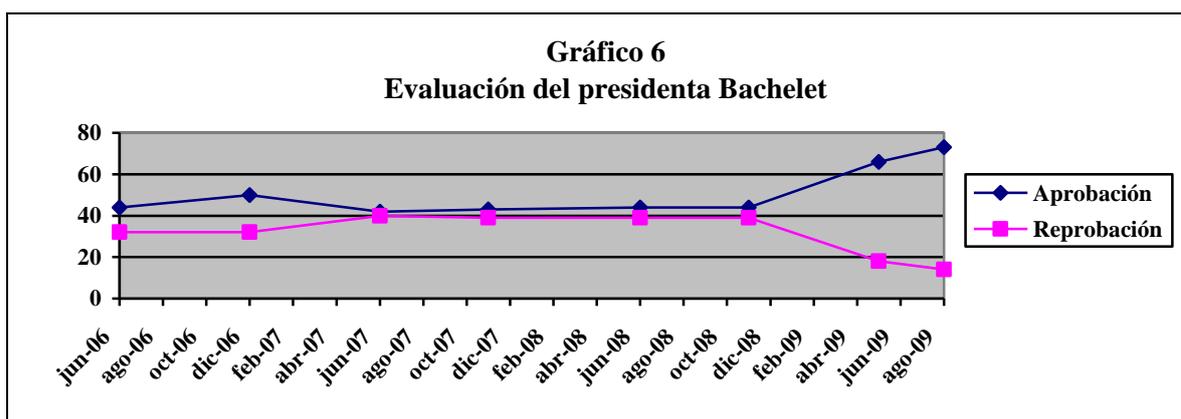
Mi interpretación, en todo caso, se inscribe en que son hechos circunstanciales, difíciles de analizar por lo fuerte y desconcertante de la situación, de personas que van terminando su carrera y con una cultura estratégica más cercana a la derecha, más que de una oposición desleal, de presiones de las instituciones y/o hechos lesivos ex profeso para la democracia.

A pesar de la carga negativa de estos dos acontecimientos, los esfuerzos desplegados por la Presidenta durante su mandato fueron (y son) ampliamente reconocidos por la población. De acuerdo a la encuesta de la empresa Adimark, cercana a la derecha liberal, de la primera semana de marzo del 2010, la presidenta Michelle Bachelet mantuvo una histórica aprobación popular de un 84 por ciento de valoración positiva,

¹¹⁰ Alfredo Peña, “El boicot de las Fuerzas Armadas contra Bachelet tras el terremoto cada día toma más fuerza (...)”, www.cambio21.cl, 1 de marzo de 2012.

convirtiéndose en el principal activo de la Concertación para las elecciones presidenciales del 2013 (las encuesta del CEP también le dieron una alta valoración – ver Gráfico 6).

El liderazgo y valoración de la ex mandataria ha trascendido una mirada política-racional, para instalarse en el plano subjetivo-sensitivo de la marca. Así la ex Presidenta es tan potente como la Coca Cola y está por encima de 1.214 marcas medidas en el país. Otro estudio de Brand Asset Valuator que investigó la asociación que hacen los chilenos entre marcas y políticos, muestra que la ex presidenta Bachelet se le asocia con fundaciones y organismos internacionales sin fines de lucro, mientras al principal candidato de la derecha para las elecciones del 2013, el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, se le ve vinculado con grandes empresas.¹¹¹ Tanto fue así que la UDI tras dos denuncias de esta relación, bajó al ministro como pre candidato presidencial (tampoco remontaba en la encuestas frente a la ex Presidenta).¹¹²



Fuente: Elaborado por Paulo Hidalgo en base a Datos de Centro de Estudios Públicos (CEP).

Por último, su nombramiento como jefa de la nueva entidad para la Igualdad entre los géneros, “ONU-Mujeres”, a partir de fusión del Fondo de Desarrollo para la Mujer (UNIFEM), la División para el Avance de las Mujeres (DAW), la Oficina de Asesoramiento para Cuestiones de Género y el Instituto de Investigación y Capacitación para el Avance de la Mujer (INSTRAW), mantuvo presente su liderazgo en la escena política interna desde una gran legitimación internacional.

El vicepresidente de Renovación Nacional y ex alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, quejándose de la encuesta CEP de agosto de 2012, reconoció errores del

¹¹¹ En www.cooperativa.cl, 31 de agosto de 2012.

¹¹² En *La Segunda*, 30 de abril de 2013.

gobierno del presidente Piñera y el gran apoyo que hay a la ex presidenta Bachelet, al decir que:

“(...) el alto porcentaje de apoyo que mantiene la ex mandataria es absoluta responsabilidad del gobierno, que desde hace mucho rato inició una inútil campaña de desprestigio a su persona, que no han hecho más que agigantar su figura”. Y añade que “es triste que el principal candidato de la Alianza, Laurence Golborne, esté a 41 puntos de distancia. Tenemos toda la maquinaria, el ministro está hace un año en el mejor ministerio, con la mejor visibilidad; mostramos excelencia en materia económica, pero al parecer la mochila de los errores políticos de este gobierno es demasiado pesada”.¹¹³

Adhiero plenamente, entonces, al análisis que hace Augusto Varas del fin del gobierno de la ex presidenta Bachelet (2010: 313), cuando expresa que “quedará en la retina nacional como el más exitoso en administrar recursos públicos en situaciones de crisis, generar instituciones para proteger los sectores más vulnerables, darle ciudadanía económica a los marginados, así como defender los derechos de las mujeres”. Es decir, en palabras de la propia Presidenta, “un Estado moderno de bienestar”, un nuevo concepto de sociedad con derechos sociales garantizados.

Este proceso de habilitación social, sin embargo, no se vio explícitamente acompañado de un apoyo equivalente a la organización y participación social de estos grupos, por lo que tales beneficios no se tradujeron en una efectiva redistribución del poder político como lo demanda la democracia inclusiva-participativa que ella impulsa. En este sentido, reitero y ancló como limitante lo planteado por Moreno (2006: 130) cuando expresa que “los actores democratizadores privilegiaron la mantención de la estabilidad y la paz social y, a la vez, intentaron avanzar en el sentido de la democratización en la medida de lo posible” frente a una realidad histórica que ponía límites claros, pero (agregó) que se fueron diluyendo con al consolidación democrática y sus retornos como lo demuestran las movilizaciones sociales y la recuperación de la política como variable central en la vida social. Al empezar a deliberar en la sociedades que queremos vivir, como lo expresa Carlos Peña, se empieza a disipar la hegemonía que mantenía el saber económico en la cultura política.¹¹⁴

Alberto Koschützke, ex director de la Fundación Friedrich Ebert (Chile), grafica bien el escenario político, al decir que:

¹¹³ Diario electrónico *El Mostrador*, 24 de agosto de 2012.

¹¹⁴ Carlos Peña, “La política comienza a recuperar el papel que tienen en la vida social”, diario electrónico *El Mostrador*, 25 de agosto de 2012.

“La cultura política del país, que siempre optó por generar equilibrios y evitar conflictos sobre la base de una estructura autoritaria, se ve radicalmente cuestionada por las protestas masivas, entre las que destacan en particular las movilizaciones estudiantiles. Cualquier intento de los partidos por ponerse a la cabeza de esos levantamientos es rechazado de cuajo, por ser considerado una clara instrumentalización de los reclamos (“el pueblo unido avanza sin partidos”, dicen los movilizados). Más allá de las demandas concretas (...), el carácter masivo de las protestas manifiesta el abismo que separa a la sociedad civil de la política (yo precisaría de los partidos por que la sociedad se ha repolitizado), así como la pérdida de credibilidad, de unión y de liderazgo que han experimentado los partidos, algo característicos de las sociedades posdemocráticas. De pronto, Chile ha empezado a moverse”.¹¹⁵

Claramente la representatividad del sistema político se había reconfigurado de otra manera a partir de la continuidad de enclaves provenientes de la transición, dañando el rol positivo y efectivo de los partidos (Siavelis, 2009a: 3-21). Una democracia más asociativa de esencia progresista empezaba a ganar protagonismo como representantes de los anhelos ciudadanos, con la clara ventaja de carecer de férreos corsés ideológicos, lo que facilitaba (y facilita) alianzas pragmáticas cuyo resultado prefigura una respuesta más programática global.

4.5 La obra y su corolario

Como lo expresé anteriormente, el objetivo de las coaliciones programáticas consiste en cumplir, lo máximo posible, su ideario plasmado en políticas públicas de su preferencia. Los gobiernos son instrumentos para la realización de las políticas públicas y, por lo mismo, más que mirar al ordenamiento de las actividades del sector público, de su organización, conviene mirarlo como un instrumento para la realización de las políticas públicas y sus resultados. Así como el logro principal de una empresa privada no es su organigrama, sino sus utilidades, lo importante en el gobierno son sus resultados (eficacia y eficiencia), más que su estructura.

Una evaluación de la obra global de la Concertación¹¹⁶ nos señala que Chile en el bicentenario ha alcanzado un desarrollo sólido, más inclusivo y libre, aunque todavía esté

¹¹⁵ Alberto Koschützke (2007), “Chile frente a sí mismo. Los límites del fundamentalismo de mercados y las protestas estudiantiles”, en *Nueva Sociedad* 237: 17-31.

¹¹⁶ Ver *Serie Estudios*, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile, Volumen I, II, y III, 2009.

pendiente el tema de la igualdad (no equidad).¹¹⁷ Esto se expresa en procesos y datos duros de eficacia y eficiencia, dos factores duros que cimentaron la legitimidad durante cuatro gobiernos y promete hacerlo otra vez con un segundo mandato de la presidenta Bachelet después de noviembre, o diciembre si hay segunda vuelta, del 2013.

Además del pleno funcionamiento de la democracia y sus instituciones, por ejemplo, se verificó la disminución de la pobreza en casi en tres veces (del 40 por ciento en 1990 al 13,7 en el 2010) y el aumento de la seguridad de las familias más pobres por la implementación de diversas políticas sociales. Entre ellas, resaltan subsidios a los servicios (luz, agua, vivienda, etc.) y a áreas sociales básicas (educación, salud, emprendimiento, etc.); generación de empleos unido al seguro de desempleo; mejoramiento y dignificación de las pensiones; al Sistema Chile Solidario; a la Red de Protección Social como el sistema Chile Crece Contigo para los niños y sus familias que se atienden en el sistema público de salud, desde el embarazo hasta los cuatro años (88 por ciento de la población en 2008); entre otros.

Este mejoramiento de la calidad de vida, por otra parte, ha colaborado en el aumento de la esperanza de vida de los chilenos (alrededor de 80 años), superando a países como Estados Unidos, Dinamarca y República de Corea y/o que se haya reducido a la mitad la mortalidad infantil (de 15,9 por cada mil niños en 1990 a 8,3 en 2007).

En el ámbito educacional y a pesar del descontento estudiantil, se ejemplifica en que el 60 por ciento de las familias más vulnerables tuvieron garantizado el acceso a jardines infantiles y salas cunas para sus hijos. También se garantizó 12 años de educación básica y media obligatoria y gratuita, lo que implicó para su operacionalización el mejorar sustancialmente de la infraestructura, presupuesto, logística y tiempos pedagógicos, además de las subvenciones como la entrega gratuita más de 8 millones de textos y útiles escolares y el aumento de la cobertura de alimentación gratuita diaria (alcanza al 65 por ciento de estudiantes). En términos tecnológicos, se pasó en el 2002 de un computador por cada 56 alumnos y a uno por cada 10 en 2010, ello sin contar la política de los computadores personales que se entregan a niños y niñas de séptimo básico premiados por su desempeño y que pertenezcan al 60 por ciento más vulnerable (60.000 el 2010).

Al finalizar el gobierno de la presidenta Bachelet, 7 de cada 10 alumnos (de alrededor de 700 mil) que ingresaron a la educación superior eran la primera generación de cada

¹¹⁷ Agustín Squella, en su columna “La derecha y la igualdad”, hace una muy interesante reflexión sobre el concepto igualdad y los límites y distorsiones que ha experimentado en Chile con el concepto equidad o igualdad de oportunidades. *El Mercurio*, 12 de abril de 2013, p. A-3.

familia en dar este salto y lo pudieron dar gracias a las becas (147.000 jóvenes) y créditos con el aval del Estado (cerca de 100 mil), instrumentos hoy muy cuestionados en el marco de la discusión sobre la desigualdad y la usura, pero que en su momento ayudaron a la movilidad social y al empoderamiento ciudadano.

En el ámbito de la salud y a pesar de que aún faltan muchos médicos especialistas, el número de médicos pasó de 6 mil en 1990 a 17 mil en el 2008 y el número de establecimientos de salud de 2.117 en el 2003 a 2.386 en el 2007. Se duplicaron el número de atenciones entre 1990 y el 2009 (de 20 a 40 millones). A través del Plan Auge (2005) se trataron más de 8 millones de personas (2010) en una de las 59 patologías garantizadas (el 2013 llegan a 80) y sin costo alguno.

Mirando cifras en el área de la vivienda, en el censo del 2002, se constata que el 73 por ciento de los chilenos son propietario de una vivienda. Desde enero de 1990 a noviembre de 2009 se habían entregado 2.183.623 subsidios habitacionales, esto se traduce en 1.877.390 subsidios para adquirir o construir una vivienda y 306.233 subsidios para mejorar o ampliar la vivienda propia. La vivienda social, por otra parte, aumentó su metraje desde 37,3 metros cuadrados en el 2001 a 43,7 en el 2009 con la posibilidad de ser ampliadas posteriormente (esto está permitiendo que hoy se piense en otros temas como una ciudad amable y no segregada). La construcción de viviendas se complementó, entre 1995 y 2009, con la pavimentación de 5.500 kilómetros de calles locales y pasajes, y la actualización del Plano Regulador en casi el 95 por ciento de las comunas (planificación más armónica del territorio).

Los salarios fue otro de ítems que mejoraron sustancialmente durante los gobiernos de la Concertación. El empleo creció un 49,5 por ciento por encima del crecimiento de la población; el salario mínimo aumentó, en pesos reales, en un 116 por ciento entre 1990 y 2009; disminuyó la tasa de desempleo, tendencia que permitió que a fines del 2011 llegara a 6,6 por ciento, casi pleno empleo de acuerdo al INE; se entregaron subsidios para la contratación de jóvenes; ha ido disminuyendo paulatinamente el empleo precario; aumentó el empleo de mujeres de 28,1 por ciento en 1990 a 38,0 por ciento en 2009 (aunque sigue la desigualdad de salarios en relación a los hombres); al 2010 más de un millón de personas participan en programas de capacitación cada año.

Los datos en crecimiento e inversión no son menos espectaculares. Así, por ejemplo, entre otros, el ingreso per cápita pasó de US\$ 4.800 en 1990 a más de US\$ 15.800 en el

2011 (se espera que entre el 2013 y 2014 alcance los US\$ 20 mil).¹¹⁸ Esta triplicación se replicó en el tamaño de la economía con un crecimiento promedio anual del PIB real de 5.3 por ciento entre el 1990 y el 2008. Un manejo cuidadoso de las finanzas públicas, además de permitir la inversión social y bajar la inflación, tuvo como resultado la disminución de la deuda pública de 31,7 por ciento a 5,9 por ciento del PIB entre 1990 y 2009 y crear Fondos Soberanos por US\$ 14.706 millones hasta fines del 2009. Actualmente existen más de 60 mil créditos que tienen una cobertura estatal para ayudar a la pequeña y mediana empresa. El presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación creció casi 900 por ciento (en términos reales) entre los años 1990 y 2010. El consumo de las personas creció a una tasa promedio anual real de 6,1 por ciento entre 1990 y 2008.

En la actualidad casi la totalidad de los chilenos cuentan con electricidad y agua potable y el 95 por ciento posee alcantarillado. En agua potable rural, el país invertía \$ 2.230 millones en 1994 y en el 2008 la inversión alcanzó \$ 34.960 millones (aumento del 1.500 por ciento). A fines del 2010, existían 19 millones 388 mil celulares en Chile, es decir, 1,13 aparatos móviles por habitante según registró del INE. De solo un 10 por ciento de tratamiento de aguas servidas en 1990 se pasa al 82 por ciento el 2011. Al 2010 Chile ya era el país de la región con mayor conectividad y uso de tecnologías de comunicaciones (es decir, telefonía celular, computadores y redes de internet) según un estudio conducido por el Connectivity Scorecard.

En el mejoramiento de la calidad de vida, la conectividad tecnológica fue acompañada por el desarrollo de la conectividad física y del transporte. Así, se construyeron 1.500 kilómetros de doble calzada entre La Serena y Puerto Montt y doce vías transversales de alto estándar articulan el desarrollo social y productivo del país. A ello, se suman 2.500 kilómetros de autopistas urbanas e interurbanas en las principales ciudades de Chile. También se pasó de un Metro en Santiago con dos líneas de 27 kilómetros y que transportaba 155 millones de pasajeros en el año en 1990 a uno de cinco líneas que en 94 kilómetros transporta a 771 millones de pasajeros. El año 2011 cerró con un tráfico total de 12.105.524 pasajeros movilizados, lo que equivale a un 17,4 por ciento de crecimiento en comparación al año anterior. En estos 20 años, también se han embalsado 800 millones de metros cúbicos de agua, es decir 21 veces más que en el período 1970 -1990.

¹¹⁸ *La Tercera*, 12 de abril de 2011, p. 25.

El desarrollo institucional-legal fue otro importante resultado de la gestión de la Concertación. Así, por ejemplo, desde el 2000 al 2005 se puso en marcha la Reforma Procesal Penal en Chile, normativa que reemplazaba a una ley de 1906. Esta reforma hace más expeditos los procesos (los juicios se redujeron en promedio de 2 años a 6 meses), los transparenta (son públicos) y garantiza el derecho a una defensa adecuada. Ello permitió aumentar los presos con condena del 32 por ciento en 1992 a más del 76 en el 2011. También se han establecido los tribunales de familia, laborales y tributarios de modo de descongestionar y especializar. Con procesos judiciales más expeditos y más prevención (los efectivos de Carabineros crecieron de 28.200 en 1990 a 42.000 en 2010), le ha permitido a Chile ocupar en 2009 el lugar 20 de los países más seguros del mundo de un ranking de 144 naciones (Global Peace Index del Economist Intelligence Unit) y ser, después de Canadá, el más seguro de toda América, por encima de Estados Unidos y de otros países desarrollados como Gran Bretaña, Francia o España. Quizás ello, en parte, explica que el número de turistas extranjeros en el 2012 haya llegado a la cifra record de 3,5 millones (13 por ciento más que el 2011).¹¹⁹

El acceso a la cultura también se ha convertido en un derecho durante los gobiernos concertacionistas. Junto al acceso a la educación, el acceso a las artes y el conocimiento han sido la espada para combatir la hegemonía cultural neoliberal legada por la dictadura: es decir, internalizar los valores democráticos como componente primordial del cambio social.

En este ámbito, por ejemplo, además de establecerse una institucionalidad cultural sólida, entre 1990 y 2006 la red de bibliotecas públicas creció en un 39,2 por ciento y el número de usuarios en un 51,3 por ciento. Se crearon fondos concursables que financian cerca de 3.000 proyectos anuales en todas las disciplinas artísticas. Se ha establecido una red de centros culturales a lo largo de Chile y se han promulgado leyes que protegen los derechos de los artistas y creadores. Anualmente van al cine cerca de 14 millones de personas cada año y más de 6 millones asisten a representaciones de artes escénicas. Hace una década se estrenaba sólo un largometraje chileno por año, hoy se cuenta con más de treinta películas en etapa de posproducción y se realizan 10 estrenos anuales en promedio. El presupuesto del Consejo Nacional (ministerio) de la Cultura y las Artes para el año 2012 alcanzó a cerca de US\$ 130,3 millones de dólares.

¹¹⁹ En www.biobiochile.cl, 14 de enero de 2013.

A pesar de las importantes deudas que subsisten con el medioambiente, el desarrollo sustentable y la protección del medioambiente también han sido una preocupación creciente de los gobiernos de la Concertación. Aquí no solo se han creado los ministerios del Medio Ambiente y el de Energía, sino que todo proyecto susceptible de causar impacto ambiental se somete a evaluación por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), con estándares cada día más exigentes. Esto, junto a la normativa existente, permitió que las emisiones de CO₂ provenientes de la gran industria minera se hayan reducido en un 49 por ciento, que muchas empresas realicen iniciativas en relación a la protección de áreas silvestres, que el 43 por ciento del abastecimiento energético de Chile se genera sobre la base de energías renovables especialmente hidroeléctrica o que se haya habilitado 1.800 kilómetros del Sendero de Chile, camino tipificado como santuario de la naturaleza, entre otros logros. Ya entró a funcionar la Superintendencia del Medioambiente (puede aplicar multas hasta US\$ 10 millones) y se espera, aunque ya está promulgada la ley, que en los primeros meses del 2013 comiencen a funcionar los tribunales ambientales.¹²⁰

Chile es un país abierto e integrado al mundo proactivamente. No solo participa activamente en instituciones y foros multilaterales mundiales, regionales y subregionales, sino que con la política de reinserción internacional inaugurada en los noventa y luego de responsabilidad en la paz internacional y la consagración de los bienes públicos universales (inserción compleja desde un estatus de potencia secundaria regional), ha fortalecido las relaciones multilaterales y bilaterales especialmente con América Latina a partir del desarrollo de la política de regionalismo abierto (de la región al mundo). Del 2000 al 2008, con los acuerdos comerciales suscritos y que le aseguran un acceso preferente al 86 por ciento del PIB mundial, Chile pasó de exportar 2000 productos a 120 mercados en 1990 a más de 5.000 productos a 180 países. Chile era a esta fecha el único país de la región que había cumplido con los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, lo que junto a otros desarrollos le facilitó el ingreso de la OCDE. También participa activamente en Operaciones de Mantenimiento de la Paz en diversas partes del mundo con fuerzas propias y/o a través de la inédita fuerza binacional con Argentina (Cruz del Sur).

El Chile del bicentenario ha logrado enormes avances en derechos y transparencia. Es un país que ha forjado políticas para proteger a todas y todos desde el nacimiento hasta la

¹²⁰ En www.cooperativa.cl, 28 de diciembre de 2012.

vez. Así, por ejemplo, ha mejorado la igualdad de género expresado en la elevación del estatus institucional dedicado a la mujer desde un servicio simple a uno con rango ministerial, en diferentes leyes la participación de la mujer en el trabajo y en la política (se duplicó su participación); ha garantizado el derecho de los discapacitados con la Nueva Ley de Discapacidad y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas; ha ampliado las libertades individuales (Ley de divorcio, de igualdad de todos los hijos, acceso igualitario a la píldora del día después y eliminación de la censura, etc.); ha transparentado la información al país con el Consejo de Transparencia y los trámites electrónico del SII, Registro Civil y Portal de Trámites ChileClick, entre otros (hoy se realizan electrónicamente las licitaciones de todas las compras públicas, el 91 por ciento de boletas de honorarios y el 58 de declaraciones del impuesto IVA); se ha promovido que los directivos públicos sean elegidos por sus méritos por el Sistema de Alta Dirección Pública; se avanzó en la descentralización con más recursos y capacidad de decisión de los gobiernos regionales: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por ejemplo, pasó de 71.000 millones de pesos en 1990 a 645 mil millones en 2009 (hoy se elegirán los consejeros regionales).

La Concertación con una mirada inclusiva en sus cuatro gobiernos, se ha hecho cargo tempranamente de clivajes históricos nacionales como las deudas con los pueblos originarios con un resultado final positivo en términos de toma de consciencia y relativo en cuanto a derechos. Además de haber restituido con el Fondo de Tierras más de 700.000 hectáreas a los pueblos originarios y poner el tema en la agenda nacional, entre otros, promovió el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989, la constitución de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la Ley Indígena con la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Informe sobre Verdad Histórica y Nuevo Trato del 2003, el Programa Orígenes, la política Reconocer: Pacto Social por la Multiculturalidad y la aprobación del Convenio 169 de la OIT, entre otros.¹²¹

Con estos importantes avances que le han cambiado la cara al país, Chile confirma su alto posicionamiento internacional y que se reflejan en los resultados de estudios realizados por prestigiosas instituciones internacionales como el de Transparency Internacional 2010, donde, de un total de 178 países estudiados, ubica a la administración pública de Chile como la más transparente de América Latina, tercero a nivel del hemisferio americano y 21 en el mundo. Parte importante de esto, se impulsa con la

¹²¹ Rodrigo Egaña, “Conflicto indígena: Conflicto más que centenario” en <http://www.inap.uchile.cl/columna-de-opinion/588>

modernización del Estado iniciada por el presidente Frei y con los acuerdos Lagos-Longueira del 2003 sobre probidad y transparencia en perspectiva de modernizar el Estado frente a los dilemas de la corrupción.¹²²

La Democracy Ranking Association en el 2009, por otro lado, ubicó a Chile en cuanto a desarrollo democrático en el lugar 28 de una lista de 100 naciones. Chile mejoró en dos lugares su posición respecto del año 2008, y junto a Uruguay y Costa Rica se ubicaron entre las mejores democracias latinoamericanas. En cuanto a la calidad del sistema democrático, el informe de esta entidad vienesa subraya que Chile exhibe índices correspondientes a países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que se espera (dice) un máximo desarrollo en ese sentido en el mediano plazo más aún cuando es miembro de ella (el aumento de oportunidades ha mejorado la calidad de la democracia).

Esta nueva realidad se ve claramente reflejada en todo tipo de indicadores internacionales. Así, por ejemplo, en el Ranking de Competitividad Mundial 2010 elaborado por el Institute for Management Development (IMD) de Suiza, Chile ocupa el lugar 28 por encima de todos los países latinoamericanos y de países de primera línea como Brasil, España, India y Portugal.¹²³ En el Quality of Life Index 2010 elaborado por Internacional Living Chile ocupa el lugar 31 junto a países como Suecia y muy por encima de la mayoría de los países latinoamericanos.¹²⁴ Tras las capacidades mostradas en el rescate de los mineros de la mina San José, Chile ascendió al puesto número 40 (de 110 países) en el ranking de imagen mundial,¹²⁵ por citar otros ejemplos. Por último, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que la entidad ubicó a Chile en la categoría de países de "ingresos altos".¹²⁶

El presidente Lagos graficó bien este desarrollo al decir en ese momento que:

“(...) en los próximos 10 años, Chile será un país desarrollado, si entendemos por esto que el país ha alcanzado un ingreso per cápita de US\$ 20 mil anuales. Hemos llegado a un punto donde debemos preguntarnos a dónde queremos estar... (Hemos sido) capaz de correr la frontera de lo posible...Quizás la alternancia sirve para apreciar mejor el tema de los cambios culturales. Por ejemplo, la forman en que los amigos que están en el

¹²² Ver, entre otros, “Modernización del Estado: Más que luchar contra la corrupción”, en www.bcn.cl

¹²³ economia.universia.blogs.net del 2 de junio de 2010.

¹²⁴ www.internationalliving.com del 15 de noviembre del 2010.

¹²⁵ *La Tercera*, 13 de noviembre de 2010, p. 52.

¹²⁶ *El Mercurio*, 4 de julio de 2013.

gobierno miran hoy el tema de las etnias. ¡Por Dios que distinto a como lo hacían antes!”.¹²⁷

Con las políticas implementadas durante los gobiernos de la Concertación, por otra parte, podemos afirmar sin duda que Chile ha alcanzado una estatura político-estratégica (su hard y soft power) que la asimila a los requisitos básicos para ser considerada una potencia mediana regional o en otras acepciones secundaria (Baeza y Yopo, 2011). Su ejemplar estabilidad democrática; su persistente ascenso económico¹²⁸ y social (el más alto de la región); tener una amplia red de tratados que sobrepasan el ámbito económico (en defensa hay 72 con 28 países y 2 organismo multilaterales); su fuerte presencia internacional en distintas instancias multilaterales (hay chilenos en primera línea en el tema de la mujer en la ONU, medioambiente, en el PNUD, en la OIT hasta recientemente, en la OEA, etc.); su capacidad militar con logística de punta y políticas que se ha visibilizado en Haití en forma cooperativa y disuasiva, en las catástrofes o en su material operativo, en la inédita fuerza conjunta con Argentina “Cruz del Sur”; su imagen “paradigmática”; entre otros.

Estos y otros resultados, entonces, me llevan a reiterar la idea de que la Concertación ha sido la coalición de gobierno más duradera en la historia del presidencialismo chileno y la más efectiva (exitosa), reflejando también con ello que los regímenes presidencialistas de coalición no funcionan tan mal al dejar un legado incuestionable (desarrollos alcanzados) que le ha permitido al país siempre estar “corriendo positivamente la frontera de lo posible”. Su gran virtud ha sido su capacidad renovación y adaptación para ponerse al día con los cambios acontecidos en el país y constituirse en factor de cambio (cumplir sus objetivos).

Como corolario, se puede reiterar que Chile vive otro estadio de democracia como se percibe en el movimiento regionalista de Aysén o en el movimiento Mapuche de la Araucanía. La repolitización que ha irrumpido en Chile a partir del afianzamiento democrático, el empoderamiento de las personas y las transformaciones producidas con el desarrollo, han producido una rearticulación política de innumerables sectores específicos de distinto impacto en la escena política, pero que sin duda redefinen la fisonomía nacional.

¹²⁷ Revista *Qué Pasa*, 18 de marzo de 2011, pp. 24-25.

¹²⁸ *La Tercera*, 2 de octubre del 2009, p. 26.

En el caso del movimiento de Aysén, por ejemplo, conformado por una variedad de fuerzas locales organizadas, representa los intereses de una región completa¹²⁹ que se mantuvo por varios meses en protesta permanente (con clara interpelación a la autoridad y las instituciones), y cuyo pliego de peticiones¹³⁰ trascendió la zona y se amalgamó a reclamos similares del resto del país: es decir, necesidad de más justicia, igualdad y sustentabilidad en un país consolidado política y económicamente.

Concordando con Castillo,¹³¹ este tipo de procesos muestra los siguientes trazos. En primer lugar, podemos decir que se vive una profunda crisis en la representación política. La aprobación social de los partidos y las coaliciones, así como de las instituciones emblemáticas de la política (Ejecutivo y Parlamento), se encuentra en el nivel más bajo de las mediciones efectuadas y da cuenta de una profunda erosión en su legitimidad a partir de sus prácticas elitistas e intereses corporativos y reproductivos facilitados por el cuestionado sistema electoral binominal y el marco constitucional en general.

Tal como lo expresamos, el sistema binominal obliga a todas las fuerzas políticas a buscar pactos de mayoría para lograr representación en el Ejecutivo y el Parlamento. Mientras exista la actual forma de estructurar las alianzas políticas, la correlación de fuerza no variará sustancialmente y no se producirán los cambios deseados. Por ello, frente a la necesidad de la amplia unidad opositora en la perspectiva de formular proyectos amplios y representativos (inclusivos) en procura de una relegitimación, la Concertación visualiza como cada vez más urgente la modificación del binominal.

¹²⁹ Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, región de Aysén; Central Unitaria de Trabajadores, Coyhaique; Pescadores Artesanales de Aysén; Agrupación de los Derechos Ciudadanos de Aysén; Movimiento Ciudadano Patagonia Unida; Movimiento Ciudadano Patagonia sin Represas; Agrupación Jóvenes Tehuelches; Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén; Comisión Agua y Vida, Vicariato Apostólico de Aysén; Corporación Costa Carrera; Junta de Vecinos Michelatto de Puerto Aysén; Federación de Pescadores de Melinka; Sindicato de Pescadores Artesanales Nuevo Horizonte de Puyuhuapi; Agrupación de Mujeres Emprendedoras por un Futuro.

¹³⁰ Este es el petitorio se desagrega en: a) Solución al alto costo de los combustibles (petróleo, bencina, parafina, gas, leña); b) Salud de calidad (infraestructura, especialistas, recursos tecnológicos adecuados); c) Equidad laboral (sueldo mínimo regionalizado, nivelación de zona, estabilidad para los funcionarios públicos); d) Generar un procedimiento vinculante (plebiscito, consulta) para que sea la región la que decida sobre dos temas esenciales: la construcción de represas y el respaldo a Aysén como reserva de vida; e) Universidad pública regional de alta calidad y formación académica nacida de los intereses y necesidades de los ayseninos; f) Regionalización de los recursos naturales (agua, recursos hidrobiológicos, mineros, silvoagropecuarios); g) Tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca artesanal, producto de políticas públicas erradas que benefician esencialmente a los grandes industriales y exterminan nuestros recursos hidrobiológicos, además de entregar derechos de pesca en propiedad y recursos bentónicos para los 3.000 pescadores de la región de Aysén; h) Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básica (electricidad, agua, alimentos esenciales); i) Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes que viven en Aysén; y, j) Rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino.

¹³¹ Diario electrónico *El Mostrador*, 2 de enero del 2012.

Grimaldi grafica esto diciendo que las transformaciones ideológicas del socialismo democrático (y yo agregaría a la DC como partido progresista y de cambio a diferencia de sus pares europeos) han tenido un impacto al interior de los partidos, lo que explica en parte una crisis de la identidad partidaria y una tendencia a la fragmentación. La matriz cultural clásica de estos partidos progresistas ligada a los sectores obreros y asalariados de las capas medias ha sido prácticamente desintegrada por el predominio ideológico del neoliberalismo. En sus palabras:

“Estos partidos carecen de líderes y cuadros de origen popular y sobresalen aquellos provenientes de la alta gestión pública, profesiones liberales y también de sectores de nuevos emprendedores. Ciertamente las bases de los partidos de izquierda han cambiado y ninguno puede sobrevivir electoralmente (tampoco la derecha) sin apelar a una composición ‘multiclasista’ de sus bases, pero el discurso obrerista ha prácticamente desaparecido entre los socialdemócratas. La dificultad de actuar en conjunto con los sindicatos es una muestra de aquello”.¹³²

Joaquín Estefanía, periodista y ex director del diario *El País*, desde otra latitud reflejaba este mismo malestar de la ciudadanía y cuyo diagnóstico es muy aplicable a Chile, al señalar que las condiciones de vida han mejorado más en el último siglo que en todo el resto de la humanidad... Vivimos tiempos en los que la riqueza mundial, las conexiones internacionales y la capacidad tecnológica son mayores que nunca, pero, al mismo tiempo, es el período en que más grandes son las desigualdades. Se avanza en los niveles técnico y económico y se retrocede en el aspecto social. La desigualdad crea una especie de apartheid que aumenta a medida que crece la economía.¹³³ Se pregunta entonces, ¿para qué votar, si la política de un gobierno libremente elegido no es tan determinante para el bienestar de los ciudadanos como la acción de un grupo de operadores que actúan a miles de kilómetros de donde su decisión va a tener efecto? y/o va a depender de otros internos que controlan los mercados y por cierto están conectados a estas redes. Concluye que “se necesita de nuevo consenso para hacer la democracia más participativa e inclusiva”.¹³⁴

Y, segundo, emerge con fuerza la sociedad civil y sus nuevas tramas asociativas (redes ajenas a los partidos), donde el movimiento estudiantil acompañados de las regiones, ambientalistas y etnias, lideran la aspiración mayoritaria por modificar las

¹³² Diario electrónico *El Mostrador*, 9 de marzo de 2012.

¹³³ Joaquín Estefanía (2003), *La Cara Oculta de la Prosperidad: Economía para Todos*, Madrid: Editorial Taurus/Santillana.

¹³⁴ Joaquín Estefanía (2006), *La Mano Invisible. El Gobierno del Mundo*, Madrid: Editorial Aguilar.

reglas que ha impuesto el proyecto neoliberal de mercantilizar la vida. El ingreso de los estudiantes en la esfera pública para cuestionar el modelo de lucro que prima en la educación, generó una reflexión legítima y profunda que envolvió a la sociedad en su conjunto, transparentó otras demandas no resueltas y repolitizó a una sociedad “dormida” sobre el sentido del proyecto de país que se aspira: más justo e igualitario.

Jorge Valverde describe lúcidamente este nuevo escenario político y sus movilizaciones, análisis que acojo completamente como un retorno creciente del propio desarrollo democrático que pone un piso distinto sobre el cual partir el análisis, al decir que quienes nacieron entre finales de los 80 y principios de los 90 se podrían considerar parte de la generación limbo, dado que crecieron en una especie de nuevo transplacement “entre las cenizas de la dictadura y los albores de la democracia”. Esta generación se caracteriza por carecer de los traumas de la dictadura aunque igual los toman en cuenta para la elaboración de su pensamiento crítico y por haber dejado de lado el “*no estoy ni ahí*” de los jóvenes noventeros.

Agrega que mientras los que vivieron ambos períodos, el pasó de la dictadura a democracia los hizo ser más conformistas en un país democrático, con libertades, buenos índices económicos y donde el poder adquisitivo crecía constantemente, los de ahora solo conocen un tipo de sociedad (la democracia) y es la que cuestionan cuando lo relacionan al mundo laboral. Comandada por la generación limbo, en el 2011 comenzó un proceso revisionista sobre la sociedad que “tenemos”, para avanzar hacia la sociedad que “queremos” y cuyo resultado preliminar es un rotundo rechazo al establishment por las injusticias y desigualdades existentes.

Finaliza diciendo que nadie se convirtió de un día para otro. Afianzada la democracia y creciendo el país, lo que exigen es un “*New Deal*” (un nuevo consenso) tal como ocurrió en Estados Unidos pos la gran depresión de 1929, en donde el Estado vele por quienes no pueden defenderse por sí mismos y la economía no quede al alero de la utópica mano invisible que asigna eficientemente cual “Dios reparte riquezas a sus feligreses”.¹³⁵

Precisamente en el primer informe de la OCDE del 2012, estándar paradigmático para las élites y los medios de comunicación y algunos académicos en Chile, por primera vez se incluyeron duras críticas a un punto central de la desigualdad denunciada por los nuevos movilizados: el sistema tributario. Se remarcaron los mecanismos que favorecen

¹³⁵ blogs.cooperativa.cl/opinion/sociedad/20120314063541/el-paradigma-de-la-generacion-limbo/

a las élites y se detallaron prácticas, como la creación de sociedades de inversión para eludir el pago de impuestos,¹³⁶ y plantea el mínimo de la reforma urgente: eliminar el Fondo de Unidades Tributables (FUT), el fondo donde las empresas que registran utilidades que supuestamente van a invertir no pagan impuestos y que, en algunos casos, no invierten sino que retiran sin pagar impuestos.¹³⁷

El informe de la OCDE también destaca las innumerables exenciones de las que se benefician las élites (Chile es el país más desigual de la OCDE) y cuyo último ejemplo quedó registrado en una noticia de Eliodoro Matte, uno de los empresarios más ricos del mundo,¹³⁸ que pagó casi cero pesos en impuestos por la millonaria venta de un terreno en La Dehesa (uno de los barrios más elegantes del país), plata que hubiese servido para el financiamiento de un sin número de necesidades públicas.¹³⁹ Solo en contribuciones, por tenerlo como terreno agrícola con tres vacas y dos caballos, se ahorró de pagar \$ 7.080 millones (unos 14 millones 750 mil dólares a precio de enero del 2013).¹⁴⁰

En todo caso y adelantándose a los inevitables acontecimientos venideros con un propósito mediatizador y direccionador de la discusión para evitar un resultado más radical, el parlamentario de la UDI, Hernán Larraín, formuló una propuesta para el desarrollo y la igualdad social, que consiste en una modificación a la estructura tributaria. La iniciativa del congresista nació a raíz del proyecto de ley que anunció el gobierno que enviaría al parlamento sobre la misma materia. Larraín manifestó que su intención es generar un debate que permita estructurar los impuestos de una manera más justa, donde se suba el impuesto a la renta de las empresas de una forma progresiva que funcione igual que con las personas naturales, que comenzará en cero para quienes estén comenzando y llegar hasta un 28 por ciento para los que ganen más.¹⁴¹ Más allá del análisis de las cifras o fórmulas, lo importante es la inclusión de este tipo de temas y discusiones en la agenda nacional, de todos los actores políticos.

¹³⁶ Ramón López, profesor de la Universidad de Maryland, señala que “el 90 por ciento de la evasión la realiza el 5 por ciento más rico de la población”. En Marcela Ramos y Juan Andrés Guzmán, “Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera: cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos”, *ciperchile.cl*, 23 de enero de 2012.

¹³⁷ Ver Iván Weissman, “Reforma tributaria de Bachelet apuntaría al corazón”, diario electrónico *El Mostrador*, 10 de abril de 2013.

¹³⁸ El grupo Matte está en el lugar 86 de los más ricos del mundo con 10.200 millones de dólares. *La Tercera*, 19 de octubre de 2011, p. 30.

¹³⁹ “Informe de la OCDE crítica desigualdad y evasión en sistema tributario chileno”, en *www.biobiochile.cl*, 24 de enero de 2012.

¹⁴⁰ <http://ciperchile.cl/2013/01/14/los-matte-se-ahorrraron-7080-millones-en-contribuciones-por-terreno-en-la-dehesa/>

¹⁴¹ *CNN Chile*, 8 de marzo de 2012.

Por último, se ha empezado a perfilar los contornos de nuevos proyectos políticos para Chile con las innumerables propuestas en el plano político-institucional, económico, ambiental, cultural y valórico que han levantado múltiples actores de la sociedad civil y, con ello, se han levantado nuevos liderazgos y/o perfiles que cristalicen los anhelos de este cambio. Es decir, se camina hacia la inauguración de un nuevo paradigma social con las diversas movilizaciones sociales y el arrastre forzado de la dirigencias del amplio abanico del sistema de partidos hacia una democracia más inclusiva. Como lo expresó la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para el caso del Medio Oriente, pero muy válido también para la realidad chilena: “El statu quo se ha fracturado y ya no son aceptables las viejas formas de gobernar”.¹⁴²

Para que los partidos y coaliciones tengan más credibilidad, se legitimen y adquieran una nueva centralidad en este nuevo escenario, algunos deberán responder más fielmente a sus ideas clásicas (retornar a su esencia transformadora) y los más conservadores abrigar el cambio y, por lo mismo, realizar reformas mayores en sus programas partidarios y de gobierno. También se deberán renovar las élites partidarias dando paso a aquellos que no están imbricados con las redes de los grupos de interés conservadores e iniciar acercamientos hacia otras fuerzas democráticas pro cambio, en particular los movimientos sociales, que hoy gozan de mayor adhesión y credibilidad que las instituciones partidarias e incluso las republicanas.¹⁴³

Recogiendo plenamente los desafíos democráticos (enclaves) pendientes descritos por Siavelis [2009: 3-21] y a pesar de haberse avanzado en esta línea como lo demuestra la reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (Boletín N° 4.716-07), desde mi punto de vista la Concertación deberá transitar desde la gobernabilidad a la gobernanza si quiere asegurar el cumplimiento de su promesa y mantener una preponderancia en el poder político (legitimidad para volver al Ejecutivo).

Esto, entre otros, empieza por la necesidad de cambiar y deselitizar la política de acuerdos (agenda socio-política), transparentarlos y hacerlos con participación de la ciudadanía, por ejemplo, para atacar la mala distribución de los ingresos.

También está la necesidad de mejorar la calidad de la política, democratizando los partidos y sus métodos, evitando los cuoteos con concursos públicos donde se verifiquen

¹⁴² En la 53ª Conferencia de la Unión Africana, Addis Ababa, 13 de junio de 2011. *Nueva Sociedad* 240: 41.

¹⁴³ Ver, tercera versión de la Encuesta Auditoría de la Democracia. En [http:// www. auditoriaalademocracia.org](http://www.auditoriaalademocracia.org)

perfiles y estándares profesionales, y evitando que los caudillos nominen a los candidatos a través de primarias abiertas, y a nivel de la coalición ampliarla hacia actores de la sociedad civil (volver a volcarse a la sociedad y sus organizaciones) y otras vertientes de pensamiento, entre otros.

Por último, obliga imperativamente a abrir a la discusión a temas tabú como del modelo económico en la perspectiva de perfeccionarlo y/o superarlo con la búsqueda de una ecuación más adecuada que garantice crecimiento con equidad y evitar las injusticias que presenta el actual mercado (Pomar las llama reformas estructurales democrática-populares¹⁴⁴), por cierto también necesarias en casi todo el globo.

Es decir, se necesita romper con lo que Ulrich Beck¹⁴⁵ denomina la privatización de los beneficios y la socialización de los riesgos y costos a través de la reconstitución de un pacto, de carácter ético y político, entre el mercado y la sociedad, el que antes se había articulado en base a las teorías económicas de John M. Keynes y el rol del Estado nacional (benefactor). Es decir, pasar de la democracia de los acuerdos a la democracia de las mayorías.¹⁴⁶

La alternancia en la presidencia con el triunfo de Sebastián Piñera le ha servido a la Concertación para apreciar mejor la obra realizada, mirar los cambios acontecidos, hacer una introspección y, desde ahí, hacer una nueva propuesta al país, cosa que, aunque con fuertes resistencia, remezones, retardos y problemas, ya está tratando de hacer como lo refleja el siguiente titular del diario *La Tercera*: “Concertación acelera tratativas para su reformulación y se da plazo hasta 5 de octubre de 2011”.¹⁴⁷

Un ejemplo reciente de este esfuerzo (2012) de resintonizarse con la gente por parte de la Concertación y asumiendo una cuota de riesgo, ha sido la realización de primarias en 141 comunas, con más de 500 candidatas y candidatos, para elegir el abanderado del conglomerado para competir en las elecciones municipales 2012. Las otras (de un total de 346 comunas) tuvieron un candidato nominado por su alta e indiscutida legitimación

¹⁴⁴ Pomar, Valter (2011), “Balance y desafíos de las izquierdas continentales”, *Nueva Sociedad* 234: 46-59.

¹⁴⁵ Ulrich Beck (1998), *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Editorial Paidós.

¹⁴⁶ Domingo Lovera, “El problema de la democracia de los acuerdos”, diario electrónico *El Mostrador*, 29 de enero de 2010.

¹⁴⁷ *La Tercera*, 13 de septiembre de 2011, p. 6.

social y/o fueron parte de negociaciones para mantener los equilibrios en la coalición o de razón electoral (pacto por omisión con el PC).¹⁴⁸

Carlos Salas Lind en el marco del path dependence, escribía que “a dos años de terminar su mandato, irónicamente las circunstancias presionan a Sebastián Piñera a ser el Presidente que termine el lentísimo período de transición política chilena, a ser el mandatario que definitivamente se ocupe de derribar los obstáculos más perdurables de una constitución redactada en dictadura. En este plano, junto a la adopción de la inscripción automática y voto voluntario, una reforma sustancial al sistema electoral binominal podría convertirse en una fórmula práctica y perceptible, a la hora de enfrentar el gran desencanto con la clase política y el statu quo que fomenta sus peores vicios”.¹⁴⁹ Sin embargo, y más allá de constatar la falta de voluntad política de parte de la derecha para cambiar el sistema electoral binominal y/o que la Constitución para ser democrática necesita más cambios que el binominal y una relegitimación ciudadana, rescato el “path único” que han impuesto los retornos crecientes de la democracia.

De todas formas, y citando una frase que expresó en una ocasión el ex presidente Lagos, “La Concertación no es simplemente un grupo de políticos que se reúne, porque está profundamente arraigada en el alma nacional” a partir del resultados de la democratización del país y sus efectos en la fuerte adhesión al progresismo, al cambio, a la participación, a una mayor justicia e igualdad. Y, en términos de potencial futuro, tiendo rescatar lo expresado por el sociólogo Alejandro González Llaguno cuando, al colocar a la Concertación entre el abismo y la gloria, dice que:

“(…) no se puede desconocer que en la actualidad al ser una fuerza electoral importante (a pesar de la tendencia a la baja), al tener presencia relevante en el Parlamento, al pertenecer a tradiciones políticas de larga data y al tener el mejor posicionamiento presidencial la siguen ubicando como un actor político fundamental para Chile”.¹⁵⁰

Lo relevante de esta coalición la encontramos, como se expresó, en el encuentro político del centro con la izquierda en una perspectiva de transformación gradual. Ahí está la identidad fundacional de una coalición programática-pragmática. Sin embargo, hay varias razones más que fortalecen esta alianza histórica hoy.

¹⁴⁸ Un interesante análisis hace Mauricio Morales, Director del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales, en “Primarias de la Concertación: Participación y Resultados”, publicado en www.tresquintos.com, 12 de abril de 2012.

¹⁴⁹ www.elboyardia.cl/node/13511

¹⁵⁰ Diario electrónico *El Mostrador*, 15 de marzo de 2012.

Primero que nada está, como también se ha señalado, la posibilidad cada vez más concreta de volver a La Moneda. Para muchos este es el principal factor que mantiene la unidad de la coalición. Partidos con vocación de mayoría y de poder no van a perder esta nueva oportunidad. En este escenario, la lógica del largo plazo se impone a la de corto plazo. La derecha ha logrado gobernar por sí sola porque logró los votos necesarios. Sin embargo, ni la izquierda ni el centro político hoy pueden gobernar por sí solos como mayoría; no le alcanzan los votos y les resulta difícil recurrir a otros actores del sistema, por lo que se necesitan y lo saben.

También está la amistad construida entre muchos de sus dirigentes a través de muchos años de trabajo en común durante la dictadura y luego de gobierno, elemento que también contribuye a la unidad. Sin duda, hay deferencias entre los partidos y transversalmente entre algunos de sus miembros, pero también hay relaciones de amistad, la construcción de un marco normativo-cultural común y de coincidencias programáticas que generan condiciones para la unidad política. Es cierto, los tiempos son otros, pero la gesta del Plebiscito de 1988 no es de fácil olvido. Es más, el clivaje representado en el SÍ y el NO sigue vigente en Chile. No es casualidad, por tanto, que el tema de los Derechos Humanos siga siendo un elemento de unidad concertacionista y opositora.

Luego está la convergencia para operar como oposición en el Parlamento. A la hora de votar los proyectos y a pesar de algunos bochornos, el trabajo en bloque es otro elemento que contribuye a la unidad. Más aún, esto ha visto fortalecido con la posibilidad de vuelta al gobierno y la necesidad de reimpulsar el “relato de la igualdad” desde el Parlamento y ajustar las tensiones existentes entre coalición y sociedad civil. Si la Concertación original tenía la misión de democratizar, hoy la Concertación 2.0 tiene la misión de la inclusión. Esta ha sido una bandera de lucha histórica del centro político y de la izquierda en Chile desde sus respectivas fundaciones.

Claramente, lo que conocimos como Concertación hace veinte años ha variado con la derrota electoral del 2010. La Concertación cambió en conjunto con las demandas de hoy. Ha debido ajustar sus promesas, proyectos y prácticas a los nuevos tiempos, y ha debido hacerlos desde la oposición. Pero claramente ha sentado las bases para la formulación de un nuevo paradigma para el país (resultado positivo esencial para una

coalición programática como la Concertación y que también se está dando a nivel regional).¹⁵¹

Asumo, en este sentido, lo insinuado por Garretón (2012: 62-64) en cuanto a que en el Chile de la segunda década del siglo XXI hay una refundación de las relaciones del Estado y la sociedad. Primero, a través de un núcleo ético compartido que sirve de factor cohesionador y de pertenencia social, y que recoge aprendizajes, historia y universalismos como valoración de los derechos humanos, género, medioambiente, pueblos originarios y en general la democracia y sus valores. En segundo, persiguiendo la generación de bases institucionales-estructurales que favorezcan la “no existencia de varios países al interior de uno”. La igualdad y/o justicia social suponen la intervención de un ente distribuidor (el Estado) con capacidades para hacerlo. Y, tercero, una forma de organización política democrática decidida por la ciudadanía a través de su Constitución que permitan presencia popular efectiva (control) en la toma decisiones de ese Estado más interventor.

En Chile, como en el resto de América Latina, se está levantado un nuevo paradigma más de izquierda (socialdemócrata, progresista o criollo como queramos llamarlo) que tiende a superar el neoliberalismo y su propuesta de un mercado excesivo y de la suplantación de la política por la eficiencia tecnocrática para resolver las demandas.

¹⁵¹ Marco Aurelio García (2008) “Nuevos gobiernos en América del Sur. Del destino a la construcción de un futuro”, en *Nueva Sociedad* 217: 118-126.